

35ª REUNION — 3ª SESION ORDINARIA DE PRORROGA — OCTUBRE 24 Y 25 DE 1973

Presidencia de los señores diputados Salvador F. Busacca, Isidro J. Odena y Luis A. García

Secretarios: doctor Alberto L. Rocamora y señor Ludovico Lavia

Prosecretarios: señores Manuel Rodríguez González y Alberto Rodríguez Gallardo

DIPUTADOS PRESENTES:

ACUNA, Hipólito
AGUIRRE, Mario D.
ALVAREZ GUERRERO, Osvaldo
AMADO SALEME, José
AMALO, Mario O.
AMAYA, Mario Abel
AMERISE, José Carmelo
ARAGONÉS, Carlos Osvaldo
ARANA, Tomás Pedro
ARATA, Juan Carlos
ARBO, Tomás Ameghino
ARIANI, Adriano
ARIGÓS, Ramón Eduardo
AREAYA, Jorge Francisco
ARRÚE, Willebrorde
ASMAR, Ramón
AUYERO, Carlos Alberto Camilo
AVILA, Agustín Alfredo
AZURMENDI, Ernesto
BAJCZMAN, Raúl I.
BALESTRA, Ricardo Ramón
BARBARO, Julio D.
BARRIONUEVO, Roque E.
BARTOMIOLI, Héctor Luis
BÉHERAN, Arnoldo Mario
BELLISIO, Victorio Alberto
BENEDETTI, Osvaldo Ernesto
BLANCO, Manuel
BONAS, Abraham Efraín
BONIFATTI, Arolinda S. A.
BRAVO, Carlos Alberto
BRAVO, Federico S.
BRITO LIMA, Alberto
BUSACCA, Salvador F.
BUSTOS, Tomás Roberto
CABANA, Manuel I.
CABEZAS, José Humberto
CALABRESE, Pablo
CAMPBELL, Oscar S.
CAMPOS, Ernesto Manuel
CAPILLO, José
CARDENAS, Juan Carlos
CARRAL TOLOSA, Humberto
CARRERAS, Ruperto R.
CASAZZA, Luis Angel
CASTELLANO, Hugo Luis
CATALANO, José Armando
CITATI, Angel
COLELLO, Clemente J.
COMINGUEZ, Juan Carlos
COSTARELLI, José
CROATTO, Armando Daniel
CROCCO, Luis Ferdinando
CHAQUIREZ de PALACIOS, María
D'ANGELO, Lorenzo Francisco

DAVICO, Miguel Angel
DAY, Alberto Ricardo
DE APARICI, Ricardo José Manuel
DE LUCA, Ricardo
DESPERBASQUES, Rodolfo Eduardo
DÍAZ ORTIZ, Santiago Francisco
EGUIREUN, Enrique
ESPECHE, Juan Bautista
ESPONDABURU, Raúl Horacio
ESQUIVEL, Faustino
ESTIGARRIA, Agustín Tomás
FADUL de SOBRINO, Esther Mercedes
FALABELLA, Francisco José
FERNANDEZ, Dante Dionisio
FERNANDEZ, Juan Máximo
FERNANDEZ BEDOYA, Mariano
FERNANDEZ GILL, Guillermo Carlos
FERREYRA, Jorge Washington
FLORES, José María F.
FONTE, Carlos A.
FRANCO, Hugo Armando
FRESCHI, Pedro José
GAITAN, Adolfo Alberto
GALVAN, Raúl Alfredo
GALLO, Carlos R.
GANEM, Héctor
GARCIA, Luis Antonio
CARONA, Alberto A.
GARRE, Nilda Celia
GIMÉNEZ, Nicolás Alberto
GOLÉ, Tomás Juan B.
GONZALEZ, Ricardo A.
GRAU, Mario Agustín
GUALCO, Jorge Nelson
GUERRERO, Antonio Isaac
GUZMAN de ANDREUSSI, María Cristina
HAIEK, José
HARRINGTON, Luis José D.
HUEYO, Horacio
HUGHES, Gilbert
INSÚA, Carlos Raúl
ITURRIETA, Anibal A.
KELLY, Rodolfo Feliciano
KUNKEL, Carlos Miguel
LABAKE, Juan Gabriel
LATRUBESSE, Francisco Alberto
LAVALLE, Mario
LAZZARINI, José Luis
LENCINA, Luis A.
LÉPEZ, Lysis Augusto
LIMA, Hugo Ramón
LITERAS, María Haydée A. de
LÓPEZ, Domingo
LÓPEZ, Horacio Fidel
LÓPEZ de GALLO, Amella
LORENCES, Mariano Rufino

LUCENA, Luis Arnaldo
LUMELLO, José Elio
LLANO, Juan Pedro
LLORENS, Roberto Oscar
MACRIS, Antonio J.
MALDONADO, Clemente
MARQUEZ, Alfonso Carlos
MARTÍNEZ, Juan Antonio
MARTÍNEZ, Pedro Nicolás
MARTOS, Mario Saúl
MASSOLO, Eduardo A. R.
MASTOLORENZO, Vicente
MAUHUM, Fernando Hugo
MERA FIGUEROA, Julio I.
MERCHENSKY, Marcos
MIGLIOZZI, Julio Alberto
MIRA, Jesús
MOLINA, Gilberto H.
MOLINA, Manuel Isauro
MOLINA ZAVALIA, Armando
MOLINARI ROMERO, Manuel Ernesto
MOMBELLI, Fausto J.
MONSALVE, Evaristo A.
MONTERO TELLO, Régulo L.
MORAL, Angel
MORENO, Antonio E.
MORENO FERRER, José Carlos W.
MORINI, María Teresa Merciadri de
MOYANO, Francisco J.
MUNIZ BARRETO, Diego
MUSACCHIO, Vicente Miguel
MUSSO, Eufemia
NARANJO, Decio B.
NATALE, Ricardo T.
NICOLICHE, Lisardo Oscar
NOSIGLIA, Plácido Enrique
ODENA, Isidro J.
OSELLA MUÑOZ, Enrique Emilio
PALACIO DEHEZA, Carlos
PARENTE, Rodolfo Domingo
PASCUAL, Paulino Rubén
PATALAGOTIA, Osvaldo E.
PAZ, Guido Ulises
PEDRINI, Ferdinando
PEREIRA, Antonio
PETRUCELLI, Agustín
PONCE, Rodolfo Antonio
PORTERO, Héctor
PORTO, Jesús E.
RABANAL, Rubén Francisco
RACCHINI, Juan Nicolás
RAFAEL, Juan
RAMÍREZ, Juan Manuel
RATTI, Luis Carlos
RITVO, Miguel
RIZO, Eusebio Victor

RODRIGUEZ, Alfredo S.
 RODRIGUEZ FLORES, Argentino
 ROJAS, Ramón Pablo
 ROLANDO, Esteban Domingo
 ROMAN, Irene Graciela
 ROMERO, Carlos Alberto
 ROMERO, Juana N.
 ROTA, Silvana María I.
 RUBEO, Luis
 RUIZ VILLANUEVA, Arturo
 SALOMÓN, Jorge
 SALVADOR, Nicolás
 SALVATIERRA, Julio Domingo
 SAMBUEZA, Osvaldo
 SANCHEZ AHUMADA, Luis Alberto
 SANCHEZ TORANZO, Nicasio
 SANDLER, Héctor Raúl
 SANGUINETI, Virginia Luisa
 SARBOLI, Rubén Juan
 SARLI, Osvaldo Raúl
 SAÚL, Roberto
 SERVINI GARCÍA, Clara Cristina
 SILEONI, Nelo I.
 SILVA, Analicio
 SLAMOVITS, Ludovico
 SOBRINO ARANDA, Luis Alberto
 SOLANA, Jorge D.
 STECCO, Alberto Eleodoro
 SUAREZ, Humberto F.

SUAREZ, Leopoldo M.
 SUELDO, Horacio Jorge
 SULETA DE ARRAYA, Arminda
 SVRSEK, Enrique A.
 TACHELLA, Eliberto S. J.
 TAGLIAFERRO, Jorge
 TOLLER, Roberto Lino
 TRABOULSI, Eduardo Elías
 TRÓCCOLI, Antonio A.
 URDÍNEZ de VOLPE, Clotilde Isolina
 VACCAREZZA, Eduardo H.
 VALENZUELA, Héctor R.
 VALERI, Salvador
 VÁZQUEZ POL, José
 VERGARA, Roque Antonio
 VESCO, José Luis
 VIDANA, Roberto
 VILLALBA, Bernardo Samuel
 VINARDELL MOLINERO, Miguel
 VINTI, Carmelo
 VITTAR, Rodolfo Oscar
 ZAMANILLO, José Miguel
 ZAPATA, Hipólito Bernardo

AUSENTES, EN COMISION:

BORRAS, Raúl Antonio
 FERNANDEZ VALONI, José Luis
 GASS, Adolfo

IMBAUD, Carlos Alfredo
 LOPEZ, Miguel Angel
 MARINO, Rafael Francisco
 SANGIACOMO, Ricardo Arturo
 VIALE, Jorge Omar

AUSENTES, CON AVISO:

AGUIRRE de SAIBENE, Luisa E.
 MONACO, Horacio Miguel

AUSENTES, CON LICENCIA:

ACEVEDO, Carlos Luis
 ARCE, Rodolfo Juvenio
 CAMUS, Jorge M.
 COSSY ISASI, Edgar
 FALÚ, Ricardo Munir
 FARIAS, Eduardo Isidro
 FUENTES, Pedro Alfredo
 GLELLEL, Jorge
 LASTIRI, Raúl Alberto
 MIGUEL, Pedro Honorio
 ROSAS, Alberto Horacio
 SALIM, Luis
 TULA DURÁN, Joaquín

AUSENTE, CON PERMISO:

VILLADA, Mario Anselmo

SUMARIO

1.—Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 2925.)

2.—Asuntos entrados:

I.—Poder Ejecutivo:

- 1.—Mensaje y proyecto de ley: facultar al Poder Ejecutivo a ceder los derechos sobre parte indivisa de una bóveda situada en el cementerio del Oeste. (Pág. 2925.)
- 2.—Mensaje: contesta la declaración sancionada por la Honorable Cámara (página 1090), vinculada al llamado a licitación para la pavimentación de la ruta nacional 40, en el tramo comprendido en la provincia del Neuquén desde el límite con la provincia de Mendoza hasta Zapala. (Pág. 2926.)
- 3.—Mensaje: contesta la declaración sancionada por la Honorable Cámara (página 2040), sobre instalación de casinos en el radio de la ciudad de Buenos Aires. (Pág. 2926.)
- 4.—Mensaje: contesta la declaración sancionada por la Honorable Cámara (página 1089), sobre construcción de un camino entre la ciudad de Gálvez y la ruta nacional 11, provincia de Santa Fe. (Pág. 2927.)

II.—Comunicación del Honorable Senado. (Página 2927.)

III.—Dictámenes de comisión. (Pág. 2927.)

IV.—Dictámenes observados. (Pág. 2929.)

V.—Comunicaciones de comisiones. (Pág. 2929.)

VI.—Comunicaciones oficiales. (Pág. 2929.)

VII.—Peticiones particulares. (Pág. 2929.)

VIII.—Proyectos de ley:

- 1.—De los señores diputados Moyano y Tula Durán: incorporación del licenciado en administración como profesional idóneo para ejercer la sindicatura. (Pág. 2930.)
- 2.—Del señor diputado Bellisio: pensión a doña Elba Elsa Fernández. (Página 2930.)
- 3.—Del señor diputado Carral Tolosa: declaración de la enfermedad de Chagas como problema sanitario de prioridad nacional. (Pág. 2931.)
- 4.—Del señor diputado Calabrese: inclusión de los oficiales de justicia y ujieres en el escalafón de magistrados y funcionarios del Poder Judicial. (Página 2932.)
- 5.—Del señor diputado Davico y otros: suspensión en todo el territorio de la República, hasta el 31 de diciembre de 1973, de los trámites en los juicios de desalojo. (Pág. 2933.)
- 6.—Del señor diputado Farias y de la señora diputada Bonifatti: implantación del pasaje de transporte turístico. (Pág. 2934.)
- 7.—Del señor diputado Farias y de la señora diputada Bonifatti: creación de la cartilla turística escolar. (Página 2935.)
- 8.—De los señores diputados Salim y Rafael: prórroga de la suspensión de los juicios de desalojo hasta el 31 de diciembre de 1973. (Pág. 2935.)

diputados Vergara, Saúl y Romero (J. N.) sobre construcción del camino internacional a Chile por el paso de Peñas Negras, provincia de La Rioja. Se sanciona. (Pág. 3033.)

28.—Consideración del dictamen de la Comisión de Transportes en el proyecto de declaración del señor diputado Viale sobre construcción de desagües en Casilda, Santa Fe, por Ferrocarriles Argentinos. Se sanciona. (Pág. 3034.)

29.—Consideración del dictamen de las comisiones de Industria, de Comercio y de Presupuesto y Hacienda en las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley en revisión sobre defensa del trabajo y la producción nacional. Se sanciona definitivamente. (Página 3035.)

30.—Consideración del despacho de las comisiones de Legislación General y de Vivienda en los proyectos de ley de los señores diputados Moreno, Troublis y otros, Davico y otros, Salim y Rafael, sobre suspensión de desalojos urbanos hasta el 31 de diciembre de 1973. Se sanciona. (Pág. 3036.)

31.—Consideración del dictamen de las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Comercio y de Asuntos Constitucionales sobre el artículo 2º del proyecto de ley en revisión sobre comercialización de granos. Se sanciona. (Pág. 3037.)

32.—Consideración del despacho de las comisiones de Industria, de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas en las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley en revisión sobre promoción minera. Se sanciona. (Pág. 3047.)

33.—Consideración del dictamen de las comisiones de Industria, de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas en las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley en revisión sobre promoción industrial. Se sanciona (Página 3049.)

34.—Consideración del dictamen de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Justicia en el proyecto de ley en revisión sobre modificación del régimen de jubilaciones para magistrados judiciales. Se sanciona. (Pág. 3051.)

35.—Consideración sobre tablas del proyecto de resolución de los señores diputados Vittar y otros sobre situación de ciudadanos argentinos en la República de Chile. Se aprueba. (Pág. 3097.)

36.—Moción del señor diputado Zamanillo de que la Honorable Cámara pase a cuarto intermedio hasta las 15 del día de la fecha. Se aprueba. (Página 3098.)

37.—Apéndice:

I.—Sanciones de la Honorable Cámara. (Página 3099.)

II.—Inserción. (Pág. 3105.)

—En Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de octubre de 1973, a la hora 16 y 40:

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Busacca). — Con la presencia de ciento veintinueve señores diputados, queda abierta la sesión.

Invito al señor diputado por el distrito electoral de Corrientes, don Tomás Ameghino Arbo, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

—Puestos de pie los señores diputados y el público asistente a las galerías, el señor diputado Tomás Ameghino Arbo procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Busacca). — Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados que figuran en el boletín número 20, el cual obra en poder de los señores diputados.

1

Poder Ejecutivo

1

Buenos Aires, 17 de octubre de 1973.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo nacional tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad para someter a su consideración un proyecto de ley por el que se propicia la cesión a favor de las señoras María Luisa Argina Haydee Massini y Larguía, Elena Larguía de Massini, Marta Etchenon de Acuña y Susana Manuela Etchenon Massini, de los derechos sobre la porción indivisa de una bóveda ubicada en el cementerio Oeste de la Capital Federal, formada por las sepulturas doce (12) y trece (13) del tablón quince (15), manzana nueve (9) de la sección quinta (5ª), de la cual el señor Esteban Jesús Massini Posse era titular del treinta y tres con treinta y tres centésimos por ciento (33,33 %). Cabe referir que el porcentaje restante pertenece a los familiares del causante, a cuyo favor se propicia la cesión.

Resulta oportuno señalar que la herencia instituida por el señor Esteban Jesús Massini Posse a favor del Hospital Nacional José T. Borda, organismo descentralizado del Ministerio de Bienestar Social y de siete (7) instituciones benéficas de carácter privado, fue aceptada en lo que se refiere al Estado nacional mediante decreto 1.222/70.

La medida que se propugna tiene como fundamento la falta de utilidad para el Estado de la porción que en definitiva pueda corresponderle en la bóveda que integra el acervo hereditario del causante, como además su falta de valor económico.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN D. PERÓN.
José López Rega.

sulas como la presente y con un hábil manejo de los expedientes se perjudique a la industria argentina de bienes de capital, cuya pujanza es condición indispensable de nuestro desarrollo. Y por otra parte, regímenes como el presente han llevado a una sobreutilización de un capital subsidiado en detrimento de una utilización intensiva de la fuerza de trabajo desocupada, a la que en definitiva es a la que se busca favorecer. Tal el caso que he mencionado otra vez del régimen de promoción de Tucumán, dirigido a reparar el inconsulto cierre de los ingenios durante el año 1966: un régimen de promoción destinado por lo tanto fundamentalmente a lograr la creación de puestos de trabajo para los tucumanos; pero que al consistir principalmente en exenciones a la importación de bienes de capital y subsidios a la inversión, ha llevado al establecimiento de industrias con tecnologías intensivas en capital pero con poca ocupación de personas. Dándose así la paradoja de que se ha subsidiado al capital para que aumente sus beneficios en Tucumán, pero el sacrificio de la comunidad no ha redundado en el objetivo prioritario de absorción de los desocupados.

Otro punto señalado oportunamente como disidencia al proyecto presentado por el Ejecutivo ha sido el referente a la automaticidad que propiciamos en el otorgamiento de los beneficios cuando las empresas cumplan con condiciones clara y previamente establecidas. En este aspecto nada se ha adelantado, y ello es lamentable, porque en definitiva, aparte de los evidentes inconvenientes señalados en su momento, atenta contra la eficacia y la permanencia de la ley de promoción.

En tercer lugar sostuvimos en su momento que correspondía al Congreso, y no al poder administrador, la fijación de las zonas de promoción ya que ello debía ser una decisión política que solamente los representantes del pueblo de la Nación y de las provincias podían legítimamente adoptar; nunca podía dejarse en manos del Poder Ejecutivo, y menos aún en las de cualquier organismo técnico, el poder de hacer prosperar o empobrecer región alguna. Es por ello que entendemos que la decisión del Senado de fijar en la ley las diversas zonas promovidas es un paso positivo en el sentido indicado, aun cuando tal fijación de zonas sea incompleta por dejarse librado al Ejecutivo la determinación de los polos de desarrollo, y aun cuando puedan ser discutibles algunos de los criterios utilizados. Adhiero en este sentido a las palabras del senador Cantoní en la parte final de su exposición.

Por último, habíamos señalado en su oportunidad que el proyecto del Poder Ejecutivo adolecía de una grave falla al no prever de ninguna manera la intervención directa del Estado a través de sus empresas en las tareas de promoción regional, toda vez que la experiencia internacional señala claramente la imposibilidad de que en las regiones deprimidas algún estímulo o subsidio razonable logre que la iniciativa privada realice las inversiones adecuadas; y antes de que los subsidios tengan que ser tan altos que prácticamente sea el Estado el que corre los riesgos y la empresa privada la que se lleve los beneficios, es más racional la intervención directa del Estado. Vemos en tal sentido que el debate en Senadores ha recogido esta inquietud, aunque sin que ella se vea concretada en el articulado de la ley.

Por estas consideraciones manifestamos nuestro voto favorable al despacho, con las disidencias parciales en los artículos que correspondan a lo que en estos fundamentos se señala.

Guillermo Carlos Fernández Gill. — Angel Moral.

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a votar en general.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a votar en particular.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — Queda sancionado el proyecto de ley (1).

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

34

JUBILACIONES DE MAGISTRADOS JUDICIALES

(Orden del día número 118)

Dictamen de comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Justicia, en mayoría, han considerado el proyecto de ley venido en revisión sobre modificación del régimen de jubilaciones para magistrados judiciales; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña, y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Los magistrados judiciales, fiscales, peritos con jerarquía equivalente a la de fiscal de primera instancia, asesores, defensores, secretarios, secretarios y prosecretarios de Cámara, director médico y demás funcionarios del Poder Judicial con categorías de idéntica remuneración, que acrediten una antigüedad de veinticinco años de servicios y una mínima de ocho años en el ejercicio de funciones en el Poder Judicial de la Nación o de las provincias, siempre que opten por los beneficios de esta ley dentro de los treinta días a contar desde la fecha de su promulgación, podrán jubilarse en las condiciones establecidas por los decretos leyes 18.464 del año 1969 y 20.433 del año 1973, sin límite de edad, incluyendo el reconocimiento de los servicios que hayan prestado en la administración pública nacional, provincial o municipal, en la docencia, en el ejercicio de la profesión o en la actividad privada.

(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice.

Art. 2º — Por esta única vez, los magistrados y funcionarios a que se refiere el artículo anterior, que tuviesen como mínimo sesenta años de edad, podrán acogerse dentro de igual plazo a los beneficios jubilatorios vigentes, aunque éstos exigiesen un mayor límite de edad. Vencido ese plazo, quedarán sometidos al régimen establecido por el decreto ley 18.037 del año 1968.

Art. 3º — Quienes ejercitasen los derechos establecidos en los artículos que anteceden, tendrán la obligación de permanecer en sus cargos hasta que sean nombrados sus reemplazantes. En este último caso, y hasta tanto se les acuerde la prestación jubilatoria, percibirán mensualmente a cuenta de la misma el setenta y cinco por ciento de sus haberes.

Art. 4º — Las disposiciones establecidas en esta ley no serán de aplicación a los magistrados y funcionarios judiciales designados con posterioridad al 24 de mayo de 1973, quienes continuarán sometidos al régimen previsional vigente.

Art. 5º — Los magistrados y funcionarios que hubiesen cesado a partir del día 1º de junio de 1973, podrán acogerse a los beneficios de esta ley.

Art. 6º — Las prestaciones que correspondan abonar de acuerdo con esta ley, a beneficiarios que no reúnan los requisitos establecidos por los decretos leyes 18.464 del año 1969 y 20.433 del año 1973, se cargarán a rentas generales, hasta que aquéllos cumplan la edad exigida por los citados decretos leyes.

Art. 7º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de las comisiones, 2 de octubre de 1973.

Domingo López. — Pablo Calabrese. — María Chaquírez de Palacios. — Francisco José Falabella. — Alberto Brito Lima. — Nilda Celia Garré. — Carlos Osvaldo Aragonés. — José Humberto Cabezas. — Arnoldo Mario Béheran. — Carlos Miguel Kunkel. — Antonio E. Moreno. — Enrique Emilio Osella Muñoz. — Irene Graciela Román. — Arturo Ruiz Villanueva. — Jorge Salomón. — Nicasio Sánchez Toranzo. — Analicio Silva. — Arminda Suleta de Araya. — Bernardo Samuel Villalba.

En disidencia parcial:

Eduardo A. R. Massolo. — Horacio Hueyo. — Carlos A. Fonte.

En disidencia total:

Carlos Raúl Insúa. — Rafael Francisco Marino. — José Luis Vesco.

En disidencia parcial

En disidencia parcial respecto del artículo 2º por considerarlo violatorio de la garantía de inamovilidad de los jueces establecida por la Constitución Nacional, y en cuanto al artículo 5º por afectar la igualdad ante la ley y el espíritu amplio de la amnistía votada por este Congreso.

Horacio Hueyo. — Eduardo A. R. Massolo. — Carlos A. Fonte.

En disidencia total

En disidencia total por constituir el sistema que se proyecta un irritante privilegio en relación con los regímenes previsionales ordinarios de toda la clase pasiva del país.

Rafael Francisco Marino.

En disidencia total por estimar que el proyecto vulnera la independencia del poder judicial, la inamovilidad de los jueces, y las remuneraciones a que se refiere el artículo 96 de la Constitución Nacional.

José Luis Vesco.

Señor presidente de la Comisión de Justicia:

Formulo por intermedio de la presente las consideraciones que me merece el dictamen de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Justicia sobre el proyecto de ley sobre modificación del régimen de jubilaciones para magistrados judiciales y que viniera en revisión a esta Honorable Cámara.

Al respecto expreso mi disidencia total con el proyecto en relación que el mismo resulta realmente lesivo para todas las partes que en él intervienen como así también para la escala de valores que con la implantación del criterio queda establecida.

Estimo que si la medida se refiere a los jueces sin acuerdo, el proyecto representa realmente la instauración de un régimen de excepción premiando a quienes aceptaron desempeñar funciones sin que su designación se realizare conforme a las prescripciones constitucionales al efecto. Esto significa la convalidación de circunstancias que nunca se habían reclamado anteriormente dado que los precedentes al respecto, referidos siempre a los hechos posteriores a los golpes de estado, muestran la amplia posibilidad de las instituciones de la Constitución para aceptar o rechazar todo lo que no se ajustaba a lo establecido por nuestra Carta Magna.

En los casos en que se considere que un magistrado no se desempeña con la modalidad y rectitud que su investidura exige y cuente con una designación conforme a los requerimientos de la Constitución, la misma establece el método corrector de las deficiencias anotadas, dentro del cual juega un papel preponderante el Congreso de la Nación mediante el juicio político.

Por todo lo expuesto y dado que del proyecto no se desprenden fundamentos que permitan asignar un enfoque distinto al problema en cuestión es que ratifico conforme a lo expresado precedentemente mi total disidencia con el asunto en trámite.

Carlos Raúl Insúa.

INFORME

Honorable Cámara:

Débase tratar ahora un proyecto de ley que viene con sanción del Honorable Senado y cuyo dictamen presentamos a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados persuadidos de que, al hacerlo, ponemos en conocimiento de los señores representantes del pueblo un asunto que, por sus particulares características institucionales, ha sido debatido ampliamente por la opinión pública a través de distintos voceros periodísticos y entidades representativas ligadas al quehacer judicial, puesto que a él se refiere.

Saben muy bien los señores diputados cuáles son las resonancias que tienen en dichas entidades y en los diarios de todo el país el estudio de proyectos como éste que, como todos los que tiene a consideración este cuerpo legislativo, están destinados a reconocer lealmente el esfuerzo, el sacrificio y el valor cívico de los ciudadanos cuando han debido desempeñar una función que, de alguna manera, trajo paz y progreso a nuestra Nación por los medios que le son propios, haciendo efectivas las garantías y derechos fundamentales que están sosteniendo el orden institucional argentino.

Este tiempo que nos toca vivir ha engendrado en nosotros un sentido de responsabilidad que no queremos atenuar ni disimular. Ese sentido de responsabilidad debemos encontrarlo en la transcendencia histórica del momento político que vive nuestro país, que no pretendemos desconocer sino más bien afianzar, adoptando actitudes y propiciando la sanción de leyes que sean una demostración más del señorío, de la generosidad, de la amplitud de miras, del sentido de justicia, en una palabra, que nos inspira. Al propiciar este proyecto lo hacemos como argentinos que hemos optado por una actitud de compromiso para legar a nuestros hijos una herencia enriquecida por el amor, el respeto y la consideración hacia nuestros hermanos, sin frustraciones, rencores, ni egoísmos que los lleven por caminos de desesperación y amargura. Así pretendemos construir la Argentina del futuro, como lo hicieron los protagonistas del proceso revolucionario que estalló el 25 de mayo de 1910, quienes dejaron establecido en el Acta Capítular de ese día el origen y sentido que, a partir de entonces, tendría la función judicial.

Es que esa egregia función reconocía a la justicia un valor del más alto nivel. Encontraba en Platón reconocimiento pleno de la jerarquía que marcaba la salud del alma en los seres

humanos, por su idea del bien y sus concepciones de la moral. De las virtudes que él reconocía, la de la justicia era la virtud por excelencia.

Como lo fue para Aristóteles, quien luego de señalar que el juez procura igualar la desigualdad que resulta de la injusticia dijo: «Por esta razón, todas las veces que los hombres disputan entre sí, recurren al juez. Ir al juez es ir a la justicia, pues el juez ideal es, por decirlo así, la justicia animada...».

Pero esa tendencia sigue a través del tiempo y aparece San Agustín, quien recoge, de alguna manera, el hondo pensamiento de los griegos precristianos, y en su monumental obra *La ciudad de Dios* recuerda que sin justicia no se puede administrar ni gobernar la República, porque sin justicia no hay derecho, como tampoco hay orden, concordia ni paz. Así llega a los desarrollos de su pensamiento, donde reconoce y valora la vida espiritual del justo y el amor a la justicia que lleva al cumplimiento de la ley, que se ampara en la fe con libertad y con amor a Dios.

Pero sin duda la definición que Santo Tomás de Aquino tomó de Ulpiano es la que más ha tenido resonancia: «la constante y permanente voluntad de dar a cada uno lo suyo», dijo de la justicia. Ese concepto tan admirablemente sintetizado contempla el orden familiar, comunal y nacional, que se apoya en virtudes que él distingue, calificando como «morales o cardinales», en búsqueda de una perfección de la voluntad y del bien, para dar «a cada uno lo debido».

Esos cimientos que acabo de mostrar, Honorable Cámara, son los que sostienen la concepción que substancialmente seguimos cuando estamos propiciando la sanción de una ley que procura el encuadramiento dentro del orden previsional vigente a los que han venido sirviendo a la justicia desde distintas funciones, sin limitación de edad, siempre que tal servicio se hubiera prestado en un mínimo de tiempo que está contemplado en el aludido proyecto.

Nosotros estamos seguros de respetar el valor jerárquico que se asigna a la justicia dentro de los distintos grados que las relaciones humanas engendran en una comunidad organizada, porque queremos reafirmar lo que ya la Revolución de Mayo en su primer Acta Capítular estableció en la naciente estructura revolucionaria: el reconocimiento de la existencia de un Poder Judicial cuyo origen en la soberanía popular representada por la Junta Provisoria Gubernativa se instalaba.

Nosotros estamos seguros, señores diputados, de interpretar la línea histórica de liberación que con hechos concretos, positivos, objetivos, comenzó a trazarse desde el comienzo de aquellos acontecimientos trascendentales que habían de tener, casi inmediatamente, concreción a través de la paulatina y sucesiva sanción de nor-

mas tendientes al cambio y mejoramiento de la administración de justicia, cuyos integrantes, como magistrados, no fueron «ni mejores ni peores que los de cualquier parte del mundo» puesto que «la justicia se impartía dentro de las leyes y del criterio de su tiempo», según lo tienen dicho los investigadores de aquel proceso.

Claro es que el proceso revolucionario de Mayo fue de una tendencia hacia el progreso, hacia el reconocimiento de derechos, con la consiguiente supresión y modificación de situaciones cuyo reemplazo ya reclamaba el tiempo que se vivía, merced al impulso renovador que todo proceso de liberación requiere.

Así en la legislación de fondo como en la de forma. Sea en el orden civil como en el penal.

No quiero cansar vuestra atención recordando toda esa serie de normas que fueron reemplazando las existentes desde 1811, en que se promulgó el decreto sobre seguridad individual, donde se exige la forma del proceso y sentencia legal, se establecen los requisitos para que proceda el arresto, la inviolabilidad del domicilio o su allanamiento, que nadie debía ser detenido más de tres días sin que se le informe de la causa de su detención y que ningún reo podía ser mantenido incomunicado después de la confesión, etcétera.

También quiero destacar muy especialmente, porque está claramente dentro de la política que este gobierno está siguiendo en el orden carcelario, que en el artículo 6º de ese decreto se estableció una disposición que se ha venido repitiendo hasta la fecha dentro de las declaraciones y garantías de la Constitución Nacional: «...Siendo las cárceles para seguridad y no para castigo de los reos, toda medida que, a pretexto de precaución, sólo sirva para mortificarlos será castigada rigurosamente» (artículo 6º de ese decreto).

Puedo asegurar, señores diputados, que esa afirmación que viene desde el fondo de nuestra historia, desde 1811, encontrará adecuado cumplimiento de ahora en adelante.

Poco tiempo después, en enero de 1812, se dicta el Reglamento para la Administración de Justicia de las Provincias del Río de la Plata, cuya importancia estimo ocioso destacar. Allí fue donde se suprimió la Real Audiencia creándose la Cámara de Apelaciones, que con las modificaciones impuestas por el transcurso del tiempo había de encontrar hasta la fecha su reflejo en las que por razones de materia ahora componen la segunda instancia de la justicia porteña.

Esa y otras normas encontraron complemento en la famosa y bien conocida Asamblea del Año XIII, que promulgó reformas que se han incorporado a la fuerza republicana y democrática que da aliento a nuestra Nación. Así es como en el Estatuto Provisional de 1815 se dispuso que

«ningún habitante puede ser penado ni confinado sin que proceda forma de proceso y sentencia legal».

Y podría seguir mencionando normas que fueron sancionadas durante la primera década de la Revolución de Mayo que implicaban un verdadero progreso y cambio sobre la situación hasta entonces existente. La tradición de respeto y consideración a la justicia tiene hondas raíces en nuestro ser nacional. Por eso es que, ahora y aquí, nosotros pretendemos ser fieles a las grandes líneas que nuestro pueblo ha asimilado y que los gobiernos en no pocas ocasiones han dejado de seguir.

En tal alusión dejamos implícito nuestro homenaje a todos los hombres, magistrados o no, que han pugnado por exaltar a sus más altos niveles las instituciones que aquellos patriotas fueran poniendo en vigencia en la medida de sus posibilidades, de sus luchas, para afianzar la Nación cuyo perfil americano siempre cuidaron mantener.

Nosotros, señores diputados, sabemos que al proyecto originalmente sancionado por el Honorable Senado, que ahora presentamos a esta Cámara con algunos retoques que no alteran lo substancial de aquél, se le han efectuado críticas. Pero queremos decir a tan afanosos críticos que cuando con toda amplitud se lo debatió en la Honorable Cámara de Senadores, tanto en general como en particular, sus integrantes, que representan a distintas tendencias políticas que actúan en nuestro país, tuvieron oportunidad de expresar ampliamente su opinión. Al contenido de la misma registrado en el Diario de Sesiones de ese cuerpo me remito para que se aprecie el verdadero alcance del fundamento que determinó su unánime aprobación, luego de un sereno y levantado debate.

Nosotros queremos reiterar que integramos un proceso revolucionario destinado a modificar el orden institucional vigente, siguiendo el camino evolutivo de la convivencia pacífica, dentro de un ambiente de paz y entendimiento razonables. Los cambios que propiciamos seguirán ese ritmo, y no queremos, de manera alguna, crear elementos de presión injusta. Pero no queremos que se mida el alcance de ese proceso con anécdotas que a través del tiempo quedarán como tales y se diluirán en la memoria de los hombres.

Por eso esbocé con algunos trazos las bases que se fueron echando en la primera década de la Revolución de Mayo que, después habrían de constituir, en lo esencial, el modelo argentino de aquel futuro soñado por nuestros compatriotas tras cruentas luchas y sacrificios. Pero en aquellos como en estos difíciles tiempos que nos toca vivir la idea de justicia ha sido «poderosa fuerza motivadora» al decir de Alf Ross, porque «la justicia es la idea específica del derecho, porque la justicia es la igualdad».

Para aprehender con claridad su significado debemos recordar, con ese autor, las circunstancias condicionantes que la acompañan, puesto que «la demanda de igualdad encierra únicamente la exigencia de que nadie, en forma arbitraria o sin razón suficiente para ello, sea sometido a un trato que difiera del que se acuerda a cualquier otra persona».

«La exigencia de igualdad debe ser comprendida, por lo tanto en un sentido relativo, esto es, como una exigencia de que los iguales sean tratados de la misma manera.» Por eso es que, como dice dicho autor, «la exigencia formal de igualdad no excluye una diferenciación entre personas que se hallan en circunstancias diferentes.»

Teniendo, como tenemos, a nuestro alcance antecedentes de actos de gobierno y pronunciamientos judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al propiciar esta ley preferimos elegir el camino de la norma más benigna y ampararnos en el principio constitucional de la igualdad ante la ley, que ese mismo tribunal ha tenido oportunidad de interpretar en más de una ocasión. Pero debo recordar que es sabido que lo referente a la existencia de distintos regímenes de previsión es cuestión de política legislativa que escapa a este examen de ese alto tribunal, siempre, claro está, que no existan actos arbitrarios, hostiles o injusto privilegio.

Así es como esa corte pudo decir que la garantía de la igualdad no impide «que se contemplen en forma distinta, situaciones que se consideren diferentes, en tanto el régimen fijado para cada especie sea uniforme» (C. S., 249:596, año 1960), y dicha garantía «no resulta afectada si la diferencia dentro de la actividad docente, en el caso, proviene de los diferentes regímenes vigentes en oportunidad de las cesaciones de servicios» (C. S., 254:78, año 1962), llegándose a sostener que «siempre que se produce un cambio de régimen jurídico, ocurren análogas consecuencias, que no vulneran ningún principio constitucional» (C. S., 261:205, año 1965).

Por eso estamos ciertos que la sanción que propiciamos no se aparta de esa hermenéutica, porque tratamos en este proyecto no sobre un igualitarismo injusto sino sobre la base de un tratamiento específico de una situación específica. Es decir, tratando la situación con justicia, es decir, ajustando las soluciones legales a cada situación.

Casi no es necesario destacar, Honorable Cámara, la particularísima situación de los integrantes del Poder Judicial, y por eso es que los magistrados y funcionarios en su tratamiento requieren una particularísima solución.

Quiero recordar aquí lo que en el número 236 del mes de julio de 1963 se publicó en el Boletín de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el título «Nuestro elogio

y crítica a los jueces»: «... Quienes quieran saber de nuestro respeto por la suprema dignidad de los jueces deben releer el hermoso libro de Piero Calamandrei *Elogio a los jueces escrito por un abogado*, que transcribe: “En ciertas ciudades de Holanda, viven en oscuros tenduchos los talladores de piedras preciosas, los cuales pasan todo el día trabajando en pesar, sobre ciertas balanzas de precisión, piedras tan raras, que bastaría una sola para sacarlos para siempre de su miseria. Y después, cada noche, una vez que las han entregado, fúlgidas a fuerza de trabajo, a quien ansiosamente las espera, serenos preparan, sobre la misma mesa en que han pesado los tesoros ajenos, su cena frugal, y parten sin envidia, con aquellas manos que han trabajado los diamantes de los ricos, el pan de honrada pobreza. También el juez vive así”, finaliza el artículo.

Porque el juez es un consagrado; por ello es que Ulpiano le llamó «sacerdote de la justicia». No es posible que desaprensivamente se vea en el ejercicio de su función el cumplimiento de tareas como otras que se cumplen en otros ámbitos de la administración pública. Pues a él se le exige dedicación permanente; que viva sólo para el desempeño de la misma. Sin ninguna posibilidad legal de labrarse otro pasar para su futuro que el que le puedan brindar sus emolumentos, que, bien lo sabemos, son magros en relación con lo que estoy diciendo. Así es que en el boletín que acabo de citar, con toda justicia pudo decirse: «... Nuestros jueces —la casi absoluta totalidad— dan diario ejemplo, con su vida y su trabajo, de acrisolada honestidad, de limpia pureza interior como auténticos obreros de la justicia y la ley. Tienen decoro, prudencia y pudor intelectual y merecen el respeto del foro y del pueblo en general».

Estamos seguros de que los señores diputados compartirán también lo que al respecto se sostuvo en la Honorable Cámara de Senadores, y que este proyecto, ahora a consideración de este cuerpo, no sanciona privilegio odioso alguno sino que contempla una situación particular como es la integración del Poder Judicial, cuya importancia y raíz nacional acabo de destacar.

No hacerlo por parte de los representantes del pueblo sería incurrir en flagrante injusticia y abandonar a su suerte a quienes, en años, han trabajado esforzadamente desempeñando con dignidad su misión, cuyo alcance social —que también ya se ha puesto de manifiesto— consiste en estar al servicio de la comunidad, de sus semejantes para hacer respetar los derechos de cada uno y hacer que la justicia sea realidad en cada caso concreto.

De él han dependido y dependen los más sagrados derechos personales, y de su decisión los más cuantiosos intereses patrimoniales y, a diferencia de cualquier otra actividad profe-

sional —en la que cuanto más se trabaje o más cuantiosos sean los intereses confiados a su estudio, más se gana—, el juez tiene el límite de su dedicación exclusiva y su emolumento mensual sin posibilidad de progreso económico ni otra satisfacción que la del deber cumplido, cualquiera sea la importancia humana, económica o social de los asuntos que se le confíen, estudie y resuelva.

Con motivo de realizarse las Primeras Jornadas Nacionales de Ética de la Abogacía, en Santa Fe, uno de los asistentes, el doctor Alberto Leston, proyectó la sanción del Decálogo del Magistrado que debía tener en cuenta el abogado que abrazara la carrera judicial, destacando que afrontaría la incompreensión, la soledad, la pobreza, la angustia de saberse responsable al cumplir su tarea de incurrir en el error e involuntariamente caer en la injusticia. En fin, enumera todo lo que se ofrece al que por vocación sirve a la justicia. En esas mismas jornadas se sostuvo que «su decoro es el decoro de una sociedad», agregándose que «el pueblo intuye, siente y comprende a un buen juez, al que acostumbra a ver y observar, como hombre bondadoso, pulcro en el vestir y en el hablar, culto, sin vicios, humilde con los débiles y fuerte con los fuertes interesados, cuya vida en el hogar y en la sociedad sea espejo de virtudes». Toda esa suma de cualidades que se exige al hombre que ha de ser juez, deben ser, pues, reconocidas explícitamente por este Parlamento a los que podrían retirarse por el mero efecto de la ley que ahora propiciamos, que viene a ser reglamentaria de los principios, declaraciones y derechos que la misma consagra.

Cabe recordar que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se ha empeñado en distintas gestiones sin éxito ante quienes precedieron a este gobierno. Procuró en esos tiempos mejorar y prever, con un tratamiento previsional adecuado, la situación del Poder Judicial, pero no lo logró.

Ahora, al fin de agosto próximo pasado, al sancionarse por el Honorable Senado el proyecto que consideramos, lo recordó y apoyó dicha sanción, expresando su deseo de que «se vea plasmado en ley a breve término —dice la publicación dada a conocer por dicha asociación— porque así se verá ampliamente satisfecha la inquietud de quienes carecen de acuerdo senatorial, al par que significará una necesaria renovación de los cuadros judiciales (sin desmedos personales, señaló) y en beneficio de los intereses del país». Pongo de resalto ese manifiesto apoyo de la citada Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación como demostración del eco favorable que tuvo la media sanción de la ley que ahora estamos considerando. Como ya lo dije al comienzo, nuestra identificación con los altos principios de progreso, de paulatino cambio en las formas y

en el fondo del orden institucional del país, no nos hace perder de vista, para consolidar nuestra democracia integrada en pleno entendimiento y concordia, las antiguas y siempre válidas palabras de Platón cuando recomendaba que era necesario establecer, para asegurar la salud de la República, «instituciones tan sabias que inspiren a todos los hombres el deseo de ser virtuosos, y tan fuertes que les impidan ser malvados».

Por la vía que propiciamos, estamos seguros de que hemos de encontrar el camino que nos permita hallar en el reconocimiento justicial de los méritos y servicios de compatriotas nuestros que han servido al país con dignidad, en la alta función de dispensar justicia, la más completa justificación de esta sanción legislativa.

Pablo Calabrese.

ANTECEDENTE

Buenos Aires, 3 de agosto de 1973.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en sesión de la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º— Los magistrados judiciales, fiscales, peritos con jerarquía equivalente a fiscal de primera instancia, asesores, defensores y secretarios, que acrediten una antigüedad de veinticinco años de servicios y una mínima de ocho años en el ejercicio de funciones en el Poder Judicial, siempre que opten por los beneficios de la presente ley dentro del término de treinta días a contar desde la fecha de su promulgación, podrán jubilarse en las condiciones establecidas por la llamada ley 18.464, sin límite de edad, e incluyendo el reconocimiento de los servicios que hayan prestado en la administración pública nacional, provincial o municipal, en la docencia, en la administración de justicia de las provincias, en el ejercicio de la profesión o en la actividad privada, debidamente acreditados por inscripción a cajas previsionales.

Art. 2º— Quienes a la fecha de la sanción de esta ley se encuentren en condiciones para obtener la jubilación ordinaria de conformidad a las llamadas leyes 18.464 y 20.433, contarán con igual plazo que el señalado en el artículo anterior para optar al beneficio jubilatorio, transcurrido el cual, sólo podrán accederse a los beneficios que establece el régimen de la llamada ley 18.037.

Art. 3º— Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

JOSÉ ANTONIO ALLENDE.
Rafael Arancibia Laborda.

Observaciones formuladas por el señor diputado
Fernández Gill

Artículo 1º— Los magistrados judiciales, fiscales, peritos con jerarquía equivalente a la de

fiscal de primera instancia, asesores, defensores, secretarios, secretarios y prosecretarios de cámara y director médico, que acrediten una antigüedad de 25 años de servicios y una mínima de 8 años en el ejercicio de funciones en el Poder Judicial de la Nación o de las provincias o, en su caso, 22 años de servicios ininterrumpidos en la justicia nacional, siempre que opten por los beneficios de esta ley dentro de los 30 días a contar desde la fecha de su promulgación, podrán jubilarse en las condiciones establecidas por el decreto ley 18.464 del año 1969, sin límite de edad, incluyendo el reconocimiento de los servicios que hayan prestado en la administración pública nacional, provincial o municipal, en la docencia, en el ejercicio de la profesión o en la actividad privada.

Art. 2º — Por esta única vez, los magistrados y funcionarios a que se refiere el artículo anterior, que tuvieren como mínimo 60 años de edad, deberán acogerse dentro de igual plazo a los beneficios vigentes, aunque éstos exigiesen un mayor límite de edad.

Art. 3º — Quienes ejercitasen los derechos establecidos en los artículos que anteceden, tendrán la obligación de permanecer en sus cargos hasta que sean nombrados sus reemplazantes. En este último caso, y hasta tanto se les acuerde la prestación jubilatoria, percibirán mensualmente, a cuenta de la misma, el 75 por ciento de sus haberes.

Art. 4º — Las disposiciones establecidas en esta ley no serán de aplicación a los nuevos magistrados o funcionarios judiciales designados con posterioridad al 24 de mayo de 1973.

Art. 5º — Los magistrados y funcionarios que hubiesen cesado a partir del 25 de mayo de 1973, podrán acogerse a los beneficios de esta ley.

Guillermo Carlos Fernández Gill.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El proyecto sobre ley de jubilación para magistrados y funcionarios judiciales que ha merecido ya media sanción por parte del Honorable Senado y que es ahora materia de discusión en la Cámara Baja, debe recibir, a nuestro juicio, dos modificaciones tendientes a precisar sus alcances y a adecuar su texto a los elevados fines que lo inspiran, esto es, producir una renovación en los cuadros de la justicia a través de la promoción de quienes han dado muestras de vocación, capacidad y honestidad y, al mismo tiempo, consecuente con los propósitos de pacificación y concordia reiteradamente proclamados por el gobierno que asumió el 25 de mayo, posibilitar que ese objetivo sea logrado sin mengua para quienes, en ese entonces, ocupaban cargos en la administración de justicia.

Por eso es que debe señalarse el 25 de mayo de 1973 como día de entrada en vigencia de la

presente ley, ya que se trata de una fecha trascendente para la vida jurídica del país, en que después de un prolongado período signado por la incertidumbre en el campo político y social, recobró plena vigencia el funcionamiento de las instituciones republicanas consagradas por la Constitución Nacional, volvieron a resonar en este recinto las voces de los representantes del pueblo y, en suma, se dio acabado cumplimiento a la voluntad ciudadana exteriorizada en los comicios del 11 de marzo.

Además, tomando el 25 de mayo como fecha de entrada en vigor de la presente ley, se amolda su espíritu al que animó a las restantes disposiciones adoptadas a partir de tan trascendente momento, entre las que se cuenta la generosa amnistía sancionada por la ley 20.508, que importó, como se dijo oportunamente, echar un manto de olvido sobre acontecimientos sucedidos con anterioridad en los más diversos aspectos de la vida del país.

Para ser congruentes con tal línea de conducta, que contó con la unánime adhesión de todos los sectores políticos, es preciso que el proyecto de ley sobre jubilación de magistrados y funcionarios acoja en sus previsiones a todos aquellos que se hallaban en funciones el 25 de mayo, toda vez que importando un evidente beneficio para quienes reúnan las condiciones establecidas y habiendo comenzado en aquella fecha la renovación de los cuadros judiciales a través del acuerdo prestado por el Honorable Senado a las propuestas de magistrados remitidas por el Poder Ejecutivo, no existen razones valederas para excluir a quienes, a la fecha de la promulgación de la presente ley, ya han dejado de pertenecer a la justicia. Proceder de otra forma implicaría crear una irritante situación, de desigualdad entre unos y otros, carente de fundamentación jurídica y, a la vez, incompatible con los propósitos que inspiran el proyecto. Y fijar cualquier otra fecha intermedia para la entrada en vigencia de la ley significa dejar librada a la mera casualidad, por no decir a la discrecionalidad arbitraria, la concesión de los beneficios jubilatorios.

Insistimos una vez más en que debe recurrirse al 25 de mayo de 1973 como hito que marca el comienzo de una nueva etapa en la vida republicana del país, para fijar la entrada en vigencia de la presente ley jubilatoria. Esa fecha está signada por un propósito noble y generoso como es el de permitir el decoroso alejamiento de quienes ya han dado sobradas muestras de dedicación a la función pública.

La restante enmienda que proponemos está referida a uno de los requisitos a que se supedita el otorgamiento de este régimen jubilatorio. Consideramos justa la exigencia de los 25 años de prestación de servicios en el orden público o privado, de los cuales por lo menos ocho deben pertenecer a la justicia. Pero, como fórmula alternativa, estimamos que debe contemplarse la

situación de quienes solamente y en forma ininterrumpida se han desempeñado en la administración de justicia, para los cuales, obviamente, debe reducirse la antigüedad requerida. Por ello propiciamos que también puedan acogerse a los beneficios de esta ley quienes acrediten la prestación de 22 años ininterrumpidos en la justicia nacional. De este modo, consideramos que se rinde un merecido reconocimiento a aquellos magistrados y funcionarios que a través de tan prolongado y exclusivo desempeño han dado sobradas muestras de su acendrada vocación hacia la justicia. Por último, de ese modo se subraya el carácter excepcional que inviste el régimen jubilatorio previsto, derivado de la especial categoría de personas a quienes alcanza, por su prestación de funciones en el Poder Judicial de la Nación.

Guillermo Carlos Fernández Gill.

**Observaciones formuladas por los señores diputados
Suárez (H.F.) y Falú**

Señor presidente:

Proponemos la substitución del articulado del proyecto de ley sobre modificación del régimen de jubilaciones para magistrados judiciales —dictamen de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Justicia contenido en el orden del día 118— por el siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Los jueces que tuviesen acuerdo legislativo para el ejercicio de sus actuales cargos y los que, contando con acuerdo legislativo al mes de junio de 1966, estuviesen desempeñando otros cargos judiciales en que no tengan aún acuerdo del Honorable Senado, podrán por esta única vez acogerse a los beneficios jubilatorios acreditando 25 años de servicios en cualquier actividad con un mínimo de 8 años en la justicia nacional, sin límite de edad.

Art. 2º — Si el juez comprendido en el artículo anterior tuviese 60 años de edad gozará del haber jubilatorio establecido en las llamadas leyes 18.464 y 20.433.

Art. 3º — El haber jubilatorio de los jueces comprendidos en el artículo 1º se disminuirá en un cuatro por ciento (4 %) por cada año de edad que le faltare para completar los sesenta (60) años. No obstante, podrá compensar cada año que le faltare para completar los 60 años de edad con cada año de servicio que exceda de los veinticinco (25) años.

Art. 4º — Quienes opten por acogerse a los beneficios de esta ley deberán comunicarlo fehacientemente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación dentro de los treinta (30) días de la fecha de su promulgación.

Art. 5º — Quienes opten por los beneficios que acuerda esta ley tendrán la obligación de permanecer en sus cargos hasta que sean nombrados sus reemplazantes. En este caso, y hasta que les sean otorgados los beneficios jubilatorios, los magistrados percibirán mensualmente, a cuenta de los mismos, el setenta y cinco por ciento (75 %) de sus haberes, sin perjuicio de los reajustes posteriores correspondientes.

Art. 6º — Los magistrados que hubiesen cesado en sus funciones a partir del día 1º de junio de 1973, podrán acogerse a los beneficios de esta ley.

Art. 7º — Las prestaciones que correspondan abonar de acuerdo con esta ley a beneficiarios que no reúnan los requisitos establecidos por las llamadas leyes 18.464 y 20.433, se cargarán a rentas generales hasta que aquéllos cumplieren la edad exigida por las citadas normas legales.

Art. 8º — Las disposiciones de esta ley no serán de aplicación a los magistrados y funcionarios judiciales designados con posterioridad al 24 de mayo de 1973, quienes continuarán sometidos al régimen previsional vigente.

Art. 9º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Humberto F. Suárez. — Ricardo Muñir Falú.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente proyecto de ley de jubilación para magistrados judiciales que es materia de discusión en esta Honorable Cámara de Diputados, debe observar, a nuestro juicio, substanciales modificaciones a efectos de adecuar el mismo al espíritu que anima a sus inspiradores.

La primera observación que formulamos consiste en la limitación de los beneficiarios de la ley. Se ha dicho en las discusiones en comisión que el actual gobierno procura dar a los magistrados judiciales la oportunidad de un retiro decoroso acorde con la función que vienen ejerciendo, con el primordial objeto de evitar la promoción de juicios políticos o dejar sin ocupación a aquellos que no cuentan con acuerdo legislativo y pueden ser motivo de separación automática con la sola presentación de pedido de acuerdo para quien lo suplante. En todo momento se ha estado en la tónica de que únicamente los magistrados judiciales que no cuentan con el debido acuerdo son la preocupación del Ejecutivo nacional, sin mencionarse a los demás funcionarios judiciales que, si bien cumplen importantes funciones en la administración de justicia, no son problema alguno ni revisten la importancia fundamental que se les quiere asignar. Si bien por sí el proyecto puede resultar y resulta irritativo en cuanto crea un régimen de excepción a favor de un determinado sector de la sociedad argentina, las razones que impulsaron su tramitación pueden en alguna medida justificar la misma, pero limitada a la parte que realmente se cree necesario e imprescindible, y

por ello no se justifica la extensión de los beneficios de la ley a casi todos los componentes del Poder Judicial de la Nación sin razón alguna que lo justifique.

En el proyecto que proponemos hacemos expresa mención de los magistrados que no cuentan con el debido acuerdo legislativo, en procura de hacer el debido distingo institucional entre aquellos que habiendo tenido acuerdo aún permanecen en sus funciones y aquellos otros que al margen de las normas constitucionales aceptaron la designación para la función judicial, debiendo interpretarse que para los proponentes de la modificación estos últimos magistrados lo son en razón de que ejercen la función judicial únicamente, pero no lo son ni los reconocemos como tales desde el punto de vista constitucional.

Proponemos además un régimen de distinción entre los magistrados que contando con acuerdo reúnen los requisitos de edad y antigüedad en la función y aquellos que, al no reunir tales requisitos, deben soportar una reducción porcentual en su haber jubilatorio. Se procura establecer un régimen de equidad que en nada afecta al espíritu de la ley pero sí, en cambio, le da el verdadero sentido que la misma pretende tener.

Así mismo incorporamos la exigencia de contar con un mínimo de antigüedad en la función judicial de la Nación de ocho años, proponiendo la modificación del dictamen de la mayoría, que no hace distingo entre prestación en funciones judiciales de provincia o de la Nación. Ello debe ser contemplado atendiendo a que los recursos para hacer frente a esta legislación excepcional deben ser soportados por la Caja de la Nación, y en su consecuencia debe preverse que la misma haya recibido un aporte mínimo de ocho años por parte del beneficiario, para evitar también en este aspecto una diferenciación irritante y gravosa.

Debe tenerse presente que muchos magistrados accedieron a los cargos actuales sin el debido acuerdo legislativo y sin haber cumplido carrera judicial alguna, al extremo de que muchos otros funcionarios vieron postergadas sus aspiraciones de ascenso ante la incorporación de profesionales que no contaban con antigüedad ni méritos suficientes o iguales que quienes tenían derecho a acceder a dichas funciones.

En definitiva, estimamos que aceptándose las observaciones que formulamos al dictamen de la mayoría se ha de lograr la sanción de una ley que, si bien reviste el carácter de excepcional, no provocará lesión alguna al Poder Judicial, ni creará privilegios que puedan provocar reacciones inconvenientes en los demás sectores del quehacer nacional.

Humberto F. Suárez. — Ricardo Muñir Falú.

Observaciones formuladas por el señor diputado Monsalve

En disidencia total con el despacho, porque el mismo lesiona gravemente los fundamentos del sistema republicano de gobierno, viola el espíritu y la letra de la Constitución Nacional y configura una agresión contra uno de los poderes del Estado argentino.

Buenos Aires, 19 de octubre de 1973.

Evaristo A. Monsalve.

Sr. Presidente (Busacca). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado Calabrese.

Sr. Calabrese. — Señor presidente: en nombre de la mayoría de la Comisión de Justicia y también en representación delegada de la Comisión de Previsión Social, debo informar el despacho producido en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado sobre régimen de jubilaciones para magistrados judiciales.

Este asunto ha tenido largo trámite en la Comisión de Justicia, y podríamos decir que ha concitado la polémica periodística y de otros medios de información que tomaron partido en favor, unos y en contra, otros.

Recalco, pues es importante establecer aquí principios fundamentales para la constitución del Poder Judicial, que el trámite observado para este proyecto en el Honorable Senado ha exhibido la coincidencia —casi la uniformidad— de las argumentaciones y propósitos de los integrantes del bloque de la mayoría, así como de los senadores opositores. Así hemos visto coincidir en muchos aspectos a los autores de este proyecto, los señores senadores Saadi y Díaz Bialek, con los señores senadores de la Rúa y Solari Yrigoyen.

Es muy interesante recalcar esta circunstancia, pues en esta Honorable Cámara, en cambio, se han planteado disidencias que nosotros tenemos que sobrellevar, especialmente la mayoría, que ha firmado de conformidad el proyecto en debate.

En el Senado se lo ha considerado como un proyecto que tiende a solucionar una situación especial por la cual atraviesa parte del Poder Judicial, y se ha dicho que es una medida generosa y un puente de plata que este gobierno tiende para solucionar esa acuciante situación.

Más aún; contribuyeron los señores senadores de la minoría, los de la oposición, a la elaboración de este proyecto, incorporando sus ideas principalmente en el artículo 1º. En cuanto al artículo 2º, que es el de la disidencia, el de la polémica, y en el que algunos señores diputados de la comisión que yo presido asientan fundamentalmente sus disidencias, fue votado en el Senado por unanimidad y sin ninguna clase de discusión.

Nos reunimos en varias oportunidades con los miembros de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, quienes firmaron este despacho y cuya representación me ha acordado el señor presidente de la comisión, por simples razones de brevedad y no por otra cosa.

Nos reunimos con el señor ministro de Justicia, doctor Benítez, para conocer la intención del Poder Ejecutivo y hasta dónde habría de aplicar esta ley el señor presidente de la República, general Perón. Llegamos a la conclusión, reconocida no solamente por nosotros sino también por los miembros de la oposición política, que no había ningún propósito subrepticio en la sanción de esta ley, y tuvimos la certeza de la buena fe y de la corrección de los procedimientos del señor ministro de Justicia que, lógicamente, representaba al Poder Ejecutivo de la Nación.

Esta ley tiene dos clases de destinatarios: los que determina el artículo 1º y los que se incluyen en el artículo 2º, que son diferentes y que están dentro de modalidades completamente opuestas o, por lo menos, que no son similares.

El artículo 1º se refiere, pura y exclusivamente, a los jueces que no tienen acuerdo del Senado. Heredamos una situación de hecho, y no vale la pena hacer mérito de ella porque es conocida por todos. Hubimos de instrumentar los medios para conjurar esa situación que nos ha legado el poder de facto que durante muchos años reinó en el país. En este momento se encuentran en esas condiciones 174 jueces pertenecientes a la justicia nacional. Excluyo —no está de más decirlo, aunque es elemental— a la justicia de los estados provinciales.

Algunos de estos jueces han ascendido durante el período de la dictadura y otros han sido nombrados en ese lapso. Muchos estuvieron al lado de ese gobierno de facto, pero muchos otros cumplieron con la misión sagrada de administrar justicia. Inclusive, muchos de aquellos supieron comportarse con honor.

No podemos nosotros, que somos la revolución andante, cuando nuestro presidente dice que viene en prenda de paz, dar la sensación de que queremos arrollar al Poder Judicial. Nosotros lo respetamos. Consideramos, además, que es el poder más importante que tiene el país, porque es el que limita los excesos de los otros poderes del Estado y hace cumplir las leyes y la Constitución. Si hubiere un propósito malévolo o político no se habrían dado estas circunstancias, que demuestran a las claras el correcto proceder del Poder Ejecutivo nacional.

Como expresé, hay 174 jueces designados sin acuerdo. El Poder Ejecutivo —el presidente de la República, en este caso—, conforme al artículo 86, inciso 5º, de la Constitución Nacional, está facultado para ejercitar el derecho a la propuesta y al nombramiento, con acuerdo del Senado, de los jueces nacionales. Podía ha-

ber substituido a aquellos que se han arriesgado a administrar justicia al lado del gobierno de facto, algunos, y otros por razones de ascenso o de mérito, como he señalado. De esa manera podía haber eliminado a esos 174 jueces.

Sin embargo, no ha procedido así. Hasta ahora el Poder Ejecutivo ha nombrado 41 jueces, según un informe que obtuve esta mañana en la Comisión de Acuerdos del Honorable Senado. Es conveniente tener en cuenta que de esos nombramientos, un 43 por ciento lo ha sido por ascenso; el 20 por ciento son confirmaciones; el 17 por ciento son reincorporaciones de jueces que fueron declarados cesantes en el año 1955 por la llamada revolución libertadora, y nuevos —lo que responde al derecho elemental que tiene el Poder Ejecutivo en esta materia, que es el de nombrar— solamente designó el 20 por ciento. Es decir que esto prueba a las claras la tesitura moral de nuestro gobierno, que no quiere de ninguna manera avanzar sobre las facultades de control de los otros dos poderes del Estado.

Nosotros quisimos de alguna manera solucionar este problema, y en el artículo 1º, para que puedan jubilarse sin límite de edad, exigimos solamente ocho años de antigüedad en el cargo con veinticinco años de funciones, no en la justicia sino en cualquier empleo municipal, nacional, provincial e, incluso, en la actividad privada, que fue precisamente el agregado a dicho artículo solicitado por un senador radical, que el Honorable Senado votó por unanimidad.

Es cierto que nos apartamos del régimen común, que exige 62 años de edad, 15 años continuados en la administración de justicia o 20 discontinuos y 30 de antigüedad. Pero estamos frente a una situación distinta de las comunes que se presentan cuando no ocurren casos como los que estamos considerando en este momento. De manera que esta ley, que se aparta de la norma general, está hecha pura y exclusivamente con el propósito de encarar una situación de emergencia. Por eso hay sólo treinta días para acogerse a ella, acogimiento que no es obligatorio. Si aquellos que están en este momento sin acuerdo no quieren acogerse a los beneficios de esta ley, de ellos es la responsabilidad y la decisión.

En cuanto al artículo 2º, se refiere fundamentalmente a los que están incluidos dentro del régimen común, pero su edad se limita a 60 años. Además, en el caso de no acogerse a la ley —porque también es optativa y no obligatoria la disposición de ese artículo 2º— quedan lógicamente sometidos al régimen de la ley 18.037, que evidentemente implica una merma en el haber jubilatorio de los jueces.

Este ha sido el artículo que ha motivado la polémica en la prensa y en la comisión, polémica que se traduce en disidencias que a poco que

examinemos el tema veremos que no tienen razón de ser.

Es verdad —y voy a navegar a favor de las aguas de la oposición— que este proyecto en dicho aspecto puede merecer una crítica. Pero es conveniente recordar que el artículo 96 de la Constitución Nacional establece el régimen de inamovilidad de los jueces. Si vamos a la doctrina de los constitucionalistas, veremos que ellos sostienen que el puesto de los jueces, de acuerdo con este artículo, es *ad vitam*, pero nuestra Corte ha dicho que una cosa es el nombramiento *ad vitam* y otra la reglamentación de la jubilación de los jueces. No estamos solos en esto. Cuando decimos que los jueces, de acuerdo con este proyecto, tienen que jubilarse a los sesenta años mientras que el orden común es de sesenta y dos, no hacemos otra cosa que tratar de tener una buena administración de justicia y dar a los jueces, como a cualquier trabajador, el descanso tras una larga fatiga de trabajo.

Tengo sobre mi banca una nómina de jueces y camaristas en el orden nacional y federal en la que se advierte, sin que sea necesario dar nombres, que hay camaristas en lo comercial de setenta y cuatro años de edad, fiscales de setenta y uno, jueces de sesenta y seis y de setenta. Y, no sé si me equivoco, de acuerdo con lo que me informaron en la Corte Suprema de la Nación un secretario cuenta actualmente con casi ochenta años de edad.

Este régimen sobre limitación del mandato judicial está adoptado por algunas constituciones provinciales. No olvidemos que la Constitución Nacional exige la adecuación de las Constituciones provinciales a los términos de la Carta Magna. Las provincias de Catamarca, Jujuy y La Rioja tienen un régimen que determina la extinción del período constitucional de los jueces al momento de su jubilación, es decir, a la edad en que deben jubilarse. España, Uruguay y el Brasil tienen también un régimen constitucional más o menos parecido al nuestro, en el que también existe la inamovilidad de los jueces, pero además se establece la jubilación automática obligatoria o la jubilación voluntaria, de acuerdo con la edad de quien se va a jubilar.

De modo, pues, que no vulneramos el artículo 96, como dicen algunos diputados de la oposición, porque incluso el proyecto, en su artículo 2º, repito, es optativo y no obliga al juez a jubilarse. A este respecto quiero significar que el número de jueces que estarían en condiciones de optar por el régimen del artículo 2º no llega a 100. Vale decir entonces que estamos dándoles a aquellos que cumplan la edad de 60 años y que reúnan las condiciones que se indican en dicho artículo la opción de poder jubilarse. Si no lo hicieran —y eso es facultad del Poder Legislativo que no invade la órbita de la Constitución— podrán acogerse solamente a los beneficios de la ley 18.037.

El Parlamento dicta las leyes de jubilaciones. El Parlamento legisla como lo cree oportuno en ese momento sobre edad máxima, porcentajes, movilidad, etcétera. Y en este caso, cuando un juez, según la Corte, se acoge a los beneficios de la jubilación está obligado a aceptar las disposiciones de las leyes jubilatorias. De modo que no podemos de ninguna manera aceptar la impugnación que se hiciera en el sentido de que el proyecto que estamos tratando esta noche viola la Constitución Nacional.

Hasta aquí estamos, casi podríamos decir, en la misma línea que el proyecto venido del Senado. Pero nuestro proyecto ha sido un poco más claro, no porque fuera oscuro el proyecto en revisión, sino porque todas las sugerencias de los señores diputados, del señor ministro de Justicia, en representación del presidente de la República, e inclusive el pensamiento de los jueces y de la Asociación de Magistrados hicieron que nosotros tuviéramos que ampliar la redacción del articulado del proyecto.

Por ejemplo, los jueces que opten por este régimen, ya sea por el artículo 1º o por el artículo 2º, no pueden abandonar sus puestos, porque nosotros no podemos de ninguna manera permitir que dentro de treinta días quede desmantelada la justicia.

En segundo lugar, en el caso de la adhesión al régimen de esta ley, nosotros prevemos un procedimiento rápido e inmediato para que se le pague el 75 por ciento de su sueldo no bien deje su puesto, a cuenta, lógicamente, de su jubilación, que debe ajustarse a los haberes correspondientes, porque como tiene que probar 25 años de actividad, muchos jueces pueden tener algunos inconvenientes y nosotros no queremos dejar la mínima duda que autorice a pensar que hay un propósito persecutorio. Por el contrario, nosotros queremos que la justicia entre en el cauce del ordenamiento y que podamos nosotros decir que hemos respetado desde el gobierno la independencia del Poder Judicial.

Finalmente, señor presidente, y sin perjuicio de entrar luego a la consideración en particular, que ha de dar motivo a algunas aclaraciones o ampliaciones en los conceptos o en la redacción, yo quiero señalar que nuestro propósito de respetar al Poder Judicial se advierte a lo largo de todo el articulado. Pero hay un solo aspecto que fue y es motivo de impugnación. Nosotros decimos que solamente pueden acogerse al régimen de esta ley los magistrados y funcionarios que hubiesen cesado en sus funciones a partir del 1º de junio de 1973, porque queremos excluir, por todo lo que significó para el país, al tribunal especial que unánimemente hemos condenado. Para nosotros, se trata de un tribunal nulo e inexistente, como lo expresamos en oportunidad del debate pertinente.

Por otra parte, queremos señalar que aquellos magistrados o funcionarios que cesaron en sus funciones antes de la sanción de esta ley

—en estos días, por ejemplo— tienen derecho de acogerse a estos beneficios. No queremos que se piense que nos guía un propósito persecutorio, y por ello los magistrados que cesaron en sus funciones después del 1º de junio de este año por no haberseles prestado el correspondiente acuerdo están en condiciones de optar por la jubilación.

Finalmente quiero señalar que, en caso de ser sancionada, esta ley beneficiará a cerca de 400 magistrados o funcionarios. Es decir que es una ley de emergencia, para ser aplicada al Poder Judicial en una situación de emergencia, pero en modo alguno se trata de una ley de privilegio o de excepción. Es una ley dictada por las necesidades que la República está viviendo en estos momentos con respecto al Poder Judicial.

Sr. Mauhum. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Calabrese. — Si el señor diputado me permite, dentro de breves instantes tendré mucho gusto en concederle la interrupción que me solicita.

Por último, señor presidente, como hombre que forma parte del frente, pero que no soy de extracción peronista, siento el orgullo de decir que he encontrado en el presidente de la República, general Perón, una gran comprensión frente a este problema y un profundo respeto hacia la investidura de quienes integran el Poder Judicial. Al mismo tiempo, señor presidente, no puedo dejar de destacar la clara conducta que ha exhibido en esta emergencia el señor ministro de Justicia, quien también ha demostrado en todo momento el profundo respeto que le merecen el Poder Judicial y los hombres que lo integran.

Con mucho gusto concedo ahora al señor diputado Mauhum la interrupción que me había solicitado.

Sr. Presidente (Busacca). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Mauhum.

Sr. Mauhum. — Deseo formular una pregunta que va dirigida a aclarar la situación de numerosos magistrados de todo el país.

He escuchado detenidamente la inteligente exposición del señor diputado Calabrese, y comparto su opinión acerca de la generosidad con que trata el proyecto la situación de los 174 jueces que no han contado con el pertinente acuerdo. Ahora me interesa conocer su pensamiento, como presidente de la comisión, en cuanto a si los jueces que tuvieron acuerdo del Senado antes del 28 de junio de 1966 tienen inamovilidad absoluta en los términos de la Constitución.

Sr. Calabrese. — Sí, señor diputado; es decir, aquellos jueces a los que el Senado prestó acuerdo durante el gobierno del doctor Illia.

Quiero terminar esta exposición, señor presidente, que se me ocurría un poco más detalla-

da, con una recomendación a los señores diputados en el sentido de que den lectura, si así no lo hicieron, del informe que presenté en el momento de subscribir el despacho que hoy estamos considerando. En él está expresada la posición moral, jurídica y política de esta representación mayoritaria, cuyo pensamiento, en estos momentos, como presidente de la Comisión de Justicia, tengo el honor de exponer.

Finalmente y para no cansar la atención de la Honorable Cámara, solicito que se inserte en el Diario de Sesiones un estudio sobre los elementos de tipo jurídico en que se apoya mi pensamiento.

Agradezco a la Honorable Cámara la atención que me ha brindado durante el desarrollo de mi exposición. (*Aplausos prolongados.*)

Sr. Presidente (Busacca). — Si hay asentimiento, se practicará la inserción solicitada por el señor diputado Calabrese.

—Asentimiento. (1)

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Massolo.

Sr. Massolo. — Señor presidente: quiero señalar, en primer término, mi respetuosa consideración hacia la jerarquía espiritual del informe producido en el despacho que estamos considerando, por el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Calabrese, que no sólo hace una acalorada defensa de la justicia como valor ético y humano, sino también una defensa del prestigio de los jueces que han honrado a través del tiempo a la magistratura.

Sin embargo, a medida que avance en mi exposición puntualizaré algunas discrepancias no sólo con el informe sino también con la exposición que le ha servido de fundamento.

Antes de entrar al fondo de la cuestión, señor presidente, quiero también señalar que no advertimos móviles ocultos en este proyecto, porque conocemos la trayectoria del señor ministro de Justicia, sus antecedentes y su jerarquía moral. Personalmente, tengo la absoluta convicción de que mientras el doctor Benítez esté al frente del ministerio, con toda seguridad no se cometerá ninguna injusticia.

A nosotros nos preocupa, sin embargo, el problema institucional, y nos vamos a mover exclusivamente en ese terreno, por respeto a la propia Cámara y por respeto a los buenos propósitos, aunque no compartidos, tanto del Poder Ejecutivo como de la bancada mayoritaria y de los otros miembros de la minoría que han subscrito también con ella este despacho.

En mi carácter, entonces, de miembro de la Comisión de Justicia, e interpretando, además, o queriendo interpretar, el pensamiento del bloque de la Unión Cívica Radical, denuncio solemnemente a esta Honorable Cámara que en el

(1) Véase el texto de la inserción en el Apéndice.

supuesto de aprobarse sin modificaciones el despacho que consideramos habríamos inferido el más grave daño a las instituciones fundamentales de la República desde el 25 de mayo de 1973, fecha de instalación del nuevo gobierno constitucional surgido el 11 de marzo de este año.

Este hecho sería mucho más grave que todo lo ocurrido hasta el presente; mucho más grave que todas las transgresiones y todos los actos de violencia que han sembrado el miedo y el terror en el país; mucho más grave que el avasallamiento de la jerarquía universitaria; mucho más grave que el vandálico asalto al diario «Clarín» o el ataque a la libertad de prensa inferido a un conocido órgano periodístico; mucho más grave todavía que la propia renuncia a sus cargos de los gobernantes surgidos el 11 de marzo, a pocos días de haber asumido el gobierno que juraron desempeñar con lealtad y patriotismo durante todo el término de su mandato, lo que provocó la acefalia del Poder Ejecutivo, perturbando así gravemente la marcha institucional del país; mucho más grave aún que el mismo problema económico, agravado por la agresión indiscriminada a distintos sectores de la producción nacional, por la insuficiente remuneración de los trabajadores y por la suspensión del funcionamiento de las paritarias; y mucho más grave finalmente que la propia actitud partidista de la Confederación General del Trabajo al volcar todo su peso gremial y financiero al servicio de una candidatura presidencial.

Denunciamos este hecho como un alzamiento...

Sr. Ponce. — El señor diputado está fuera del tema.

Sr. Massolo. — Estoy en el tema, y pido que se me respete en el uso de la palabra, procediendo en la misma forma respetuosa como yo he escuchado las opiniones aquí vertidas.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Busacca). — Sirvanse no interrumpir al orador los señores diputados.

Sr. Ponce. — Permítame una interrupción, señor diputado.

Sr. Massolo. — Denunciamos este hecho como un alzamiento contra lo resuelto...

Sr. Ponce. — El tema de la justicia no puede ser usado para agraviar.

Sr. Massolo. — ...por La Hora del Pueblo, cuando asumimos el compromiso multipartidario de afianzar por todos los medios posibles el proceso de la institucionalización de la República, consignando claramente las normas y las pautas a seguir para asegurar el funcionamiento del futuro gobierno democrático.

Allí no sólo se consignó que las declaraciones, derechos y garantías del hombre y del ciudadano constituyen la estructura básica del sistema sin la cual se quebranta la posibilidad de la democracia, de la libertad, de la igualdad y

de la justicia —y destaco este último concepto porque es precisamente lo que estamos tratando— sino que además se reconoció el derecho de resistencia a la opresión como una facultad intransferible del pueblo a no consentir ninguna forma de tiranía, así como el libre acceso a los medios de difusión del pensamiento y a las fuentes de información, como un derecho que no debe ser cercenado por el Estado. Se agregó también que la libertad no puede ser invocada jamás para negar las libertades y derechos reconocidos por la Constitución; que las leyes condenatorias del delito y de los delincuentes sólo pueden ser elaboradas por el pueblo a través de sus propios representantes; que no debe haber pena de muerte; que de ningún modo puede reprimirse la profesión o adhesión a cualquier ideología o religión; que la violencia debe ser erradicada definitivamente de las prácticas políticas, ya que es absolutamente incompatible con el Estado democrático.

Sr. Osella Muñoz. — Protesto, señor presidente, porque el señor diputado está fuera de la cuestión.

Sr. Massolo. — Los partidos políticos estamos frente al problema más grave de la República, cual es el peligro de la inestabilidad del Poder Judicial de la Nación, y yo reclamo para este bloque el derecho de defender la independencia y la inamovilidad de los jueces de la República.

Sr. Slamovits. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Massolo. — Con mucho gusto, señor diputado.

Sr. Slamovits. — Tengo sobre mi banca un ejemplar del Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación correspondiente a la sesión en la cual ese cuerpo trató el proyecto de ley que es motivo de debate en este momento. En esa ocasión el senador de la Rúa, que fue el vocero de la Unión Cívica Radical, manifestó entre otros conceptos —estimo que el Diario de Sesiones los registra fielmente— lo siguiente: «Nosotros compartimos el proyecto en consideración por ese espíritu de justicia que animó a quienes lo presentaron, y por eso discrepamos con el artículo 2º, como bien lo señalara el señor senador Solari Yrigoyen». Esto lo señaló entre otros argumentos que avalaban su posición.

Me preocupa una disparidad tan frontal de opiniones y, por eso, desearía saber si el senador de la Rúa expuso en esa oportunidad el pensamiento del Partido Radical o el suyo personal.

Sr. Massolo. — Con mucho gusto voy a contestar al señor diputado en el momento oportuno porque, por suerte, el pensamiento del gran senador de la Rúa, esperanza presente y del mañana del radicalismo...

Sr. Molina (M. I.). — Nosotros creíamos que la esperanza era Balbín.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Massolo. — El señor diputado Slamovits puede tener la absoluta seguridad de que el pensamiento del diputado que habla es coincidente en un todo con el pensamiento de los representantes de nuestro partido en el Senado de la Nación, los senadores Solari Yrigoyen y de la Rúa. Lo único que pido a la bancada mayoritaria es que tenga la amabilidad de escuchar.

Sr. Vesco. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Massolo. — Sí, señor diputado.

Sr. Vesco. — Hay un detalle que el señor diputado Slamovits, de la bancada mayoritaria, ha pasado por alto al querer señalar una discrepancia entre el bloque radical de senadores y el bloque radical de diputados. Y es que el proyecto de ley sancionado por el Senado difiere fundamentalmente del dictamen de comisión que estamos considerando en este momento. Si ambos difieren, lógico es entonces que también los diputados tengamos nuestras discrepancias. Si aquí la comisión hubiera enviado un dictamen en el que hiciera suyo el proyecto venido en revisión del Senado, posiblemente el despacho hubiera sido suscrito por unanimidad.

Nosotros subscribimos complacidos los fundamentos que informan el dictamen de la mayoría, expuestos por el señor diputado Calabrese, así como subscribimos también complacidos su magnífico discurso de hace unos instantes. Pero aquí se produce un hecho, que puntualizo con todo respeto, porque sabe muy bien el señor diputado Calabrese el afecto personal que le tengo, no de ahora, y es aquella anécdota del cura que dice: haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. De modo que coincidimos con los fundamentos expuestos por el señor diputado Calabrese, pero discrepamos con el articulado del proyecto que está en consideración.

Sr. Calabrese. — ¿Me permite el señor diputado Massolo una breve interrupción para formular una aclaración con respecto a lo expuesto por el señor diputado Vesco?

Sr. Massolo. — Aunque desearía avanzar un poco más en mi exposición, concedo la interrupción al señor diputado Calabrese.

Sr. Presidente (Busacca). — Ruego a los señores diputados que traten de concretarse a la cuestión a fin de no prolongar el debate.

Sr. Calabrese. — Señor presidente: le pido que me disculpe; no es mi intención perturbar la tranquilidad de esta sesión. Pero deseo señalar al señor diputado Vesco —con quien me unen viejos recuerdos— que el proyecto en revisión del Honorable Senado tiene las mismas características que el que estamos tratando. Es decir,

que el artículo 1º de este proyecto es concordante con el artículo 1º del proyecto sancionado por el Honorable Senado.

En cuanto al artículo 2º, tal como ha sido despachado por la mayoría de la Comisión de Justicia, tiende a su mejor comprensión, pero es substancialmente similar, dado que se refiere a las condiciones y requisitos que se exigen para adoptar voluntariamente este régimen, los cuales no difieren de los establecidos en la sanción del Senado.

Si los señores diputados efectúan la comparación de ambos se darán cuenta de que el señor diputado Vesco, a quien considero un hombre de buena fe, ha interpretado mal la redacción del proyecto que estamos discutiendo.

Sr. Presidente (Busacca). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Massolo.

Sr. Massolo. — Continuando con los puntos fundamentales respecto de la preocupación institucional consagrada en los documentos multipartidarios, quiero consignar también aquella declaración según la cual los partidos políticos son órganos insustituibles de la opinión pública, y deben ser reconocidos por la Constitución como una garantía fundamental de la democracia, sin desconocer de ningún modo el derecho de las asociaciones, corporaciones, sindicatos y demás entidades similares a participar de la vida política del país. El federalismo y la descentralización del poder constituyen una garantía esencial de la democracia y la libertad contra la opresión y el despotismo, sobre la base del municipio autónomo, de origen popular.

Sr. Presidente (Busacca). — La Presidencia ruega al señor diputado que se limite al tema en debate, y no prosiga una larga exposición de tipo institucional.

Sr. Massolo. — Voy a tratar de ceñirme al tema, señor presidente.

Sr. Presidente (Busacca). — Muchas gracias, señor diputado.

Sr. Massolo. — La preocupación del bloque de la bancada radical es señalar que no habrá democracia en la República si no hay respeto por las instituciones fundamentales que la suponen. Dejo de lado, entonces, algunos otros puntos relativos a las coincidencias, que tanto bien le hicieron al país y que tanto bien le harán en la medida en que nosotros seamos capaces de subordinarnos con lealtad a su cumplimiento.

Es cierto que en estos documentos que acabo de mencionar no se consignó de una manera expresa la necesidad de respetar el Poder Judicial de la Nación. Pero era un valor entendido. No hacía falta consignar que el camino de la restauración de la normalidad institucional supone en forma insoslayable preservar el normal funcionamiento de los tres poderes del Estado.

Ya el país asistió entristecido al sorpresivo alejamiento de un gobierno que provocó la crisis del Poder Ejecutivo. Ahora se pretende, con medidas de carácter previsional, barrer —ese

es el término preciso, aunque no sean tales las intenciones, limitándonos al texto del artículo 29 del despacho en consideración— de un plumazo todo el Poder Judicial de la Nación, mediante un proceso irregular de vaciamiento institucional que pone en serio peligro las bases mismas de la estabilidad política, del equilibrio de los poderes y de todo el aparato funcional de un verdadero Estado de derecho. Falta ahora, para completar este cuadro sombrío, que un día cualquiera se intente avasallar a este Parlamento, expresión auténtica y genuina de la voluntad popular.

Sr. Osella Muñoz. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Massolo. — Solamente si es muy breve, señor diputado.

Sr. Osella Muñoz. — Brevísima.

Sr. Massolo. — Se la concedo, señor diputado, con la anuencia de la Presidencia.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Osella Muñoz.

Sr. Osella Muñoz. — Simplemente, deseo preguntarle al señor diputado preopinante, con toda amabilidad, si su juicio en materia de respeto a la justicia es coincidente con la forma en que fue removido el Poder Judicial en el año 1955. Y también quiero recalcarle algo que precisamente el propio señor diputado Massolo acaba de expresar: estamos en peligro de avasallamiento de la institución parlamentaria. Me refiero específicamente a esto, porque la secuela del 55 llevó al avasallamiento total e indignante del Poder Legislativo de la Nación. (Aplausos.)

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Massolo. — En su oportunidad habré de contestarle muy brevemente, señor diputado Osella Muñoz, en relación con la remoción de los jueces en el 55.

Sr. Presidente (Busacca). — Señor diputado Massolo: la Presidencia le advierte que lleva insumidos veinticinco minutos del plazo de treinta de que dispone para hacer uso de la palabra.

Sr. Massolo. — Con respecto a la posibilidad del avasallamiento del Parlamento argentino, tenga la absoluta seguridad, señor diputado Osella Muñoz, de que si hubiera un golpe de estado, habría una guerra civil, y nosotros estaríamos allí para defender las instituciones de la democracia.

Sr. Rubeo. — No formule tales conjeturas, señor diputado.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Busacca). — Sírvanse no dialogar los señores diputados.

Sr. Massolo. — Y esta vez, si ello ocurriera —en una hipótesis que desde ya descarto—, la culpa no la tendrían ya los militares sino nosotros mismos, que no habríamos sido capa-

ces de preservar la esencia de la libertad soñada por nuestros mayores y querida por la Constitución de la República.

De continuar con esta filosofía, de arrasar con todo en nombre de una mayoría, que nosotros acatamos porque es la expresión genuina del pueblo, se crearán muchos problemas, pues ésta sólo será legítima en tanto y en cuanto se mueva institucionalmente en la escala de valores fundamentales que resulta de la estructura básica de la república democrática.

No debemos olvidar nunca que la democracia no es sólo un sistema de gobierno, sino que también es un estilo de vida en el que la cantidad —para hablar materialmente— sólo es válida en función de la calidad a la cual debe servir indiscutiblemente.

Cualquier gobierno, aun elegido por unanimidad —y esto lo digo con una profunda convicción democrática y con la absoluta seguridad de interpretar al histórico partido que represento—, no dejará nunca de ser arbitrario si pusiera en peligro una sola de las libertades que hacen a la dignidad de la criatura humana.

Este despacho, tal como ha sido concebido por la mayoría, no sólo violenta el texto expreso de la Constitución, sino que se alza bajo la apariencia de una protección previsional contra uno de los pilares más serios de la garantía de la libertad, como es el Poder Judicial en un Estado de derecho.

Aunque no dudo de la generosidad de las intenciones del señor ministro de Justicia, de la bancada mayoritaria y del propio Poder Ejecutivo, señalo que este proyecto, de apariencia inocente, originariamente era distinto, y la Comisión de Justicia lo ha modificado, produciendo el despacho en consideración.

Todo hacía suponer que en su versión original el proyecto tenía el alto propósito de resolver situaciones de emergencia creadas a raíz del golpe de estado de 1966, particularmente con referencia a los magistrados que, por una u otra causa, carecían del requisito constitucional del acuerdo del Senado para continuar en sus cargos.

Señalo y destaco complacido la opinión del señor diputado Calabrese cuando, al contestar una pregunta de un diputado radical, dijo que interpretaba que todos los jueces designados antes del 28 de junio de 1966 tenían acuerdo y eran por lo tanto inamovibles dentro del régimen de la Constitución en vigencia. Ya veremos que desgraciadamente el pensamiento del senador Saadi no coincide con el del señor diputado.

Sr. Presidente (Busacca). — Le hago notar al señor diputado que ha vencido el plazo de que dispone para su exposición y le ruego que la concluya a su brevedad.

Sr. Massolo. — Pido a la Honorable Cámara que, dada la importancia del tema que se está tratando, me conceda un plazo ampliatorio para

desarrollar mi exposición, porque se trata nada menos que de la estabilidad y el respeto a todo el Poder Judicial.

Sr. Presidente (Busacca). — La Comisión de Labor Parlamentaria ha resuelto por unanimidad no conceder ampliaciones de plazo para usar de la palabra. También le recuerdo al señor diputado que ha hecho una larga disquisición fuera del tema en debate.

Sr. Massolo. — Ruego que se someta a votación mi pedido.

Sr. Presidente (Busacca). — No corresponde porque la resolución ha sido aprobada reglamentariamente.

Sr. Massolo. — En otras oportunidades la bancada mayoritaria ha concedido ampliación de término a los oradores.

Sr. Presidente (Busacca). — Mientras he ocupado la Presidencia de esta Cámara se ha cumplido firmemente con las resoluciones de la Comisión de Labor Parlamentaria.

Sr. Massolo. — Tenga en cuenta la Presidencia que he admitido varias interrupciones.

Sr. Presidente (Busacca). — Por eso le ruego que en pocos minutos concluya su exposición.

Sr. Massolo. — La posición de nuestros representantes en el Senado es igual a la sostenida por nuestros diputados en el seno de la comisión. Tanto el doctor Solari Yrigoyen como el doctor de la Rúa coincidieron con nosotros, con la excepción del señor diputado Vesco, en la legitimidad dada a la situación de emergencia que vive el país y que se contempla por el artículo 1º del proyecto. Pero no aceptamos el artículo 2º y, en esa discrepancia, estuvieron contestes los citados senadores.

Según consta en el Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, en la reunión del 3 de agosto de 1973, en la página 794, el señor senador de la Rúa dijo: «Nosotros compartimos el proyecto en consideración por ese espíritu de justicia que animó a quienes lo presentaron, y por eso discrepamos con el artículo 2º, como bien lo señalara el señor senador Solari Yrigoyen». Y luego agregó que no quería que quedara flotando en el ambiente la idea de que esta ley tiende a propender al retiro forzado de magistrados del Poder Judicial.

Nos ha alarmado la sinceridad con que el señor senador Pennisi ha manifestado en el recinto de sesiones que era fundamental reorganizar los cuadros del Poder Judicial sobre la base de una identificación ideológica. Eso es grave, porque supone una identificación política con un gobierno o con un partido político. Me remito al Diario de Sesiones del Senado de la Nación, correspondiente a la reunión en que se trató este proyecto.

Sr. Calabrese. — No es exacto, señor diputado.

Sr. Massolo. — Es exacto.

Sr. Presidente (Busacca). — Ruego al señor diputado Calabrese que no interrumpa. Oportunamente se le concederá la palabra para una aclaración.

amente se le concederá la palabra para una aclaración.

Sr. Massolo. — Nosotros no estamos cometiendo el infantilismo político de defender al Poder Judicial como un posible reducto de hombres que hayan mancillado la majestad de la justicia, y nos comprometemos a poner la firma a todo proyecto de juicio político cuando en realidad existan cargos suficientes para separar a algún juez de sus funciones, tal como lo dispone la Constitución Nacional, pero nos negamos a solicitar de la mayoría —como lo ha hecho un diputado en este recinto— la suspensión global del Poder Judicial de la Nación por estar todos incurso en el delito de perjurio.

Quiero defender la majestad y el honor de los jueces de la Nación, y si tenemos penalmente la obligación de pensar en la inocencia del más criminal de los delincuentes, creo que debemos conceder a los jueces el derecho de presumir su honestidad hasta tanto se pruebe su culpa, que puede ser motivo suficiente para su separación del cargo. Para esos jueces que han honrado la magistratura, mi admiración y el respeto de este bloque y el mío.

Tendría muchas cosas más que decir. Lamento esta tiranía que supone el acuerdo de la Comisión de Labor Parlamentaria, a la que no hago ningún cargo, porque tenemos que manejarlos de esa manera, pero pido a la Cámara que me permita redondear mi pensamiento.

Sr. Racchini. — Aproveche para contestar la interrupción que le hizo el señor diputado Oseña Muñoz.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Busacca). — Ruego a los señores diputados se sirvan no interrumpir al orador.

Sr. Massolo. — Voy a contestarle al señor diputado. Este es el temor —lo digo como argentino, porque no me interesa mi partidismo, sino el país y la dignidad de la justicia—: en la provincia de Buenos Aires, durante un tiempo, los jueces debían jurar por la Constitución, por la ley y lealtad al presidente de la República y a su señora esposa. No quiero que eso se repita más en la historia del país. (Aplausos.)

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Busacca). — Ruego al señor diputado Massolo que termine brevemente su exposición.

Sr. Massolo. — A pesar de todo cuanto hemos dicho —y esto lo expreso para tranquilidad de la bancada de la mayoría, que se ha considerado atacada, no habiendo sido ése mi propósito—, tengo un profundo respeto por la voluntad mayoritaria del pueblo argentino. A pesar de todo cuanto hemos dicho, señalando los peligros de una legislación contraria a los intereses de la República, quiero manifestar el nombre del bloque de la Unión Cívica Radical

nuestra profunda fe en el país, en la democracia, en la libertad, en la justicia, en la Iglesia, en las fuerzas armadas, en los partidos políticos, en el presidente actual de la Argentina... (Aplausos) ...Esto lo digo como elevando una plegaria al cielo para que ilumine su conciencia y su pensamiento. (Aplausos.)

Tenemos fe en el sufragio, en los sindicatos, en la universidad, en los estudiantes, en los profesores, en el gobierno de la mayoría y en el control constructivo y crítico de la minoría, siempre al servicio del país, de su soberanía, de su reconstrucción, de su emancipación y de su liberación. Tenemos fe en el porvenir de la Nación y acariciamos el sueño de una Argentina potencia integrada en el proceso de liberación de América latina, realizando su destino de grandeza, liberada de todos los embates, al servicio de la humanidad.

Con esa fe elevamos esta plegaria al Señor para que ilumine la conciencia y el pensamiento del actual presidente de la República, teniente general Juan Domingo Perón, y para que nos ayude a nosotros mismos a superar antagonismos, a comprender esta instancia dramática pero promisorio de la Argentina, para realizar la síntesis histórica, la conciliación de los contrarios, sellando todos juntos, sin odios ni rencores, la unidad espiritual del pueblo argentino.

Es un compromiso con la historia. No perdamos el rumbo. La tarea es difícil; es muy difícil llegar, pero si ponemos los ojos en el cielo no nos vamos a cansar nunca. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Balestra.

Sr. Balestra. — Señor presidente: no crean los señores diputados de la mayoría que los muchos papeles que tengo sobre mi banca significan un gran insumo de tiempo. Trataré de ser lo más breve posible, y desde ya agradezco la atención que se sirvan dispensarme, aunque tal vez no coincidamos en los juicios finales espero que sí en los procedimientos.

Viene en revisión del Honorable Senado un proyecto de ley de jubilación de magistrados judiciales que, si bien ha sido tramitado por las comisiones de Justicia y de Previsión Social de la Honorable Cámara, no lo ha sido, sin embargo, por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Resulta obvio que aquí se encuentra cuestionada la Constitución Nacional en varios de sus artículos fundamentales, por lo que en primer lugar, desde el punto de vista procesal, entendemos que ha habido una omisión en el trámite.

Sin perjuicio de ello, y yendo al fondo mismo de la cuestión y a su articulado, pareciera desprenderse del proyecto una intención que, curiosamente, no resulta avalada por el texto de la iniciativa que se envió, y menos por el despacho de la Comisión de Justicia, que la modificó.

En el informe que lleva la firma del señor presidente de la Comisión de Justicia, diputado Calabrese, advertimos citas de Platón, de Aristóteles, de San Agustín y, por último, de Santo Tomás de Aquino, cuando, recogiendo la expresión de Ulpiano, dice de la justicia que es «la constante y permanente voluntad de dar a cada uno lo suyo». En estos términos habremos de ver si a los magistrados se les dará, como consecuencia del proyecto que se propicia, lo suyo de cada uno.

Pero más adelante añade también el informe, en una cita del mismo autor romano, lo siguiente: «Nuestros jueces —la casi absoluta totalidad— dan diario ejemplo, con su vida y su trabajo, de acrisolada honestidad, de limpia pureza interior como auténticos obreros de la justicia y la ley. Tienen decoro, prudencia y pudor intelectual y merecen el respeto del foro y del pueblo en general».

En otro de los párrafos del informe, al solicitar el apoyo de la Honorable Cámara a la iniciativa que refrenda la Comisión de Justicia, dice: «No hacerlo (no prestar el acuerdo) por parte de los representantes del pueblo sería incurrir en flagrante injusticia y abandonar a su suerte a quienes, en años, han trabajado esforzadamente desempeñando con dignidad su misión, cuyo alcance social —que también ya se ha puesto de manifiesto— consiste en estar al servicio de la comunidad, de sus semejantes para hacer respetar los derechos de cada uno y hacer que la justicia sea realidad en cada caso concreto».

Desearía que si en la interpretación que voy a hacer de estos párrafos me equivoco, el señor presidente de la comisión o alguno de sus miembros tengan a bien corregirme. Sin lugar a dudas, la interpretación de estos fundamentos, tan bien redactados, conduce a avalar el beneficio que se concede en el artículo 1º.

Pues bien, ¿quiénes son los beneficiarios del artículo 1º? Magistrados judiciales, fiscales, peritos, secretarios, funcionarios no letrados y otros más que obviamente no tienen —en especial los magistrados, para quienes la resonancia de este proyecto es más importante— acuerdo del Senado.

Si recordamos los fundamentos de la iniciativa y el carácter loable y ponderado que reviste respecto de los magistrados a los que se destina el proyecto, podríamos formularnos la siguiente pregunta: si se trata de excelentes magistrados, ¿para qué necesitan un proyecto de jubilación anticipada si por dichas condiciones deberían ser confirmados? Y en el caso inverso, si esto no fuera así, y estuviéramos en la hipótesis del ínfimo porcentaje minoritario a que se refiere el informe del señor presidente de la Comisión de Justicia, pues habla de la casi totalidad de los jueces, de lo que debemos inferir que una ínfima minoría no está en estas condiciones como para merecer tan alto juicio de valoración,

¿qué sentido tiene concederles un beneficio jubilatorio cuando por la vía del no acuerdo del Senado o en última instancia, aun para los que tuvieran ese acuerdo, por el camino del juicio político podría separárseles de sus cargos?

Sr. Calabrese. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con autorización de la Presidencia?

Sr. Balestra. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Calabrese.

Sr. Calabrese. — No puedo más que confirmar nuevamente las expresiones que el señor diputado acaba de leer, que son parte del informe que dejé pasar por alto para evitar que la Cámara se enfrascara en su consideración, dado que cada uno de los señores diputados lo tiene en su banca. En él está el fundamento de lo que el señor diputado, por medio de su pregunta, quiere averiguar.

Con este proyecto, sobre todo por el artículo 1º, queremos evitar la injusticia de que jueces que han sido promovidos por el gobierno revolucionario por el solo hecho de no contar con acuerdo queden sin ninguna clase de amparo. Así, si un secretario de juzgado, que tiene años en la justicia, ha sido promovido por los órganos del gobierno revolucionario, si no se le presta acuerdo queda sin ninguna clase de protección o beneficio.

Esto significa, como decía al principio y como se expresó en el Senado —y allí sí se contó con la unanimidad de todas las representaciones—, que lo que se quiere evitar es la injusticia de dejar en la calle a aquellos que han cumplido medianamente o con gran éxito y con honor las funciones que se han enumerado.

Con estas palabras aclaro una vez más el sentido del artículo 1º, que además es de tipo facultativo, porque no se obliga a nadie a acogerse a los beneficios de este proyecto que seguramente ha de ser ley.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara, doctor Luis A. García.

Sr. Balestra. — Muchas gracias, señor diputado.

Debo recordar solamente que los secretarios letrados de la justicia no requieren acuerdo del Senado para su promoción.

Sr. Calabrese. — Los secretarios han sido incluidos especialmente a pedido de la bancada radical del Honorable Senado cuando se trataba el proyecto.

Sr. Balestra. — Esa ha sido, seguramente, la voluntad de la bancada radical.

Sr. Calabrese. — Y aceptada por la mayoría.

Sr. Presidente (García). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Balestra.

Sr. Balestra. — Señor presidente: en definitiva, no vamos a cuestionar fundamentalmente este artículo 1º. Desde luego que no es el para-

digma de la constitucionalidad, ni el arquetipo de la igualdad, ni la bondad de la técnica jurídica, pero creemos que respecto de él pudieron hallarse bien intencionados —no lo pongo en duda— los miembros de la Comisión de Justicia y sus autores, porque forzoso es reconocer que el país sale de atravesar un largo interregno institucional de ocho años sin elecciones y de siete años sin gobierno constitucional. Por lo tanto, ha habido necesariamente que cubrir cargos en la justicia que no vendrían a estar beneficiados con la inamovilidad consiguiente a las normas sobre las atribuciones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial que trae la Constitución. De modo que no vamos a formular una objeción frontal a este artículo, aunque pensamos que lo correcto sería confirmar a todos aquellos magistrados que lo merecieran, con independencia de su filiación política, porque así como el Poder Ejecutivo es el gobierno del partido, el Poder Judicial es el gobierno de la justicia, con prescindencia de todo contenido político.

Donde sí creemos que se incurre en una gravísima transgresión constitucional, donde sí creemos que hay un equívoco, porque no puede ser de otra manera, es en el artículo 2º. Estoy seguro que, de persistir este equívoco en la Honorable Cámara, y de subsistir aun en el Senado, el presidente de la República vetará esta ley, porque debo recordar a la Honorable Cámara que al aceptar su tercera candidatura el presidente de la Nación manifestó públicamente que «nadie es suficientemente libre si no es esclavo de la Constitución».

Obsérvese que el artículo 2º dice que «por esta única vez, los magistrados y funcionarios a que se refiere el artículo anterior, que tuviesen como mínimo sesenta años de edad, podrán acogerse dentro de igual plazo —o sea treinta días— a los beneficios jubilatorios vigentes, aunque éstos exigiesen un mayor límite de edad». Hasta aquí habría una similitud de condiciones con los jueces mencionados en el artículo anterior. Pero adviértase que este artículo 2º comprende también a los magistrados que tienen acuerdo del Senado, y es preciso ratificar categóricamente que los magistrados que tienen acuerdo del Senado son absolutamente inamovibles y sólo podrían ser separados de sus funciones por medio del instituto excepcional del juicio político propiciado por este cuerpo.

Ahora bien, ¿qué ocurre si vencido ese plazo estos magistrados no optan por el beneficio que se les acuerda? Quedarán sometidos al régimen establecido por el decreto ley 18.037, y de acuerdo con su reglamentación el beneficio jubilatorio que van a percibir no va a pasar los 300.000 pesos moneda nacional mensuales.

Aquí sí, señor presidente, se está transgrediendo la Constitución, porque se afecta el principio de la igualdad ante la ley, ya que se coloca a los magistrados más modernos —digamos

así— en desigualdad respecto de los que tienen más de 60 años de edad. Parecería que esto obedece, como lo manifestara el señor miembro informante y presidente de la Comisión de Justicia, a que la edad de 60 años es suficiente como para dar por culminado el ejercicio de las funciones judiciales. Pero obsérvese que tengo en mi poder una lista de magistrados designados por el actual gobierno, con acuerdo del Senado, desde el 25 de mayo, en la Corte Suprema de Justicia, en las cámaras de apelaciones del Trabajo, en la Cámara Federal, en la Cámara Comercial y en la Justicia de Paz, cuyas edades oscilan entre los sesenta y cuatro y los setenta y cuatro años, pasando por sesenta y seis, sesenta y ocho, setenta y setenta y tres.

Sr. Calabrese. — ¿Y qué puede decir el señor diputado de los que fueron dejados cesantes en 1955?

Sr. Balestra. — Eso no está contemplado, ni puede estarlo, en el texto de esta ley, porque ella no trata de dar una reparación a aquellos que han sido dejados cesantes.

Por otra parte, quiero dejar aclarado ante esta Honorable Cámara que no estoy cuestionando las designaciones hechas por el Poder Ejecutivo. En buena hora están hechas si el Poder Ejecutivo cree que éstos son los hombres idóneos para tales cargos. Pienso que las remociones que se han hecho tanto en el Poder Judicial como en las universidades, en forma masiva e indiscriminada, en cualquier tiempo, han sido mal hechas. Pero no es eso lo que se cuestiona. Si el Poder Ejecutivo entiende que determinados magistrados están habilitados sin límites de edad para el desempeño de sus funciones, no puedo concebir por qué en casos análogos sostiene lo contrario, ya que se estaría interpretando la ley en forma diferente; y esto sí, Honorable Cámara, es inconstitucional.

De ahí que respecto de este artículo 29 —el señor presidente sabrá comprenderlo quizá con mayor énfasis que otros componentes de este cuerpo— sea ineludible la intervención de la comisión que preside. Es ineludible, señor presidente García, que la comisión que usted preside entienda en este asunto para no correr el riesgo de que el Poder Ejecutivo tenga que vetar una ley por inconstitucional.

Sr. Presidente (García). — La Presidencia advierte al señor diputado que sólo le restan tres minutos del tiempo de que dispone para su exposición.

Sr. Balestra. — Agradezco a la Presidencia la indicación que me formula.

En cuanto al artículo 39, el ejercicio de los derechos establecidos en los artículos precedentes obliga a la permanencia en los cargos hasta el relevo oportuno, lo que también es discriminatorio. Si bien naturalmente el Poder Ejecutivo de la Nación tiene que tomarse un tiempo prudencial para relevar al setenta por ciento como máximo de los magistrados, porque

entiendo que el Ministerio de Justicia y la Presidencia de la República deberán hacer un uso prudente de este como de cualquier otro instrumento legal, evidentemente no es justo que a los magistrados que optan por los beneficios jubilatorios mientras están en funciones se les otorgue el setenta y cinco por ciento de sus sueldos, porque son magistrados como cualesquiera otros.

Sr. Calabrese. — Se les otorga el setenta y cinco por ciento de su sueldo cuando dejan el puesto por haber optado por acogerse al régimen de esta ley a los efectos de que no se demore el pago correspondiente, para luego reajustárselo con la jubilación que en definitiva tengan que percibir.

Sr. Balestra. — Si así fuese el espíritu de la disposición, yo no tendría nada que objetar, pero le advierto que eso no está dicho de ninguna manera en el proyecto en consideración, del que resulta claramente lo contrario. De modo, pues, que la reciente manifestación del presidente de la comisión debería quedar como clara expresión del espíritu del legislador.

El artículo 49 vuelve a contravenir el principio de igualdad, porque excluye de las disposiciones establecidas en este proyecto a los magistrados designados con posterioridad al 24 de mayo del corriente año.

Desde luego que podrán cuestionarse los tribunales especiales por estar fuera de la Constitución, pero en rigor, todo proceso de facto, todo gobierno que no es elegido por el pueblo, está constitucionalmente viciado y sólo puede ser justificado históricamente a través de una valoración de tipo ético o político que determine, en perspectiva, superadas las pasiones de los hombres y el tiempo, cuál es la justificación histórica que una revolución puede tener. Quizá para nosotros sea prematuro verter juicio de valor sobre las revoluciones del 43, 55 ó 66. Lo haríamos siempre con la pasión de los partidarios de determinado sistema político. En rigor, todo tribunal creado por un gobierno de facto es inconstitucional, pero resulta discriminatorio ceñir a diez días antes o diez días después un beneficio a magistrados que, por otra parte, ya lo eran de otros tribunales no especiales con anterioridad a este régimen, y por haber integrado una cámara especial o por haber incurrido en un posible error de decisión, marginarlos de tal beneficio.

Sr. Presidente (García). — La Presidencia advierte al señor diputado que ha vencido el plazo de que disponía para su exposición.

Sr. Balestra. — Terminó, señor presidente.

El artículo 59 estimo que establece un buen principio, pero considero que debe extenderse a partir del 24 de mayo.

Con estas consideraciones, hago una invitación concreta a la Honorable Cámara para que reflexione acerca de los alcances de esta disposición, medite sobre la importancia de la

independencia del Poder Judicial que es garantía de la democracia representativa, fuente a su vez de nuestro mandato en este honorable cuerpo, y revise con prudencia y sensatez, exentas de todo partidismo, el contexto en que se ha de desempeñar el Poder Judicial en una república democrática, soberana y próspera. (Aplausos.)

Sr. Presidente (García). — Tiene la palabra el señor diputado Falabella.

Sr. Falabella. — Señor presidente: tengo necesidad de fijar la posición de mi bloque sobre el proyecto de ley de jubilación de magistrados, toda vez que mi firma aparece en el despacho mayoritario, y podría suponerse que comparto los fundamentos. Aclaro que no es así. En este caso mis convicciones tienen o poca suerte o poco acierto. No comparto la opinión de ninguno de los señores diputados preopinantes, y voy a dar mi tesis.

Con antecedentes normales, no habría tenido duda alguna en señalar que el artículo 2º de este proyecto contraviene el principio del artículo 96 de la Constitución Nacional, porque crear una alternativa rígida de este tipo a quien se le ha prometido la inamovilidad resultaría, en la mayoría de los casos, forzado a renunciar a tal inamovilidad.

Pero este problema que me trajo dudas, cambia fundamentalmente cuando analizamos los antecedentes.

El día 27 de junio de 1966 todos los señores jueces que se encontraban en funciones habían jurado de acuerdo con el reglamento para la justicia nacional, cuyo artículo 17 trae la fórmula expresa y sacramental, por la que cada juez es preguntado para que conteste si va a observar fielmente la Constitución Nacional.

El 28 de junio de 1966 un acta presuntuosa, que se suponía avalada por la totalidad del pueblo argentino, altera la prelación legal establecida por el artículo 31 de la Constitución Nacional y subordina la Constitución al estatuto de la «revolución argentina», al punto que en virtud de esa acta se dispone separar de sus cargos a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y al procurador general de la Nación y se establece el juramento de desempeñarse administrando justicia de conformidad con lo que prescriben los fines revolucionarios, el estatuto revolucionario y la Constitución Nacional. El juramento que fija el acta de la revolución dice: «Juro observar fielmente los fines revolucionarios, el estatuto de la revolución y la Constitución argentina.» Y en el artículo 3º del estatuto se establece que el gobierno, en todos sus poderes, se ajustará a las disposiciones de ese estatuto, a las de la Constitución Nacional y a las leyes y decretos dictados en su consecuencia en cuanto —obsérvese la parte final, que incluye a la Constitución— no se opongan a los fines enunciados en el acta de la «revolución argentina».

Quiere decir que quienes juraron inicialmente por la Constitución Nacional y desempeñaron a posteriori sus cargos bajo la prelación del acta y del estatuto de la revolución, infringieron su juramento, porque subordinaron la Constitución, que habían jurado solemnemente defender, a un estatuto de la revolución que no había votado nadie y que no estaba en el ordenamiento institucional ni en el régimen jurídico argentino.

Sr. Osella Muñoz. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Falabella. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (García). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Osella Muñoz.

Sr. Osella Muñoz. — Deseo contribuir a la exposición del señor diputado brindándole antecedentes que se relacionan con lo que está exponiendo.

Algo semejante ocurrió en 1955 cuando la Corte Suprema se vio constreñida a jurar por los fines de la revolución. Un magistrado no comprometido en nuestra ideología, como él mismo lo señala en su renuncia, merece ser recordado en estas circunstancias por cuanto en ejemplar actitud reivindicó los mismos principios que en este momento está sosteniendo el señor diputado Falabella. Me refiero al doctor Jorge Vera Vallejo, quien en mayo de 1956 presentaba su renuncia como ministro de la Corte Suprema de Justicia.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Isidro J. Odena.

Sr. Osella Muñoz. — Su renuncia, dirigida al ministro de Justicia, doctor Laureano Landaburu, estaba concebida en los siguientes términos: «Tengo el honor de dirigirme a V. E. y por vuestro digno intermedio al señor presidente del gobierno provisional de la Nación, haciendo renuncia del cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia para el que fui designado por decreto del ex presidente general Eduardo Lonardi de fecha 6 de octubre de 1955.

«Determina esta actitud la proclama emitida “con fuerza obligatoria” por el gobierno provisional de la Nación el día 27 de abril próximo pasado, por la que declara vigente la Constitución Nacional sancionada en 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898, y exclusión de la de 1949, y con la reserva expresa de que ajustará su acción a esa Constitución “en tanto y en cuanto no se oponga a los fines de la revolución enunciados en las directivas básicas del 7 de diciembre de 1955 y a las necesidades de la organización y conservación del gobierno provisional”.

»En homenaje a altos intereses nacionales pienso que al adoptar esta actitud debo abstenerme de examinar y juzgar los fundamentos y

alcances de esa proclama. Debo sí, para evitar erróneas interpretaciones, dejar constancia de que no me anima preferencia ni simpatía alguna por la reforma de 1949.

»Para fundamentar esta renuncia tomo especialmente en consideración, como juez de la Corte Suprema de Justicia —intérprete final y guardián de la Constitución—, el conflicto de conciencia que me crea dentro de mis sentimientos y mi temperamento el hecho de haber jurado, al asumir el cargo, "por Dios, Nuestro Señor, y sobre estos Santos Evangelios... a administrar justicia... de conformidad con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional", lo que importaba implícitamente reconocer vigencia a la sancionada en 1853 con todas sus reformas de 1860, 1866, 1898 y 1949 aun excluida ahora esta última por otra vía que la preceptuada por la misma Constitución y limitada en toda su extensión por una amplia reserva sujeta al exclusivo criterio del gobierno provisional.

»Ante este conflicto que no me es dable salvar por simples razonamientos de orden político y aun jurídicos, no me queda otro camino, para tranquilidad de mi conciencia, que dimitir al honroso cargo, retirándome a mi hogar provinciano, de donde fui llamado para conferirme estas tan delicadas funciones.»

Quería de esta manera aportar un valioso antecedente a la exposición del señor diputado Falabella.

Sr. Presidente (Odena). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Falabella.

Sr. Falabella. — El señor diputado ha traído un antecedente que no se desvincula con este asunto y me ha aportado estímulo para que yo también recordara.

Un día recibí el llamado de un señor ministro de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, quien me dijo lo siguiente: «Yo tengo simpatías por la revolución (se trataba de esta llamada revolución argentina) pero yo juré por la Constitución Nacional». Y me pidió la opinión sonriendo, porque sabía de qué manera le iba a contestar. Y cuando le dije que el que había jurado una vez no podía hacerlo dos veces sin mengua de la dignidad que se necesita para ejercer el cargo, me dijo: «Yo tengo ya mi renuncia firmada, pero le pido que solicite al señor ministro fulano de tal que me acompañe en la actitud porque aunque él va a tener dificultades económicas y financieras yo no desearía que viviera con vergüenza.» El primero fue el calificado jurista don Augusto Mario Morello y el segundo requerido fue el ministro José María Martocci. Ambos renunciaron a su cargo, actitud que dejaba muy bien a las claras cuál debía ser la postura moral de quienes habían jurado una vez por la Constitución Nacional. Entonces di mi opinión ante una calificada consulta, de manera tal que puedo decir aquí que no improvisó.

Yo le preguntaría a los señores diputados preopinantes, y en particular al señor diputado Massolo, si ese juez que jura por la Constitución Nacional y luego la subordina al estatuto de una revolución que no estaba en el complejo de la democracia, que no tenía el apoyo de la voluntad popular, que no representaba a la soberanía y que por ende constituía la más alta violencia a los principios de la Constitución, podría demandarnos ahora la observancia del principio del artículo 96 de esa misma Constitución que subordinó y mal juró.

Sr. Massolo. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Falabella. — Con mucho gusto.

Sr. Massolo. — En primer término, quiero advertir al señor diputado que no todos los jueces juraron por el estatuto revolucionario.

Sr. Falabella. — Yo no he dicho tal cosa.

Sr. Massolo. — De cualquier manera, si es perjurio aquel que siendo juez acepta implícitamente un estatuto revolucionario colocado por encima de la Constitución Nacional, fueron perjuros todos los jueces de la revolución liberadora...

Sr. Falabella. — Si el señor diputado se refiere a mí, le diré que juré por la Constitución Nacional una sola vez y que cumplí con la Constitución Nacional.

Sr. Massolo. — Eso me consta, señor diputado. Pero no me parece que haya otro camino más honesto y constitucional que separar por el juicio político a aquel magistrado que, habiendo jurado por la Constitución, juró luego por un estatuto colocado por encima de la Constitución.

Sr. Falabella. — ¿Usted cree que correspondería el juicio político?

Sr. Massolo. — Sí, señor diputado.

Sr. Falabella. — Quiere decir que el señor diputado está de acuerdo conmigo en que son perjuros.

Sr. Massolo. — Pero son una ínfima minoría; quién sabe si alcanzan al diez por ciento.

Sr. Falabella. — Le voy a decir a mi distinguido compueblano que yo me he referido a dos tipos de jueces. En primer lugar, está el tipo de juez que venía ejerciendo su función desde antes, pero que aceptó que se subordinara la Constitución Nacional, de manera tal que consintió la alteración de la prelación establecida por el artículo 31 de la propia Constitución y debió servir necesariamente a un orden jurídico fundado en la primacía del estatuto y del acta de la revolución.

En segundo lugar, están aquellos jueces que prestaron un juramento que habría que inscribir en una piedra con características de lápida, por supuesto, que dice así: «¿Juráis por Dios nuestro Señor y por la patria, sobre estos Santos Evangelios, desempeñar con honor y lealtad el cargo de... para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar las disposiciones del estatuto de la revolución argentina

y de la Constitución Nacional?» (artículo 17 de la modificación a la ley reglamentaria de la justicia nacional por acordada de la Corte del 22 de agosto de 1966).

Yo no sé si en definitiva Dios será juez de estos señores (*Risas*); pero creo que nosotros estamos en la obligación de ser jueces de quienes juraron de esta manera, cuando era muy claro el principio de la Constitución de 1853.

Sr. Mauhum. — Pero por el camino de la Constitución.

Sr. Massolo. — Por la vía idónea.

Sr. Falabella. — He dicho al señor ministro Benítez que a mi juicio todos los jueces debían desaparecer. Voy a hacer después la aclaración sobre las condiciones en que, como conservador y principista, hubiera querido que se hicieran las cosas. Me contestó el señor ministro: «A usted no se le oculta que la Cámara debería trabajar cinco años nada más que para eso, y ustedes tienen una función inmediata que cumplir. No habría posibilidad de tramitar trescientos o cuatrocientos juicios políticos, desarrollando alguna otra actividad simultáneamente». Y agregó el señor ministro: «Nosotros entendemos que ésta es una fórmula mucho más generosa; si usted está de acuerdo con nosotros en que esos magistrados no tienen derecho a la inamovilidad, por lo menos vamos a concederles la jubilación como un beneficio dado a quien ha trabajado mucho, aunque no haya trabajado bien».

Sr. Balestra. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Falabella. — Sí, señor diputado.

Sr. Balestra. — El señor diputado afirma que todos los jueces de la Nación, sin exclusión alguna, están incurso en la causal de juicio político, lo cual significa en el tenor de la Constitución que han desempeñado mal sus funciones y merecen que la Cámara de Diputados de la Nación los enjuicie para removerlos.

Deseo preguntar al señor diputado si con su afirmación —que yo no reputo verdadera ni falsa— no sólo se está cuestionando ya a los jueces, individualmente considerados o en conjunto, sino a la institución misma del Poder Judicial.

Sr. Presidente (Odena). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Falabella.

Sr. Falabella. — Por supuesto, dentro de nuestro régimen republicano la institución no se la puede cuestionar, pues como lo han destacado los señores diputados Calabrese y Massolo, tiene una función eminente. Han sido los intermediarios en la acción, los titulares de los órganos y no el Poder Judicial los que han incurrido en la claudicación. Pero si la pregunta del señor diputado Balestra iba dirigida a arrancarme un acto de confesión en cuanto a mis convicciones, le digo terminantemente que pienso que esos magistrados están no ya en mala conducta sino en la peor de las conductas, por haber faltado al juramento inicial que prestaron.

Sr. Massolo. — ¿Incluso el juez Lozada?

Sr. Falabella. — El juez Lozada pudo tener algunos aciertos, pero si juró dos veces o si aceptó el estatuto de la revolución, no me agrada la base moral en que asienta su función.

Sr. Massolo. — A mí me interesa más que haya defendido el patrimonio moral y material de la Nación.

Sr. Falabella. — Eso es subordinar los fines a los medios.

Sr. Suárez (H. F.). — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Falabella. — Sí, señor diputado. ¿El señor presidente computará todas estas interrupciones? (*Risas*.)

Sr. Suárez (H. F.). — Considero que, como diputados de la Nación, cumplimos una función pública primordial en el país.

Si, como afirma el señor diputado, los magistrados judiciales sin exclusión alguna están incurso en faltas gravísimas que los hacen pasibles de juicio político, creo que nosotros no debemos convertirnos en cómplices de quienes han violado la ley o la Constitución, sino que por el contrario, como legisladores nacionales, tenemos el deber moral de someterlos a juicio, como es sometido a juicio cualquier individuo que incurre en un delito previsto por el Código Penal. De no actuar en esa forma y tenderles un camino de plata proporcionándoles un retiro honesto para su futuro, nos estamos convirtiendo lisa y llanamente en cómplices de quienes han violado la ley o la Constitución, según lo asegura el señor diputado Falabella.

Hago esta observación, no porque tenga que defender en particular la situación de algún juez de la Nación, sino porque debemos preservar el prestigio del Parlamento, ya que para eso nos votó el pueblo de la República.

Pienso que los argumentos del señor diputado son suficientemente serios y graves como para que debamos llamar a las cosas por su nombre. Nosotros no podemos fomentar ni apañar la delincuencia ni la violación de la ley y de la Constitución. Los señores magistrados que han violado de tal forma y muy flagrantemente la ley y la Constitución deben someterse al juicio que las leyes imponen; de lo contrario, estaremos tratando de imponer una ley de olvido o dándole un premio a quienes han violado lo más sagrado que tenemos en el país y que debemos preservar: la Constitución de la Nación Argentina. (*Aplausos*.)

Sr. Presidente (Odena). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Falabella.

Sr. Falabella. — Si esta Honorable Cámara resolviera por unanimidad o con la mayoría necesaria el enjuiciamiento de todos los jueces que subordinaron a la Constitución Nacional, querría ser uno de los primeros votos afirmativos para tal sanción.

Entiendo que este procedimiento excogitado no es el óptimo ni el más recto. Lo he hecho

saber y lo he dicho en varias oportunidades. Ante la imposibilidad material de hacer juicio político a los magistrados, solamente señalo una cosa: cualquier argumento puede darse aquí, menos el de que estos señores jueces sigan gozando del derecho que les acuerda y permite el artículo 96 de la Constitución Nacional, o sea el derecho a la inamovilidad, que ha desaparecido automáticamente en el momento en que ellos desconocieron esa Constitución en la que ahora pretenderían ampararse.

Sr. Balestra. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Falabella. — Sí, señor diputado.

Sr. Balestra. — Señor presidente: dadas las precisiones formuladas por el señor diputado Falabella y la distinción que él ha realizado, entiendo que los señores magistrados que continuaron desempeñando sus cargos —si no he interpretado mal— luego del hecho revolucionario, pero que no juraron por el estatuto de la revolución, no estarían incurso en la causal de juicio político.

Sr. Falabella. — Sí, señor diputado; estarían incurso, porque se creó un nuevo orden jurídico.

Sr. Balestra. — Entonces, de ello se desprende la consecuencia de que absolutamente todos los jueces deberían haber cesado en sus funciones por haber actuado durante el gobierno de la revolución, cosa que no ha ocurrido en ningún tiempo de la historia ni en ningún país. Si fuese así, estaríamos incurso en el delito de infames traidores a la patria todos los que hubiéramos respetado las leyes sancionadas por el gobierno de la revolución. No estarían incurso en tal delito los que no hubieran respetado esa legislación. ¿Cuántos habitantes del país estarían en esa situación, señor diputado?

Sr. Presidente (Odena). — Antes de la interrupción concedida al señor diputado Balestra, el señor diputado Falabella había excedido el tiempo que le correspondía. Le ruego, por lo tanto, que concluya su exposición.

Sr. Falabella. — Los que se han excedido en el tiempo son quienes me han interrumpido.

Voy a concluir señalando al señor diputado Balestra que el ciudadano que debió aceptar la fuerza incoercible y que no pudo resistirse a ella, por supuesto, no asumió responsabilidad alguna. Pero el magistrado que se insertó en un nuevo orden, distinto al que había jurado, y que tuvo que efectivizar todos los días ese ordenamiento jurídico mediante la redacción y firma de sentencias, tiene grave complicidad, ya que nada hubiera impedido su renuncia, que no hubiese sido un acto de resistencia, sino de independencia mental y moral. Pero no lo hicieron. (*Aplausos.*)

Señor presidente: estos fundamentos, que creo irrefutables —pues no estoy en la alterativa del señor diputado Balestra de que sean o no valederos— son terminantes porque nacen de la Constitución misma.

Si bien estoy dispuesto a votar el artículo 29, que abre la posibilidad de llegar al mismo fin que yo hubiera pretendido por la vía drástica, me siento en la obligación moral de decirle al gobierno argentino, a manera de respetuosa sugerencia, que no utilice estos vacíos que se van a dar en el Poder Judicial para hacer un poder adicto o para organizar una administración judicial obsecuente.

Digo lo del diputado Massolo: me inspira una gran confianza el señor ministro de Justicia. Le pregunté al señor ministro: ¿se pretenderá fijar el recaudo de la afinidad política e ideológica para cubrir las vacantes de los jueces? Y el señor ministro me contestó: señor, se fijará el recaudo de la probidad y de la aptitud.

A este país le están haciendo falta jueces dignos. No me voy a cansar de decirlo. Por lo tanto, la designación de un juez tiene que ser un alto premio, debe ser la manera de coronar una vida ilustre. Y como en Inglaterra, llevar al hombre consagrado por la ciencia y por la virtud y no elegir para jueces a algunos desocupados o a los preferidos por estar inscritos en la lista del partido oficial. Los jueces deben significar en la República la más alta jerarquía moral, y además se les debe dar una retribución tal que estén a salvo de los llamados de la sensualidad.

Si queremos un país fuerte, un país pujante y enérgico, una sociedad organizada y respetuosa y un pueblo que crea, que sienta y que piense en el país con pasión y con fe, pongamos a los mejores hombres que hay en la Argentina en el sillón augusto de la magistratura, para que se sepan hartos premiados por la dignidad alcanzada.

Creo que en estos momentos el gobierno de la Nación tiene buenas intenciones para cubrir tales vacantes. Y desde ya digo que si incurriere en falta, ésta será una banca desde la que señalaré que mi voto fue utilizado con un fin no querido. (*Aplausos prolongados.*)

Sr. Presidente (Odena). — Tiene la palabra el señor diputado Suárez.

Sr. Suárez (H. F.). — Señor presidente: en tiempo oportuno y acompañado por el señor diputado de la bancada mayoritaria, doctor Ricardo Falú, presentamos a esta Honorable Cámara las observaciones formuladas al dictamen en mayoría de la comisión.

Ya en oportunidad de la visita del señor ministro de Justicia a la comisión especializada de este cuerpo, de la cual formo parte, se le hizo una serie de preguntas con respecto al motivo que inspiraba el proyecto de ley que tratamos, que por circunstancias que desconozco, aparece como iniciado en la Honorable Cámara de Senadores, siendo en realidad un proyecto elaborado en el Poder Ejecutivo. Llegamos entonces a la conclusión primera de que el motivo inspirador de este proyecto estaba única y exclusivamente cimentado en la situación creada

por los señores jueces que no cuentan con acuerdo legislativo. Y aquí, punto.

Se dijo, como bien lo ha señalado el señor diputado Falabella, que resultaría engorroso al Parlamento promover juicios políticos contra estos magistrados. Pero yo me permití señalar al señor ministro de Justicia, coincidiendo con la opinión de la mayoría, que esos magistrados, al no contar con el acuerdo legislativo, carecen de la protección constitucional de la inamovilidad en el cargo; en consecuencia, no existe aún ninguna explicación fundamentada como para que el Poder Ejecutivo, en uso de las atribuciones constitucionales que inviste, no pueda designar, como lo ha hecho en algunos casos, a los reemplazantes de esos magistrados sin necesidad de someterlos a juicio político. Es cierto que no puede someterse a juicio político a quienes no gozan de la inamovilidad. Por consiguiente, ¿cuál es el impedimento que tiene el Poder Ejecutivo de la Nación para proponer al Honorable Senado el acuerdo para aquellos jueces que los vayan a reemplazar?

Sr. Calabrese. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Suárez (H. F.). — Sí, señor diputado.

Sr. Calabrese. — Creo haber entendido que el señor diputado sostiene que los jueces carentes de acuerdo no pueden ser sometidos a juicio político. ¿Esto es lo que ha afirmado el señor diputado?

Sr. Suárez (H. F.). — Sí, señor diputado.

Sr. Calabrese. — Disculpeme, pero es un gravísimo error. Los jueces que no tienen acuerdo, mientras no sean reemplazados son jueces como aquellos que tienen acuerdo. Tanto es así que la Corte Suprema de Justicia actual ha enviado a esta Honorable Cámara los elementos para el juicio político del ex juez Venini, que en ese entonces era juez y no tenía acuerdo.

Muchas gracias, señor diputado.

Sr. Suárez (H. F.). — Creo que es una cuestión de interpretación, que voy a tratar de aclarar. Me refiero al procedimiento, y no exclusivamente a la situación personal de los señores jueces. Concretamente, aludo a la substitución de esos magistrados, porque si no gozan de la garantía de la inamovilidad lógicamente para su remoción o su substitución no se hace necesaria la promoción del mecanismo del juicio político. Vale decir que mientras el Poder Ejecutivo, en la opinión expresada a través del Senado, toma como argumento la necesidad de solucionar el problema creado por estos magistrados como fundamento para apoyar este proyecto de ley, en realidad la situación creada por estos jueces, en mi criterio, carece total y absolutamente de relevancia.

Pero vayamos más allá, señor presidente. A lo largo de todo el debate, los distintos oradores que han intervenido, comenzando con el señor miembro informante, presidente de la Comisión de Justicia, han hablado exclusivamente de la

situación de los señores jueces, y frente a ellos encontramos con la gran sorpresa de que ésta es una ley ómnibus, donde quizás el único que quede exento de sus previsiones sea el ordenanza del tribunal. Tanto el proyecto originario como el dictamen de la mayoría no sólo hablan de los señores jueces, sino que mencionan a secretarios, prosecretarios, fiscales, defensores y todos los demás funcionarios que revisten cierta y determinada categoría dentro del escalafón del Poder Judicial de la Nación.

Si los móviles, el motivo fundamental o la inquietud de quienes tuvieron la iniciativa del proyecto consistieron en buscar la forma de institucionalizar en forma clara y definitiva el Poder Judicial de la Nación, y si el principal o único elemento ha sido el problema creado por los jueces, nosotros nos preguntamos —y lo dijimos en la Comisión de Justicia— qué tienen que hacer dentro del artículo 1º de este proyecto todos los demás funcionarios que se incluyen. ¿O es que no sólo los jueces molestan en este momento a quienes promovieron o iniciaron este proyecto? ¿Acaso se quiere disponer de la mayor cantidad posible de cargos dentro de la administración de justicia de la Nación para otros fines, lo cual me resisto a creer, como lo digo con total y absoluta honestidad? ¿Acaso vamos a truncar la carrera judicial para impedir que asuman las magistraturas máximas del organismo judicial, de acuerdo con los reglamentos vigentes, aquellos que han labrado esa carrera en el transcurso de muchos años de servicio? ¿O es que detrás del proyecto de ley que estamos tratando hay otra intención?

Insisto en que esto me duele profundamente y me resisto a creerlo, porque pienso —junto con mi creencia en la honestidad de los actos de gobierno— que todos sabemos que más allá del instante que vivimos no tenemos más alternativas. Debemos preservar nuestras instituciones democráticas, y debemos salvarlas a costa de cualquier sacrificio, siempre dentro del encuadre de la Constitución y de la ley. No podemos hoy jugar, y dar un salto en el vacío. La historia nos empuja, y el futuro ha de ser muy incierto si nos equivocamos. Como lo he dicho con total y absoluta certeza en este recinto, el Poder Judicial de la Nación es uno de los pilares fundamentales en el que se asienta el sistema democrático de gobierno que estamos empeñados en mantener y fortalecer a costa de cualquier sacrificio.

Si disponemos de los mecanismos y los resortes necesarios a través del Poder Ejecutivo por un lado y del Poder Legislativo por el otro, para dar una solución ecuaníme y constitucional al problema judicial de la Nación, conforme a los cánones que nos fija la Constitución Nacional, ¿por qué vamos a torcer la marcha creando este instrumento que puede prestarse a cualquier equívoco y puede dar por tierra con lo que nosotros tanto preconizamos?

¿Acaso ignoramos que, desgraciadamente —y debemos reconocer que ello ha ocurrido en todas las épocas en nuestro país—, por no respetarse la carrera judicial, se ha ido injertando con el título de magistrados hombres traídos de la calle por distintas situaciones de carácter económico o quizá, con más preponderancia, de carácter político, para cumplir la delicada función de la justicia? ¿Es que no vamos a aprender, de una vez por todas, que debemos organizar un Poder Judicial desde su raíz para poder exigirle todo lo que nosotros podamos y debamos exigirle?

Evidentemente, señor presidente, nos encontramos ante una situación muy delicada. Ya se ha dicho en este recinto que este hecho es de trascendental importancia para el futuro de la vida institucional de nuestro país. ¿Por qué, entonces, nos empeñamos y aferramos en sancionar un proyecto de ley que merece objeciones desde todos los ángulos en que se lo analice? Posiblemente sea éste el primer proyecto de ley respecto del cual las bancadas minoritarias no comparten el criterio de la mayoría. Por algo ha de ser.

Sr. López (D.). — Eso se llama democracia.

Sr. Suárez (H. F.). — Nosotros estamos empeñados, señor presidente y señores diputados de la mayoría, en poner el hombro a la reconstrucción nacional, como lo hemos demostrado en todo instante. En ningún momento se hicieron exposiciones u oposiciones caprichosas o arbitrarias, al extremo de que la mayoría de los proyectos de ley y de resolución que sancionó la Honorable Cámara lo han sido casi por unanimidad, y cuando hemos disentido en algo ha sido por cuestiones estrictamente formales, buscando el mayor apoyo posible para que el gobierno no se equivoque. La realidad es ésta.

Aquí tenemos que hacer un distingo muy claro con respecto a la situación de los señores magistrados que no cuentan con acuerdo legislativo. Yo comparto el criterio de que, si no cuentan con acuerdo legislativo, esos señores deben dejar de cumplir su función y así como ingresaron deben irse, pero no tenemos por qué premiarlos. ¿Cuál sería la razón para premiarlos? Yo sé que el señor presidente de la Comisión de Previsión y Asistencia Social tiene sus grandes dudas y considera que ésta es una norma de privilegio que importa un trato irritativo en relación con los otros sistemas que imperan en el país. Entonces, de ser así, ¿por qué vamos a crear privilegios? Esto es algo que no alcanzo a comprender.

Comprendo sí que aquellos que juraron por un estatuto y que no cumplieron con los recaudos constitucionales vigentes y no cuentan con acuerdo legislativo deben indefectiblemente dejar de desempeñar sus funciones. Yo fui uno de los separados del cargo por no jurar por el estatuto de la revolución argentina. Desempe-

ñaba el cargo de presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro. Resigné mi función por no jurar por un estatuto que era ajeno y repugnante a mis principios republicanos y democráticos.

Creo que esto es lo que hay que hacer con aquellos que juraron el estatuto, pero nunca darles un premio. Yo salí a la calle a trabajar en mi profesión como el que más y he luchado como todos los hombres que en este momento, sin contar con acuerdo legislativo, se encuentran desempeñando la magistratura —bien o mal, no me interesa— sin satisfacer los recaudos constitucionales. Pero eso no significa que para sacarnos a estos señores de encima, que parecerían enquistados en sus funciones, dictemos esta ley.

Creo que el Poder Ejecutivo de la Nación debe presentar al Honorable Senado de la Nación los pedidos de acuerdo correspondientes a cada uno o suplantarlos en las funciones. En este aspecto, señor presidente, me remito al mensaje que pronunciara el 25 de mayo, en momentos de asumir el cargo, el entonces presidente, doctor Héctor J. Cámpora, glosando palabras del general Perón, actual presidente de la Nación: «Los tribunales de justicia deben integrarse con arreglo a las normas constitucionales. El Poder Ejecutivo no puede declinar ninguna de las atribuciones o, mejor aún, de las responsabilidades que ellas le confieren. No está tampoco en él hacerlo».

Ese fue el sentido del mensaje presidencial: no declinar su responsabilidad ni renunciar a sus derechos. Pero, pregunto: ¿ha cambiado la situación del país? ¿Ha cambiado la posición del partido gobernante? Han cambiado los gobernantes, pero la doctrina y la filosofía del partido gobernante, que nosotros respetamos por ser mayoría, deben cumplirse de acuerdo con lo expuesto con toda claridad ante la Asamblea Legislativa el 25 de mayo último.

Con humildad y honestidad, nosotros creemos que asumimos el papel y las obligaciones que hemos aceptado al haber sido elegidos legisladores de la Nación. El Poder Ejecutivo también se comprometió a asumir sus responsabilidades y obligaciones. Parecería que ahora quisiera soslayar esas obligaciones, a juzgar por el proyecto de ley que se quiere sancionar en el Congreso de la Nación.

Sr. Osella Muñoz. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Suárez (H. F.). — Sí, señor diputado.

Sr. Osella Muñoz. — Con referencia al mensaje del señor presidente de la Nación a que ha hecho referencia el señor diputado, debo recordarle que el doctor Cámpora dejó debidamente expuesta una inquietud sobre la materia, a saber: «Modificar el sistema previsional para la justicia que facilite el retiro de los magistrados, en reconocimiento de sus funciones, y renovar así, sin desmedro personal, los cuadros de la magistratura». Creo que el en-

tonces señor presidente de la República fue suficientemente explícito.

Sr. Suárez (H. F.). — Le agradezco la aclaramiento, señor diputado, y pensaba referirme a ella más adelante, pero voy a hacerlo en este momento.

La cita de que ha hecho mención el señor diputado se refiere al inciso f) del tópico que trató el señor presidente en su mensaje, y atañe a una modificación substancial al sistema previsional para la justicia, pero no a un régimen de excepción como el que se crea por esta ley. En efecto, estamos creando un régimen de excepción al cual no tendrán acceso los magistrados y funcionarios de la justicia que no se acojan a él en el término de treinta días de sancionada la ley.

Continúo, señor presidente. Si tal es el compromiso asumido por el señor presidente doctor Héctor J. Cámpora en aquella emergencia, en nombre del partido gobernante, vuelvo a formular la pregunta y la inquietud de por qué el Poder Ejecutivo no cumple con ese compromiso y se ajusta a la mecánica que sin ningún tipo de ataduras le proporciona la Constitución Nacional.

Pasaré a referirme a las observaciones formuladas respecto de las modificaciones que habíamos proyectado. Señalo, una vez más, que la intención y el propósito del diputado que habla, así como los de quien me acompañó en la presentación del proyecto, son exclusivamente los de colaborar para que encontremos una solución a este tremendo problema. A esta altura me permito solicitar, señor presidente, que por Secretaría se dé lectura del articulado del proyecto que habíamos presentado.

Sr. Presidente (Odena). — Por Secretaría se procederá a dar lectura al proyecto de ley a que se refiere el señor diputado Humberto F. Suárez, el cual ha sido incluido en el dictamen en consideración.

—Se lee.

Sr. Presidente (Odena). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Suárez.

Sr. Suárez (H. F.). — Señor presidente: nosotros solamente contemplamos, según nuestro criterio, la situación de los señores jueces que cuentan con acuerdo legislativo y la de aquellos que, contando con ese acuerdo al mes de junio de 1966, fueron promovidos para cumplir otras funciones judiciales. Descartamos en absoluto la situación de los jueces y otros funcionarios judiciales designados directamente, sin acuerdo legislativo, porque no responde a la esencia y al espíritu que habrían inspirado este proyecto, lo que fue ratificado en una conversación telefónica del señor ministro de Justicia con el señor diputado Ricardo Falú al momento de presentar nosotros las observaciones que estamos señalando.

La primera observación que formulamos consiste en la limitación de los beneficiarios de la ley. Se ha dicho en las discusiones en comisión que el actual gobierno procura dar a los magistrados judiciales la oportunidad de un retiro decoroso acorde con la función que vienen ejerciendo, con el primordial objeto de evitar la promoción de juicios políticos o dejar sin ocupación a aquellos que no cuentan con acuerdo legislativo y pueden ser motivo de separación con la sola presentación del pedido de acuerdo para quien lo suplante. En todo momento se ha estado en la tónica de que únicamente los magistrados judiciales que no cuentan con el debido acuerdo son la preocupación del Poder Ejecutivo nacional, sin mencionarse a los demás funcionarios judiciales que, si bien cumplen importantes funciones en la administración de justicia, no son problema alguno ni revisten la importancia fundamental que se les quiere asignar. Si bien de por sí el proyecto puede resultar y resulta irritativo en cuanto crea un régimen de excepción a favor de un determinado sector de la sociedad argentina, las razones que impulsaron su tramitación pueden en alguna medida justificarlo, pero limitado a la parte que realmente se cree necesario e imprescindible. Por ello, no se justifica la extensión de los beneficios de la ley a casi todos los componentes del Poder Judicial de la Nación, sin razón alguna que lo justifique.

En el proyecto que proponemos hacemos expresa mención de los magistrados que no cuentan con el debido acuerdo legislativo, en procura de hacer el debido distingo institucional entre aquellos que, habiendo tenido acuerdo, aún permanecen en sus funciones, y aquellos que al margen de las normas constitucionales aceptaron la designación para la función judicial, debiendo interpretarse que para los proponentes de la modificación estos últimos magistrados lo son en razón de que ejercen la función judicial únicamente, pero no lo son ni los reconocemos como tales desde el punto de vista constitucional.

Proponemos además un régimen de distinción entre los magistrados que, contando con acuerdo, reúnen los requisitos de edad y antigüedad en la función y aquellos que, al no reunir tales requisitos, deben soportar una reducción porcentual en su haber jubilatorio. Se procura establecer un régimen de equidad que en nada afecta al espíritu de la ley, pero sí, en cambio, le da el verdadero sentido que ella pretende tener.

Así mismo, incorporamos la exigencia de contar con un mínimo de ocho años de antigüedad en la función judicial de la Nación, proponiendo la modificación del dictamen de la mayoría, que no hace distingo entre prestación en funciones judiciales de provincia o de la Nación. Ello debe ser contemplado, atendiendo a que los

recursos para hacer frente a esta legislación excepcional deben ser soportados por la caja de la Nación y, en su consecuencia, debe preverse que ella haya recibido un aporte mínimo de ocho años por parte del beneficiario para evitar también en este aspecto una diferenciación irritante y gravosa.

Debe tenerse presente que muchos magistrados accedieron a los cargos actuales sin el debido acuerdo legislativo y sin haber cumplido carrera judicial alguna, al extremo de que muchos otros funcionarios vieron postergadas sus aspiraciones de ascenso ante la incorporación de profesionales que no contaban con antigüedad ni méritos suficientes o iguales a los de quienes tenían derecho a acceder a dichas funciones.

En definitiva, estimamos que, aceptándose las observaciones que formulamos al dictamen de la mayoría, se ha de lograr la sanción de una ley que, si bien reviste el carácter de excepcional, no provocará lesión alguna al Poder Judicial, ni creará privilegios que puedan provocar reacciones inconvenientes en los demás sectores del quehacer nacional.

Estos son los argumentos que hemos glosado a las modificaciones proyectadas al despacho de la mayoría. Deseo terminar mi exposición insistiendo en que el Poder Judicial de la Nación es, para nosotros y para todos los argentinos, el pilar sobre el que se va a edificar la aplicación estricta de la justicia en todo el ámbito de su extensión. No cometamos ligerezas de las cuales podamos arrepentirnos. Esto puede ser que llegue a feliz puerto, pero puede ser que lleve, desgraciadamente, a aguas tormentosas. Ya hemos cometido muchos yerros en el apuro de sancionar una legislación que reclama y necesita el Estado. Pero debemos ser muy cuidadosos en este aspecto, por cuanto el Poder Judicial de la Nación representa la garantía del cumplimiento de todas y cada una de las prescripciones que establece la Constitución Nacional, en la cual basamos nuestro presente y nuestro futuro. (*Aplausos.*)

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Salvador F. Busacca.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Monsalve.

Sr. Monsalve. — Señor presidente: luego de escuchar las exposiciones de los oradores que me han precedido en el uso de la palabra, sobre la marcha he resuelto cambiar el plan de exposición que tenía, salvo en lo substancial. Creo que el enfoque que debe darse a este asunto ha sido en cierto modo soslayado y quizás ha caído, en alguna medida, en lo anecdótico, dejando con todo de observar la honestidad necesaria, lo que resulta fundamental y es primario.

En todos los regímenes de gobierno, y principalmente en el republicano, es indiscutible que

la majestad de la justicia, la confianza que la justicia inspira en el pueblo, la probidad de los jueces, constituyen el resorte más importante para que el organismo social funcione correctamente. Se puede tolerar un funcionario administrativo que equivoque el camino. Se puede admitir un legislador que no cumpla en una forma total y absoluta con la función augusta que tiene. Con ellos el pueblo sufre; pero nunca sufre tanto como cuando se le niega justicia o como cuando tiene motivos para dudar de que la justicia que se dicta es la que debe ser. No se trata simplemente de un poder moderador; es uno de los pilares fundamentales del Estado.

Cuando un pueblo pierde la confianza en sus jueces, puede decirse que ha perdido también la confianza en el porvenir que le aguarda. Por ello, para un régimen republicano es decisivo el mantenimiento de un ordenamiento constitucional como el nuestro, que asegura un equilibrio de los distintos poderes del Estado y, sobre todo, una total independencia en el obrar del Poder Judicial.

Yo entiendo que este proyecto de ley lesiona, precisamente, uno de los principios básicos que deben cuidarse para preservar con él la salud de la Nación: el de la inamovilidad de los jueces. La Constitución sabiamente ha establecido un régimen por el cual puede removerse a los magistrados de la más alta jerarquía y de función tan substancial, cuando ellos se apartan de la observancia de la Constitución y de la ley.

Cuando el juez tiene la seguridad que le brinda el saber que mientras dure su buena conducta permanecerá en su cargo, cuando tiene la tranquilidad económica que le permite estar firmemente seguro de que sus remuneraciones no serán reducidas mientras ejerza tal magistratura, está en condiciones espirituales de impartir justicia con verdadera vocación y absoluta honestidad. Y si en esa circunstancia se aparta de su deber, indiscutiblemente merecerá que se juzgue su conducta por los canales que la Constitución Nacional establece y se lo separe sin más del cargo que no ha sabido desempeñar como correspondía.

Ese es el fundamento de nuestra oposición al proyecto. No nos interesan las otras circunstancias anecdóticas que abundantemente se han mencionado en este recinto. Nosotros, naturalmente, no podemos defender sino atacar todas las desviaciones que ha habido a lo largo de la historia del país. No vamos a defender a los jueces actuales ni los vamos a medir con una vara distinta de aquella que corresponde y que usamos para medir a los jueces que en otras épocas dejaron de cumplir con sus obligaciones. En este momento en que estamos procurando la recuperación del país en todos sus órdenes, asimilar esta circunstancia histórica argentina con aquellas otras en que se quebrantó el orden institucional y se sacó violentamente del gobierno a aquellos que habían sido elegidos por

el pueblo, o con aquellos momentos en que se reemplazó al mandón de turno, no puede, por supuesto, servirnos de ejemplo ni de parámetro para las leyes que estamos obligados a dictar.

Esos antecedentes no pueden servirnos de base. Debemos apartarnos de ellos, porque de esa manera no podríamos obtener la legislación que la Nación toda está aguardando ansiosamente para reforzar así sus instituciones, su régimen de gobierno, su sistema de vida. De recogerlos, no ganaríamos absolutamente nada. El pueblo sufriría tal vez con mayor dolor las frustraciones que ha debido soportar hasta hoy si de un régimen legal surgido de esta Legislatura se cayera en los mismos o en nuevos errores.

Esto es lo que nos mueve a oponernos frontalmente al proyecto que se está discutiendo. Consideramos que con él se vulneran garantías constitucionales que nos interesan no por los hombres que puedan usar o disfrutar de ellas sino por las instituciones que quedarían lesionadas y que mañana, posiblemente, podrían volverse contra el pueblo mismo.

A mí me satisfizo mucho la exposición del señor presidente de la Comisión de Justicia, y me calmó bastante la inquietud que traía a este recinto. Habiendo leído los fundamentos del proyecto, podría pensarse que constituyen una buena pieza de tipo literario, con incursiones históricas atinadas, que pueden construirse en la soledad del gabinete, pensando y consultando, pero que a lo mejor no reflejan el sentir íntimo y profundo de quien lo está redactando. Pero cuando las manifestaciones son verbales, como las hizo el señor presidente de la comisión aquí con un énfasis especial, sería necesario dudar grandemente de su entereza para concluir que son el reflejo de una posición ficticia, cuestión que no creo que esté en el ánimo de ninguno de los presentes.

Además, han existido varios rasgos de franqueza en la exposición que efectuara el señor presidente de la Comisión de Justicia. Dijo, entre otras cosas, que esta ley busca tender un puente de plata, apartándose de las normas corrientes, para evitar las graves consecuencias que sobrevendrían a quienes deben alejarse de la magistratura. Yo aceptaría ese puente de plata, y me parecería muy bien que se hubiera concebido y construido, pero siempre que no se apartara de las normas constitucionales, porque si así lo hiciera puede servir no para que el enemigo huya sino para que entre y llegue.

Dijo también que no hay propósitos subrepticios ni segundas intenciones. Eso me tranquiliza, porque en algún momento pude pensar que el proyecto tenía el propósito de desbrozar el camino para ubicar en las altas magistraturas del país a quienes no sólo tuvieran condiciones intelectuales y de probidad sino también estuvieran consubstanciados con el gobierno que los designa, puesto que esas coincidencias

políticas no deben buscarse ni aceptarse jamás en el fuero judicial.

El juez debe mantener una conducta limpia y una trayectoria sin dobleces, pero también debe mantener rígidamente una independencia de criterio en materia política, porque, de no ser así, se corre el riesgo de que en este sufrido país tengamos que ver reproducida una nefasta ley que dictó uno de los peores dictadores de la historia, Adolfo Hitler, quien dijo que los jueces debían poner al juzgar, por encima de toda otra consideración, su conciencia nacional-socialista, o sea, su adhesión al régimen que Hitler representaba.

Quiero poner énfasis en este detalle de la exposición del señor presidente de la Comisión de Justicia y estoy dispuesto a creer y a esperararme en que en ningún caso esa línea será quebrantada cuando se llenen los cargos que van a quedar vacantes.

Ese puente de plata de que habló está constituido por una ley que alguien calificó de inocente o de aparentemente inocente y que, con el pretexto de una protección jubilatoria, en la práctica está empujando a los magistrados a fin de que se alejen de su función para no perder los privilegios que esta ley les otorga.

Si por este camino hoy y por otro mañana hacemos algo que signifique presionar a la justicia u obligar a los jueces a suplantarse su propia conciencia o su propio saber y entender por los de un determinado régimen político, habremos hecho a la República el daño más grave que se pueda concebir.

No caben dudas —y las exposiciones anteriores me eximen de insistir en la cuestión— de que el artículo 96 de la Constitución Nacional está absolutamente violentado por la disposición contenida en el artículo 29 del proyecto en consideración. Eso no puede ser negado, y dejaría de cumplir con un principio íntimo y con una convicción profunda si no dijera que ni esa ni ninguna otra violación a la Constitución Nacional debe plantearse o posibilitarse.

Las leyes que dictemos tienen que ser tales que se asemejen a aquellas que pedía, en memorable ocasión, uno de los autores de la patria, Mariano Moreno: leyes que no se limiten a evidenciar la confianza de que, fundados en ellas, los hombres no podrán apartarse del camino recto que corresponde, sino que también les impidan hacerlo.

Esa es una consecuencia natural de un concepto fundamental y absolutamente irremplazable. Las leyes no pueden hacerse de medida como los trajes; las leyes no se hacen para un gobierno ni para un gobernante, sino para que perduren, porque de lo contrario pueden transformarse en un bumerán. Si los gobernantes que están dirigiendo en este momento el país, por haber sido elegidos por una mayoría indiscutible del pueblo argentino, dejan de serlo algún día y son suplantados por otros, las leyes

que sancionemos no debieran servir jamás de instrumento para que esos otros tuerzan la voluntad popular y las utilicen para hacer sangrar más todavía a las generaciones futuras.

Sr. Presidente (Busacca). — Señor diputado Monsalve: ha vencido el tiempo de que disponía para hacer uso de la palabra.

Sr. Monsalve. — Quiero agregar dos palabras más, señor presidente: ya ve que la tiranía es real.

Sr. Presidente (Busacca). — Es una tiranía democrática.

Sr. Monsalve. — Contra esa tiranía no me puedo rebelar.

Quiero señalar, a manera de colofón, que he escuchado en este recinto algunas expresiones muy enérgicas y tremendamente drásticas, que parecen hacer suponer que los magistrados son ángeles. Yo creo que los magistrados no son sino hombres y que, si la función judicial es importante, también lo es la legislativa. Tanto daño puede hacer al país un magistrado que jure dos veces, incurriendo por ello en perjurio, como el legislador que jura desempeñar sus funciones con absoluta honestidad y pensando en el bien de la República, cuando se aparta de ese camino y da el espectáculo que se ha visto en el país de quienes desde una banca adquieren fortunas incalculables, no precisamente en mérito al cumplimiento estricto de su deber.

Somos todos nosotros los que tenemos que evitar incurrir no ya en perjurio, sino en abandono de lo que hemos jurado defender. Y para algún legislador que se mostró tan abiertamente agresivo y que llegó a querer hacernos creer que la justicia argentina estaba íntegramente manchada, habría que recordar la frase bíblica: «el que esté libre de toda culpa, que tire la primera piedra».

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Vesco.

Sr. Vesco. — El proyecto de ley sobre jubilaciones para magistrados judiciales, que con sanción del Honorable Senado tiene a consideración esta Honorable Cámara, asume una importancia trascendente, tras su aparente simplicidad, no tan sólo por su ámbito de aplicación, sino también porque afecta las bases mismas de la organización institucional de la República y, en última instancia, el concepto mismo de justicia, inmerso en la condición humana desde que el hombre obedece al espíritu gregario que lo anima, desde que le es propio y natural vivir en sociedad jurídicamente organizada.

Por eso, antes de entrar a analizar el proyecto de ley en consideración, aunque ello se ha repetido en este recinto en diversas oportunidades, voy a referirme al concepto de lo que debe ser la justicia y, fundamentalmente, a la importancia que tiene el Poder Judicial.

«Bajo el vocablo justicia —dice Recassens Siches— se trata de significar la idea que debe inspirar al derecho y pensamos, desde luego, en

una idea perteneciente al campo de la ética.» Ya Platón, a quien cita el señor presidente de la comisión en sus fundamentos escritos, aplica el mismo principio de armonía al Estado y al derecho. Y Aristóteles elabora concienzudamente la teoría de la justicia en sentido estricto como pauta necesaria e indispensable para el derecho.

Pero la idea de la justicia no pertenece a la ética de la persona sino a la ética de las ordenaciones y de las instituciones. De ahí su gran importancia en el armonioso juego de los poderes en un sistema democrático. Es por ello que en la organización jurídica de la república democrática, desde Aristóteles, pasando por Montesquieu, hasta llegar a las más modernas y organizadas concepciones, el Poder Judicial asume una importancia fundamental.

Recuerda Sánchez Viamonte que es tanta la importancia de la justicia que hasta las monarquías teocráticas le rinden homenaje y le pagan tributo desde los más antiguos tiempos. «El rey que castiga a los inocentes y deja impunes a los culpables —dice el Código de Manú— se cubre de la mayor ignominia y va al infierno.» Yo no sé, señor presidente, si el infierno existe ni sé tampoco si allí han ido muchos jueces, pero si existe seguramente no han de ser pocos los jueces argentinos que se estén tostando en la parrilla de Lucifer.

Recuerda el referido tratadista que según nuestra Constitución y la norma del artículo 19 sólo manda la ley y nadie está privado de lo que ella no prohíbe, consagrando así la forma de administrar justicia en estricto derecho y no sujeto a principio alguno de equidad, como posteriormente lo estableció la Constitución de los Estados Unidos a través de sus enmiendas.

Ahora bien: toda administración de justicia se presenta y manifiesta a través de dos aspectos fundamentales, dice Sánchez Viamonte: el de las relaciones puramente privadas, que para los romanos, según la sentencia de Ulpiano, que también recordaba el señor diputado Calabrese, consiste en la permanente y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo; y el de las relaciones de derecho público, que atañe a la estructura institucional del Estado y al problema de la libertad frente a la autoridad, cuestión ésta en la que radica la más importante misión que el hombre moderno le ha asignado al Poder Judicial. Por eso nuestra Constitución creó el Poder Judicial como poder público con igual jerarquía que el Ejecutivo y el Legislativo.

Es bueno recordar que cuando se creó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 16 de enero de 1863, el presidente Mitre y su ministro del Interior, doctor Eduardo Costa, pasaron una circular a los gobiernos de provincia en la que se consagraba el principio de la inamovilidad de los jueces como principio axiomático de la independencia judicial. Aquella circular que nació con la misma organización judicial de la República decía que puede

ser considerada la carta liminar del Poder Judicial. «De esa manera —decían Mitre y su ministro— por primera vez en la República vendrán a estar constituidos y en ejercicio los tres altos poderes en que la sociedad moderna ha delegado la soberanía del pueblo y de cuya dependencia y equilibrio dependen la libertad y los derechos que ella ha conquistado.»

La autoridad es legítima si quien la ejerce se coloca por encima de las pasiones y de los intereses sectoriales o particulares, afirma el mencionado tratadista de derecho constitucional argentino y sostiene que «toda administración de justicia, por la naturaleza de sus funciones, necesita independencia en todo sentido y muy especialmente con relación al Poder Ejecutivo».

Desde esta bancada podemos hablar con tranquilidad de conciencia en este sentido, pues cuando el radicalismo tuvo la responsabilidad del gobierno fue sumamente respetuoso de esa independencia. Es así como el 1º de mayo de 1965 el presidente Illia, en su mensaje al Congreso de la Nación, pudo decir: «La Nación cuenta con una magistratura independiente en el marco de sus instituciones, con sus cuadros completos y con acuerdo constitucional que el Poder Ejecutivo recabó al Honorable Senado ante la existencia de numerosos jueces sin ese requisito. Es propósito del poder administrador lograr la conformación de nuestra codificación y de la organización judicial volcando a nuestra realidad y posibilidades los grandes principios jurídicos de una sociedad distinta de la que conocieron cuando estructuraron nuestras actuales instituciones».

Sr. Massolo. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Vesco. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Busacca). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Massolo.

Sr. Massolo. — El señor diputado Vesco tuvo el honor de integrar el gobierno ejemplar que presidió el doctor Arturo Illia, y quiero recordarle que cuando hubo oportunidad de designar dos jueces de la Suprema Corte, en lugar de recurrir a sus partidarios, en primer término ofreció el cargo a dos eminentes ciudadanos de la República, los doctores Luciano Molinas y Rafael Bielsa.

Sr. Vesco. — Efectivamente, señor diputado; conozco el episodio. El gobierno tenía un cabal concepto de lo que es la independencia del Poder Judicial. De la misma manera se obró en todas las provincias en aquella oportunidad.

Y así, señor presidente, mientras derogábamos las leyes represivas que habíamos heredado, mientras no había un solo preso político, gremial o estudiantil en la República, y mientras gobernábamos sin un solo día de estado de sitio, sancionábamos el recurso de amparo

y así respetábamos desde la justicia al hombre argentino, justicia que no tenía color político y que era nada más ni nada menos que justicia.

Vienen muy a cuento estas citas y estos recuerdos frente al proyecto de ley que estamos considerando toda vez que, como ya lo hemos manifestado en el seno de la comisión al fundamentar nuestra disidencia total, la norma del artículo 2º vulnera la independencia del Poder Judicial y lesiona el principio de la inamovilidad de los jueces, ya que los coacciona moral y materialmente. Cuando eso sucede, cuando el Poder Ejecutivo ejercita, aunque en forma desfigurada con algunas sutilezas, una forma que no es otra cosa que un ardid para remover a la magistratura, el Poder Judicial, en vez de ser un poder jurídico, se transforma en una oficina administrativa de carácter subalterno, como concluye diciendo el citado tratadista.

Es menester preservar la independencia del Poder Judicial, porque ella se relaciona con la esencia misma de la democracia de un país. La organización judicial entraña la independencia del poder que la representa de modo que los jueces puedan dictar sus fallos con entera libertad y que aquéllos no puedan ser desconocidos ni revisados por los otros poderes, según señala Ricardo Levene, quien agrega que la única forma de asegurar este principio es rodear a la magistratura de garantías suficientes que tradicionalmente se resumen en dos: la inamovilidad en sus puestos mientras dure su buena conducta y la compensación de sus servicios determinada por la ley y que no podrá ser disminuida mientras aquéllos permanezcan en sus funciones, según enfáticamente lo establece el artículo 96 de la Constitución Nacional. Adviértase que dice que de «ninguna manera», ni durante el desempeño de sus cargos ni en el goce de sus beneficios jubilatorios.

González Calderón, al hablar de las garantías constitucionales a la independencia del Poder Judicial, luego de citar a Hamilton, afirma que la inamovilidad de los jueces es una de las conquistas más notables de los pueblos libres. Es la única garantía verdadera de la independencia de los magistrados judiciales en el desempeño de sus cargos. Pero es evidente que este tratadista, como todos, se refiere a los magistrados que son designados dentro de las normas y en el modo que establece la misma Constitución. Por eso llama a éstas, garantías constitucionales. Va de suyo entonces, señor presidente, que tal garantía no rige cuando el funcionario adviene al cargo de otro modo o por otro procedimiento que no sea el que determina la Carta Magna.

El proyecto de ley que consideramos, si bien ha sido modificado en el dictamen de las comisiones, guarda en lo fundamental algunos puntos de coincidencia con la sanción del Honorable Senado.

Tenemos dos tipos de jueces a los que se supone amparar. Por el artículo 1º suponemos

amparar a los llamados jueces del estatuto, mientras que el artículo 2º se refiere a los jueces de la Constitución.

El artículo 1º establece que dentro de los treinta días a contar desde la fecha de promulgación de la ley, los magistrados comprendidos podrán jubilarse dentro del régimen de excepción y privilegio que determina la ley 18.464, siempre que acrediten veinticinco años de servicio y un mínimo de ocho años en el ejercicio de sus funciones en el Poder Judicial, sin limitación de edad.

Por el artículo 2º se acuerda el mismo plazo perentorio a los que ya se encuentran en condiciones de obtener el beneficio jubilatorio de las leyes 18.464 y 20.433, que acuerdan el 85 por ciento móvil de la remuneración total correspondiente al cargo desempeñado en el momento de la cesación definitiva en el servicio; pero si no optaren dentro de ese plazo perentorio sólo podrán luego jubilarse en los términos de la ley 18.037, de jubilación ordinaria, que acuerda condiciones mucho menos favorables.

Aparentemente, el proyecto es equitativo, pues en ambos casos se mide con la misma vara. Pero no es así, porque se trata de casos absolutamente distintos.

Es habilidoso pero falaz el proyecto de ley que estamos tratando, pues mientras por el artículo 1º los jueces sin acuerdo no se quedarán en sus cargos porque les conviene irse; por el artículo 2º los jueces con acuerdo también tendrán que irse porque no les conviene quedarse. Y el Poder Ejecutivo, rehuyendo el procedimiento legal que la Constitución le señala, dispondrá a su arbitrio de la totalidad del Poder Judicial para rehacerlo a su imagen y semejanza, con lo que habrá desaparecido de la República la justicia que la Constitución organiza con el máximo de garantías que requiere una sociedad jurídicamente organizada.

Sr. Presidente (Busacca). — Ruego al señor diputado que abrevie su exposición, pues ha vencido con exceso el plazo de que disponía.

Sr. Vesco. — En unos minutos más concluyo mi exposición, señor presidente.

A los magistrados y funcionarios involucrados en el artículo 1º, a los llamados despectivamente «jueces del estatuto», a aquellos que advinieron al cargo desde la calle o faltaron al juramento que en otros cargos inferiores habían prestado —procediendo así a conciencia y a sabiendas de lo que estaban haciendo—, a éstos se les tiende ahora un puente de plata, al decir del señor ministro en el seno de la comisión. ¿Por qué? Porque perjuraron, porque se treparon por el entorchado del general de turno para ascender un grado más en la magistratura. A éstos les va a dar un premio este gobierno que todos los días nos recuerda que es el gobierno del pueblo y que viene desde la adversidad de la República.

Es claro que hay quienes sostienen que no puede dejar de reconocerse la buena finalidad perseguida, de permitir a los magistrados una salida airosa y sin perjuicios económicos.

Por todo ello estamos en disidencia total de este artículo 1º. La explicación la ha dado el propio ministro de Justicia en la primera reunión conjunta de las comisiones de Justicia y de Previsión y Seguridad Social de la Honorable Cámara, como lo han mencionado los señores diputados Falabella y Calabrese, este último presidente de la Comisión de Justicia. He mencionado esa reunión teniendo en cuenta que fue pública, ya que contó con la presencia de señores diputados representantes de todos los bloques que integran la Honorable Cámara.

Diametralmente opuesto, señor presidente, es el ámbito de aplicación del artículo 2º. Por eso, así como nos oponemos al artículo 1º por considerarlo indebidamente benévolo para quienes no son acreedores de ello, también nos oponemos al artículo 2º por estimarlo injusto para quienes no merecen tamaña ingratitud, es decir, aquellos magistrados que juraron por la Constitución y contaron con el acuerdo del Honorable Senado.

Rehúye el Poder Ejecutivo el camino que la Constitución le marca. Para los jueces sin acuerdo pero que hayan merecido el beneplácito de la magistratura y que hayan cumplido con su deber con dignidad, el Poder Ejecutivo puede pedir —y tiene facultades para hacerlo— el pertinente acuerdo. Quienes no hayan merecido por su conducta esa consideración deben ser reemplazados por otros jueces que tengan dignidad. Para los jueces con acuerdo, que no hayan sabido cumplir con su deber, el Poder Ejecutivo también tiene el camino que le marca la Constitución y que es el del juicio político, que a su vez es el único para relevar a un juez que no ha cumplido con su deber o que no ha sido digno de la alta magistratura que ostenta.

Debemos tener cuidado, señor presidente, con pretender tener una justicia partidista. Todos, alguna vez, hemos sido víctimas de la mala justicia, de la justicia rotulada con etiquetas políticas. Señores diputados de la mayoría: ustedes alguna vez sufrieron el embate de la mala justicia; otras veces lo hemos sufrido nosotros. Que no haya más en el país jueces como los que se presentaban a su despacho —como me ha sucedido, ejerciendo mi función de abogado defensor de un preso procesado por desacato al señor presidente de la República, ocasión en que tuve que negarme a que se le totomara la indagatoria— ostentando en la solapa la insignia de un partido político. Que eso no vuelva a ocurrir en la República. Es necesario que no haya jueces ni peronistas ni radicales; es imprescindible que haya jueces en el pleno sentido de la palabra, al servicio de la República.

Para terminar, señor presidente, me voy a permitir afirmar, por su intermedio, a la bancada de la mayoría, el siguiente concepto, que tiene algo así como el valor y el alcance de una sentencia: la justicia no será mejor porque sea del partido gobernante el juez que la administre mal. (*¡Muy bien! Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Arbo. — Señor presidente, señores diputados: nuestra posición ante este proyecto, tal como ya se dijera, hoy será quizá por primera vez de total oposición, por la manera como se plantean las cosas y por las implicancias y consecuencias que pueden resultar de la sanción de este proyecto.

Antes que nada me preocupa la cuestión constitucional. Sin ánimo magistral ni nada por el estilo, en cada una de mis conversaciones con los colegas diputados suelo recordar que hemos jurado cumplir la Constitución. El Congreso de la Nación es, en último extremo, el verdadero intérprete de la Constitución, en cuanto reglamenta y forja los instrumentos mediante los cuales se han de hacer efectivos los derechos y las garantías que establece esa Constitución. Por eso me preocupa principalmente en este debate el aspecto constitucional, advirtiendo que no soy constitucionalista, sino simplemente abogado; sin embargo, los defectos de este proyecto son tan evidentes que no escapan al más modesto de los hombres de derecho.

La institución comprometida por este proyecto de ley es nada menos que la justicia. Un maestro de maestros, Joaquín V. González, dijo sobre el tema: «Ningún pueblo de la tierra ha gozado de libertad mientras no ha tenido asegurada su justicia». No voy a insistir en citas sobre esta cuestión, pues las han dado muy buenas y acertadas el señor diputado Vesco y otros que me antecedieron, pero sí he de señalar que los argumentos dados por el señor diputado Massolo y las disidencias de los señores diputados Suárez, Monsalve, Insúa y otros a quienes preocupa esta cuestión no han de obedecer al mero capricho ni surgir exclusivamente del ánimo de oponerse al proyecto.

Me preocupa la circunstancia de que en el trámite del proyecto no haya intervenido la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El Colegio de Abogados de Buenos Aires se ha ocupado del tema, señalando su preocupación por el contenido de esta sanción del Senado. Para abreviar omito la lectura de los párrafos en los que se señala esa preocupación. Por su parte, el doctor Bidart Campos, en artículo aparecido en «El Derecho», señaló los peligros de una iniciativa como la que estamos tratando.

Sr. Calabrese. — ¿Me permite una interrupción, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Arbo. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Calabrese.

Sr. Calabrese. — Respetando, lógicamente, el criterio del señor diputado, pienso que la Comisión de Asuntos Constitucionales no debió intervenir en el estudio de este proyecto. En el Honorable Senado solamente intervino la Comisión de Previsión Social. Vale decir que el mismo problema que se plantea aquí pudo haberse planteado en el Senado con respecto a la intervención de la Comisión de Asuntos Constitucionales; sin embargo, no ha ocurrido así.

Sr. Arbo. — Esa es una cuestión de criterio de cada Cámara, señor diputado. La intervención de las comisiones no está reglamentada al detalle y es frecuente que en el curso de la elaboración de un proyecto se haga necesaria la intervención de otra comisión. En este caso los problemas constitucionales han surgido en la Cámara, podría decirse, durante el tratamiento de la cuestión, y ahora se hace tanto más imperativa esa intervención toda vez que se ha señalado, con tanta seriedad y con serios argumentos, la cuestión constitucional, por decir así, para sintetizar y abarcar toda la cuestión.

Sr. Lazzarini. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Arbo. — Sí, señor diputado.

Sr. Lazzarini. — Se ha dicho aquí repetidas veces que el proyecto viola la Constitución, pero hasta ahora no he oído un argumento que establezca dónde estriba la violación de la Constitución y dónde está afectado el Poder Judicial como institución. Si se nos dieran tales argumentos podríamos analizarlos, pero sólo hemos escuchado plegarias sobre el mismo tema y no sabemos en qué consiste la violación del artículo 96 de la Constitución.

El juez que cuenta con acuerdo no se perjudica, y el que no lo tiene, en todo caso recibiría una jubilación mejor.

Eso es todo.

Sr. Arbo. — El señor diputado formula la pregunta y la contesta. Dejo la pregunta y la contestación por su cuenta. Aclaro, además, que pensaba referirme precisamente a este tema.

Sr. Lazzarini. — Espero su contestación, señor diputado.

Sr. Arbo. — Hay varios aspectos constitucionales derivados del artículo 96 de la Constitución. Esta derivación altera un poco mi plan, pero voy a tratar de sintetizar.

En primer lugar, está la cuestión de la estabilidad. No voy a entrar al aspecto de si los jueces sin acuerdo son o no jueces, porque esto sería de largo trámite y de prolongado debate.

Sr. Calabrese. — No son jueces con estabilidad.

Sr. Arbo. — El señor diputado Calabrese estima que son jueces con todos los atributos inherentes menos la estabilidad. Pero si son jueces, alguna estabilidad deben tener. Sin participar de la opinión, quiero significar aquí que hay quienes sostienen que esos jueces derivan su designación de un acto revolucionario que en

su momento tuvo validez y que habrían contado con el acuerdo constitucional por cuanto el Poder Ejecutivo ejercía también las funciones del Poder Legislativo.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Arbo. — No discuto la cuestión; sólo hago el planteo.

Sr. Calabrese. — La discuto porque conozco a los juristas y sé cómo piensan.

Sr. Arbo. — Usted discutirá con ellos, señor diputado.

Sr. Presidente (Busacca). — La Presidencia solicita a los señores diputados se sirvan no dialogar.

Sr. Arbo. — Lo cierto es que ese argumento, que me adelanto a decir que no comparto, tiene también sus ribetes, y si en algún momento se planteara la cuestión habría que deslindarla.

No es posible que las reformas a la Constitución hayan servido para constituir esta Honorable Cámara, para aumentar el número de senadores, para establecer un sistema electoral, para ungir un Poder Ejecutivo, para nombrar altos oficiales de las fuerzas armadas que inclusive están en ejercicio, y no sirvan para dar un poco de estabilidad a los jueces. Y no digo toda la estabilidad.

Otro aspecto es el de la remuneración, que ya fue abordado. El señor diputado Calabrese, presidente de la Comisión de Justicia, hizo una aclaración que lamentablemente no condice con el texto mismo del proyecto. No se dice en el proyecto que el juez gozará del 75 por ciento de su remuneración una vez que haya sido jubilado. Dice, simplemente, que este último caso —el único que contempla el artículo 39— es el de los jueces que quieren jubilarse y tienen la obligación de permanecer en sus puestos.

Sr. Calabrese. — ¿Me permite una aclaración, señor diputado?

Sr. Arbo. — El señor diputado Calabrese ya efectuó la aclaración en su exposición, pero no comparto su criterio.

Le concedo la interrupción al señor diputado.

Sr. Calabrese. — He aclarado ya en mi informe en general que hay dos aspectos que debemos contemplar y que, lógicamente, contempla este proyecto de ley sometido a nuestra consideración.

El juez que se acoge a los beneficios de esta ley no puede abandonar su cargo y, mientras permanezca en él, percibirá los emolumentos acostumbrados. ¿Por qué? Porque está dentro del presupuesto nacional y del de la justicia. Vamos a aclarar la redacción del artículo a efectos de que no deje lugar a dudas. Al que se jubila optando por este régimen y abandona el cargo porque ha sido reemplazado, de inmediato se le paga el 75 por ciento de su sueldo a efectos de evitar que la prolongación del trámite de

la jubilación pueda significarle una serie de trastornos e inconvenientes de tipo económico.

De modo que creo que está aclarado ese aspecto que el señor diputado ha insinuado es obscuro. Esto no es una innovación de este proyecto; viene de leyes anteriores, en las que el juez, no obstante ser jubilado, podía ser llamado nuevamente a sus funciones, dado que se trata de una carga pública.

Sr. Presidente (Busacca). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Arbo.

Sr. Arbo. — Su posición está perfectamente clara, señor diputado, pero tengo el derecho de no compartirla. El señor diputado Calabrese explicó claramente este problema, pero no lo encuentro explícito en la ley.

Sr. Monsalve. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Concede el señor diputado Arbo la interrupción?

Sr. Arbo. — Sí, señor presidente.

Sr. Monsalve. — El señor diputado Arbo se refiere a un problema que yo he visto en la misma forma. Por eso he presentado un proyecto de modificación a este artículo, dándole una redacción más apropiada, con lo que entiendo queda aclarado el problema.

Sr. Calabrese. — Ya tengo preparada una pequeña enmienda para ese artículo.

Sr. Vesco. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado Arbo?

Sr. Arbo. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Busacca). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Vesco.

Sr. Vesco. — La interpretación del diputado Calabrese no surge del texto del artículo 39.

Quiero recordar también que ningún funcionario cuando renuncia a sus funciones, puede abandonar el cargo que desempeñaba, pues comete delito: abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público. Lo dice claramente el artículo 252 del Código Penal: «Será reprimido con multa de cinco mil a cien mil pesos, e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que sin haberse admitido la renuncia de su destino, lo abandonara con daño del servicio público».

Por eso, en el tratamiento en particular de este proyecto habré de volver sobre esta observación, para presentar una fórmula adecuada.

Sr. Presidente (Busacca). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Arbo, a quien la Presidencia le ruega no conceda más interrupciones a fin de no prolongar este debate.

Sr. Arbo. — Prosigo, señor presidente, y ruego a los colegas no me pidan interrupciones porque deseo redondear algunas de las cosas que quiero decir. (Risas.)

Sr. Vesco. — Es muy ambicioso el señor diputado. (Risas.)

Sr. Arbo. — Se me pregunta cuáles son los aspectos en que este proyecto de ley afecta a la Constitución Nacional. Primero, hablamos de la estabilidad. Segundo, ya hablamos también de las remuneraciones; espero que esto sea corregido en su momento. Tercero, afecta a la igualdad ante la ley, lo que constituye también un precepto constitucional.

El proyecto establece prácticamente dos regímenes: uno para los involucrados en el supuesto del artículo 1º, y otro para los del artículo 2º. Esto parece una paradoja, pero es así. Los magistrados del artículo 1º reciben un beneficio; pero a los del artículo 2º, es decir, a los jueces que están en ejercicio, que tienen acuerdo y que tienen la posibilidad de jubilarse bajo el régimen vigente, se los priva de sus beneficios, obligándolos a una opción que puede llevarlos a la renuncia al cargo. De manera que el efecto de la ley es totalmente diferente para unos y para otros. Con todo esto —lo ha dicho muy bien el señor diputado Vesco— se afecta también la independencia del Poder Judicial.

El señor diputado Calabrese expresó hoy que éste es un régimen opcional; pero si se me permite la expresión, ésta es una opción por sí o por sí. No hay alternativa posible: o se opta por el beneficio, o se opta por el beneficio; y además, hay que hacerlo dentro de los treinta días. Si no, por todos lados pierde.

Sr. López (D.). — Pero gana el país.

Sr. Arbo. — No se ve dónde está la opción.

En el aspecto del juicio político, la Constitución establece un sistema para sancionar a los jueces. Yo me pregunto por qué el Congreso de la Nación ha de renunciar a una facultad que le atribuye y a la vez le impone la Carta Magna.

Se ha dicho hoy aquí, y con mucha razón, que si el Congreso está haciendo esto, en cierta manera se constituye en cómplice de los malos funcionarios. Yo no comparto expresiones de algunos colegas preopinantes, en el sentido de que todos los jueces que llegaron al final del gobierno anterior son delincuentes, perjuros o malos funcionarios.

La estadística mencionada por el señor diputado Calabrese —de la que recientemente tuve conocimiento— indica que existe ya una serie de pedidos de confirmaciones de jueces anteriores formulados por el actual Poder Ejecutivo. Esto nos está diciendo que entre todos esos magistrados hay algunos o muchos que merecen continuar en la función. Entonces, me pregunto, ¿por qué condenarlos a todos por anticipado y sin juicio previo? ¿Por qué esto de obligarlos a optar inmediatamente por un determinado régimen, so pena de quedar expuestos a consecuencias morales y económicas, trascendentes e irremediables, que implicarían una verdadera condena?

Yo entiendo, señor presidente, que debemos tener muy en cuenta y poner especial atención en palabras que ya fueron dichas en este mismo recinto hace un rato por el señor diputado Humberto Suárez. No debemos legislar con ligereza, ni de manera transitoria, ni de cualquier manera sobre asuntos tan trascendentes como el que estamos considerando, pues se trata de uno de los tres poderes del Estado. No podemos llevar por delante la justicia, porque ella es la que va a hacer efectiva las leyes que aquí sancionemos. Debemos ser prudentes.

Mi criterio, compartido por algunos diputados de mi sector, es mantener el proyecto en su redacción originaria, es decir, dentro de la finalidad y de los alcances del artículo 1º del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. Consecuentemente, se debe eliminar esa ampliación resultante del artículo 2º y también eliminar, por innecesarios, los artículos 3º, 4º y 5º. Si el proyecto se ha de sancionar, debe ser sobre la base de los artículos 1º y 6º, evitando así todas las cuestiones que han suscitado las modificaciones introducidas.

Estimo que lo más prudente, razonable y conveniente para los intereses de la Nación —no de un partido: ni del oficialismo ni de la oposición— es que el proyecto vuelva a comisión y sea sometido a estudio de la Comisión de Asuntos Constitucionales. De esa manera se han de eliminar las discriminaciones y las desigualdades que contiene el proyecto.

En resumen, examinando el texto del proyecto y los fundamentos aquí vertidos con generosidad y amplitud por el señor diputado Calabrese, nos encontramos con una discrepancia fundamental: el proyecto no responde a los principios que enuncia el informe de la comisión.

Tendríamos que pensar, entonces, que hay un error en la concepción del proyecto, aunque sea en la ampliación del artículo 2º, lo que es grosero pero posible. También cabría pensar que puede haber un error en la interpretación del proyecto, cosa que no creo porque el señor diputado Calabrese es un hombre de experiencia, representante de una corriente de opinión de firme arraigo, y no puede equivocarse en este aspecto tan fundamental. Finalmente, cabría además la posibilidad de que haya un propósito oculto, cosa que mi espíritu se niega a admitir, o tal vez más que negarse, no pueda concebir, porque eso sería atentatorio de la seriedad, del prestigio y de la solidez de este gobierno que todos deseamos que salga adelante y que sea el instrumento para la salvación de la patria. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Labake.

Sr. Labake. — Señor presidente: enseña un viejo dicho que quien se acuesta con niños amanece mojado. Parafraseándolo y revisando este debate, podríamos decir que el que discute

con ciertos opositores —los menos, por supuesto, y gracias a Dios— termina embrollado, realmente embrollado, como me ha pasado a mí ya casi al finalizar esta discusión.

Algunos de los que han hecho uso de la palabra nos han pintado un cuadro del Apocalipsis, por lo que me he visto en la necesidad de repasar detenidamente el despacho de la mayoría y sus fundamentos, y de consultar con el miembro informante de la mayoría, para ver si mi embrollo era producto de mi cortedad de mente o del hecho fortuito de tener que discutir con este tipo de opositores, los menos. Por ahí he pensado que quizás alguno habló un poco en serio y otro poco en broma.

Este cuadro apocalíptico no aparece en ningún lugar del proyecto de ley. Me atrevería a decir que parece una inocente ley, además de prudente.

Creo que, en primer lugar, hay que encuadrar políticamente el asunto. Políticamente, los hechos son como sigue: desde que el peronismo baja del poder —o lo bajan, por la fuerza— han pasado dieciocho años, durante los cuales no ha habido, estricta y formalmente hablando, ningún gobierno constitucional. Porque los gobiernos elegidos por el pueblo lo fueron bajo regímenes de proscripción, que hicieron a esas mismas elecciones inconstitucionales, aceptadas solamente por el hecho de fuerza, por el hecho consumado de que había que aceptarlas o reventar. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta.

En estos dieciocho años, a su vez, ha habido muchos gobiernos que ni siquiera guardaron las formas constitucionales, porque han sido directamente cuartelazos. Y en este lapso, especialmente en la época de los cuartelazos, han tenido tiempo suficiente de nombrar los jueces que han querido y de hacerlos jurar por lo que han deseado.

Nos encontramos así, hoy, con que el peronismo asume el poder en las primeras elecciones realmente constitucionales de los últimos dieciocho años de vida política del país. El peronismo, que toma el poder avalado por siete millones y medio de votos —el 62 por ciento de la ciudadanía del país— en lugar de atropellar, de sacar de un plumazo a quienes pusieron de un plumazo, en lugar de repetir la triste experiencia que le tocó vivir desde 1955, se decide por estudiar, prudente y sensatamente, una ley que le dé al país —no a la justicia o a los jueces— una salida honorable para este problema. Se trata de una salida con especial delicadeza, de un puente de plata honorable para aquellos que están en una situación irregular.

Es una solución tan honorable que me voy a permitir leer lo manifestado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, al sancionarse el proyecto que consideramos en el Honorable Senado. Dicha asociación apoyó la sanción expresando su deseo «de que se vea plasmada en ley a breve término,

porque así se verá ampliamente satisfecha la inquietud de quienes carecen de acuerdo senatorial, al par que significará una necesaria renovación de los cuadros judiciales, sin desmedros personales y en beneficio de los intereses del país». Esta es la opinión de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

A este gobierno, que busca una salida tan honorable, se lo intenta hacer aparecer desde algunos sectores de la oposición —los menos, insisto— como un ogro «comechicos» o, para hablar con más propiedad, como un ogro «comejueces». Cuando, en definitiva, de lo que se trata no es nada más que de una ley especial de jubilaciones.

A esta ley previsional especial que beneficia a los jueces que de una u otra manera tendrían que sufrir las consecuencias de una situación irregular, la han transformado en un cuadro apocalíptico, en un cuadro de cataclismo nacional, digno de la imaginación afiebrada de Dante Alighieri y no de un diputado de la Nación.

Esto en última instancia no nos debería sorprender. Es una vieja táctica de la oligarquía. Primero el golpe de Estado, única forma que tiene de tomar el poder; luego el plumazo. De un plumazo borran leyes, eliminan jueces, atropellan sindicatos, violan la Constitución y dictan su propio estatuto, que hacen jurar a la fuerza. Pero cuando el pueblo revienta y los echa a ellos, entonces guardan violín en bolsa, dan un paso atrás, entregan el gobierno, y de la misma bolsa donde han guardado el violín sacan las leyes, las desempolvan y las ponen en el pedestal de la inamovilidad. (Aplausos.) Sacan los jueces, esos jueces que han nombrado a dedo y se acuerdan de que la Constitución dice que son intocables. Y de esos sindicatos, en los que ellos pusieron las botas, que intervinieron, que pisotearon y persiguieron, son ahora sus primeros defensores. Inclusive se rasgan las vestiduras porque algún sindicato haya sacado una solicitud, no de defensa de un partido político, sino de defensa de una política nacional y del líder que conduce esa política nacional, que no es lo mismo que apoyar a un partido político. Y quienes pisotearon la Constitución, quienes la derogaron por un decreto, se acuerdan ahora de que hay un artículo 96 de la Constitución. Esta farsa de la oligarquía es lo que ha sucedido ahora, e insisto en que no me sorprende: quizá la única originalidad que ha existido en este caso es que el rasgado de las vestiduras de hoy ha sido con guitarra, mientras que normalmente suele ser sin guitarra.

Yo supongo que ningún diputado de ninguno de los grupos opositores quiere hacer lo que normalmente ha hecho la oligarquía, porque entiendo que aquí no hay ningún representante de la oligarquía.

Pero no ha parado ahí la cosa. Se nos ha acusado del otro lado también: no solamente por

aquellos que tienen miedo de que toquemos a un juez, sino por aquellos que nos han pedido sangre. Aquí se han escuchado voces pidiendo la sangre del escándalo del juicio político. Y nosotros, como gobierno popular, no vamos a estar ni con el extremo de los que tienen miedo a solucionar las irregularidades en el Poder Judicial, ni con aquellos que nos piden la sangre del circo romano; ni con el escándalo que va a subvertir la paz del país, ni con el miedo que va a dejar todas las cosas como están, porque la revolución hay que hacerla en paz, pero hacerla.

Y, por favor, que no se repita en esta Cámara el argumento de que tenemos la obligación constitucional de perseguir a los jueces perjurados, de hacerles juicio político porque juraron o porque no juraron. La Constitución no obliga a armar guerra en el país; obliga a hacer justicia, lo que es distinto. Y más de una vez la Constitución manda que el Poder Ejecutivo por el indulto, o el Legislativo por la amnistía, deje de lado las penas cuando hay un interés superior de por medio, como ahora, para saber perdonar. Y este gobierno demuestra que sabe perdonar.

Me voy a referir sólo brevemente a la argumentación de inconstitucionalidad, porque es tan floja que no me parece digna del Parlamento argentino. ¿Inconstitucionalidad por qué? ¿Porque atacamos el artículo 96? Si en ningún artículo de la ley se obliga a nadie a retirarse. Es una decisión optativa y de ninguna manera puede estar en juego la movilidad o inamovilidad de los jueces y, por lo tanto el artículo 96 de la Constitución. La ley en ningún momento afecta el principio de la inamovilidad, porque el retiro es facultativo.

Se ha hablado de inconstitucionalidad porque la ley no guardaría la igualdad al crear un régimen especial de jubilaciones. ¿Y desde cuándo los regímenes especiales pueden ser inconstitucionales? Lo serán cuando no tienen un motivo valedero para funcionar. Al igual que en la ley de réditos, o como ocurre con las moratorias, el que no paga en cierta época no se beneficia con ellas; aquí el que no se jubila a los treinta días pierde los beneficios especiales. ¿Eso es inconstitucional? Es un régimen especial que el país necesita para solucionar la irregularidad que existe en su Poder Judicial, pero solucionarlo en paz, sin crear más irritaciones en la sociedad argentina.

Yo creo que esto tendrá que ser catalogado como la gran salida que el gobierno del pueblo ha encontrado al problema del Poder Judicial de la Nación. Una salida sin pasiones ni odios y de una generosidad que adquiere fundamental y especial valor, porque es dictada por el partido y por su conductor, que se ha visto apostrofado durante tantos años y que ha visto que el solo pronunciamiento de su nombre o el de su partido, en su momento, se catalogara como delito.

Ese hombre vuelve victorioso y, sin embargo, hace realmente efectivo el viejo lema de ni vencedores ni vencidos, por primera vez en la historia del país.

Ante esta ley de la prudencia, la ley de los ni vencedores ni vencidos, la crítica que nos viene de la oposición realmente es desconcertante.

Saludo a esta ley como índice de una política de madurez, de brazos abiertos, propia de un gobierno que ha comprendido las exigencias de la hora y que está a la altura de los acontecimientos. Espero que la oposición sepa estar también a la altura de los acontecimientos. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Catalano.

Sr. Catalano. — Señor presidente: el problema que trae a la consideración de esta Cámara el proyecto que estamos debatiendo me toca fundamentalmente, no tanto como diputado de la Nación en este momento, sino como una persona que de sus dieciséis años de vida profesional ha pasado trece en la justicia.

Sin duda alguna, el primer problema a considerar es la situación de los jueces que se encuentran sin acuerdo. A este respecto sostuvimos en la campaña electoral, sin ninguna clase de hesitación, que era indudable que los jueces designados sin el acuerdo del Senado debían fatal y necesariamente, para convertirse en jueces de un sistema constitucional, contar con dicho acuerdo. Todos los jueces designados, fuere por primera vez o fuere por ascenso a otro cargo, revestían sin duda alguna el carácter de jueces de facto. Solamente el acuerdo del Senado podría completar ese principio de designación que, constitucionalmente hablando, únicamente puede concebirse como un nombramiento en comisión.

La Constitución de la Nación es muy clara en cuanto al mecanismo del nombramiento, regulado expresamente por el artículo 86 en su inciso 5º. Sólo de esa forma, y no de ninguna otra, el juez adquiere la inamovilidad que establece el artículo 96. Esto como principio general.

Por otra parte, existe una gran discusión sobre si los jueces designados sin el correspondiente acuerdo del Senado pueden, o no pueden, válidamente seguir administrando justicia cuando existe un gobierno constitucional. Las opiniones sobre este punto en particular son muchas y muy respetables.

Pero en este proyecto no se toca realmente este tema. De lo que se trata en el fondo y en la forma en este proyecto es simplemente, como se ha destacado, de establecer un sistema provisional que tiene modalidades de beneficio para quienes se acogen a él.

Se ha dicho que este proyecto, si bien es optativo, empuja a los magistrados a optar por él. Ese es, señor presidente, un problema que

evidentemente sólo puede ser resuelto por la conciencia de los magistrados. Si el magistrado designado con acuerdo del Senado —y en esto naturalmente excluyo a aquellos magistrados que han cambiado de cargo, porque el acuerdo es para un cargo determinado y específico, cosa que no puede evidentemente discutirse a esta altura de las interpretaciones constitucionales referidas—, frente a este régimen de beneficio que le establece el artículo 2º, optara por beneficiarse económicamente en su retiro y en consecuencia dejara la función judicial, eso es un problema de conciencia que lo debe resolver únicamente ese señor magistrado. De ninguna manera la ley lo está empujando u obligando a que se retire con el régimen de excepción que establece el artículo 2º. Si lo hace es porque optará por un valor frente a otro valor: optará entre la suprema y augusta función de seguir administrando justicia o resguardar sus años venideros. Esa opción le queda al magistrado, quien la hará desde luego con plenísima libertad porque, como digo, se trata de un problema de conciencia, como se trataría de un problema de conciencia en el caso nuestro, que estamos ejerciendo igualmente funciones que no son empleos sino funciones a nivel constitucional, decidir si nos conviene o no económicamente seguir en la Cámara de Diputados. Si ponemos antes que nuestra capacidad de servicio o vocación de servicio nuestros intereses personales, evidentemente nos vamos a ir. Si lo que queremos es realmente ganar dinero no seguiremos en la Cámara de Diputados, porque evidentemente no lo lograremos. Si, por el contrario, nuestra vocación de servicio es mayor que nuestro interés inmediato de obtener beneficios, permaneceremos aquí. Esta opción se plantea al magistrado también a nivel de conciencia.

Sr. Massolo. — ¿Me permite una breve interrupción, señor diputado?

Sr. Catalano. — Sí, señor diputado.

Sr. Massolo. — Simplemente quería señalar al señor diputado que nuestra preocupación se produce por cuanto el senador Saadi sostuvo en el seno del Honorable Senado de la Nación que la revolución de 1966 había tenido el efecto de hacerle perder el acuerdo a todos los jueces.

En consecuencia, si ese criterio prevalece, el Poder Ejecutivo podría terminar y barrer con todo el Poder Judicial de la Nación.

Sr. Catalano. — El problema de que aparezca alguna expresión del senador Saadi, que no la he visto en el Diario de Sesiones porque desgraciadamente no lo he leído, en el sentido de si los jueces designados antes de la revolución del 66 pierden o no su acuerdo por ese hecho, está muy claramente resuelto a nivel constitucional por los tratadistas y la jurisprudencia, y el punto ha sido resuelto pacíficamente. Si el juez no cambia el cargo, evidentemente su estabilidad constitucional es permanente. Si el juez cambia de cargo y acepta por ejemplo, en lugar del cargo de juez de primera instancia, el cargo de

juez de cámara, es evidente que para esta función carece de acuerdo y no tiene la estabilidad que fija el artículo 96, porque su nombramiento se ha hecho al margen de lo que dispone el artículo 86, inciso 5º, de la Constitución Nacional. Este es un punto acerca del cual no es posible equivocarse.

También se planteó que se afectarían los principios constitucionales de estabilidad, de la remuneración y el principio de igualdad ante la ley y de esa forma indirectamente se obtendría el muy deleznable propósito de terminar con la independencia del Poder Judicial, de barrer al Poder Judicial, de vaciar al Poder Judicial.

En mi actuación como juez, al término de mi mandato constitucional, me retiré de la función judicial en el mes de enero de 1970 porque se me planteaba el problema de si realmente podía, siendo juez de la Constitución, prestar juramento por algo que no era la Constitución ni su valor supremo, es decir, por un estatuto al cual la Constitución había sido subordinada. Tuve que hacer una opción de tipo personal. Quizá en ese momento económicamente me hubiese convenido más jurar; pero luego de una valoración opté por otra cosa. Otros colegas resolvieron el problema de manera diversa.

Advertimos que no se trata de condenar al hambre a los magistrados, porque eso sería pensar muy pobremente de ellos en cuanto a su aptitud profesional como abogados. Realmente confieso que independientemente de la solución que di respondiendo a mis convicciones personales, por fin pude entonces obtener un ingreso razonable en la actividad privada, pues naturalmente la función judicial, tanto aquí como en otros países, no está retribuida como correspondería, porque hay una imposibilidad material de que así sea.

De manera que las objeciones constitucionales que se han hecho —y en esto coincidido con opiniones anteriormente expuestas— no merecen un estudio muy profundo. No hay aquí de ninguna manera una vulneración al principio de la inamovilidad de los jueces. Simplemente, se establece un régimen de excepción que no hace distinciones según que los jueces tengan o no acuerdo. Es decir, no se establece un régimen para los jueces sin acuerdo y otro régimen distinto para los jueces con acuerdo. Se establece lisa y llanamente un régimen de privilegio para los jueces. Los que no tengan acuerdo valorarán si les conviene o no ir al acuerdo; los que lo tengan y a quienes le falten dos años para retirarse pensarán si les conviene o no.

Además, ningún juez está obligado a retirarse para acogerse a los beneficios de la jubilación. El juez es inamovible y solo se jubila si quiere. No hay ninguna disposición que lo obligue a jubilarse, como tampoco lo obliga ésta que vamos a sancionar.

No ya como diputado de la Nación, sino por haber estado trece años en la justicia, afirmo

que este proyecto de ley no va a barrer al Poder Judicial, ni va a producir el vaciamiento institucional del Poder Judicial, ni conspira contra la inamovilidad de los jueces o contra la independencia del Poder Judicial.

Reitero desde esta banca lo que afirmé durante trece años de ejercicio de la magistratura judicial en mi provincia: la independencia del Poder Judicial es el pilar fundamental de las instituciones, de las libertades y de las garantías individuales. Si hubiese visto que con este proyecto de ley podría vulnerarse la inamovilidad de los jueces o la independencia del Poder Judicial, tengan la seguridad los señores diputados de que habría formulado observaciones al proyecto y lo habría condenado severamente en este recinto, porque durante el tiempo en que he estado en el Poder Judicial no sólo he aprendido a quererlo, sino también a mirarlo como una garantía efectiva de las libertades individuales. Pero insisto con mi más profunda convicción en que este proyecto no vulnera en absoluto ninguna garantía constitucional, ni significa un menoscabo personal a los señores jueces ni menos aún un avasallamiento al Poder Judicial. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado López.

Sr. López (D.). — Señor presidente: el proyecto de ley que consideramos ha sido estudiado también por la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que modestamente me honro en presidir.

Voy a realizar un enfoque no de tipo constitucional sino meramente real y político. Pienso, y así me lo ha demostrado la universidad de la vida, que generalmente todas las leyes que se dictan toman como ejemplo el medio ambiente en que se vive, las circunstancias y también los momentos que vive el país. Aquí se ha hablado mucho de la Constitución Nacional. Se ha hablado mucho de gobiernos y también de legalidad, pero muy pocas veces se ha hablado de legitimidad.

No voy a hacer una cuestión partidista, y esto lo digo porque lo siento primero como argentino y luego como ciudadano y como peronista, pero los que llevamos la peor carga de la injusticia fuimos precisamente muchos de los trabajadores que aquí hoy honradamente estamos ocupando una banca.

Se dice que ésta es una ley que lleva solapadamente escondida una mala intención, y también que de alguna forma va a tentar a algunos jueces. El juez que caiga en la tentación de optar por lo que le convenga, allá él con su responsabilidad.

En lo que respecta a que nosotros hemos llevado la peor carga, es importante mencionar que en este recinto y en otras épocas se habló de una dictadura, que no era militar sino que era la dictadura peronista. Algunos perjuraron des-

pues de esa dictadura. Hoy, que se tiende un puente de plata, expresado en forma chabacana, se toma el otro atajo de la trampa, de la cosa escondida, de lo que se hace entre gallos y medianoche. Si realmente este gobierno tuviera que hacer lo que debe, o sea, limpiar toda la podredumbre, no sólo la que existe en la justicia sino en todos los estratos sociales, entonces diríamos que los que aquí pretenden defender ciertas posiciones son los verdaderos dictadores. Si somos benevolentes y practicamos aquel slogan de que «mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar», estamos haciendo demagogia o preparando el trampolín para una traición. Pero si jugamos con la lealtad y aplicamos el «ojo por ojo, diente por diente», por el que nos correspondería retribuir todas las situaciones vividas en estos últimos 18 años, entonces somos dictadores.

Señor presidente, compañeros, estimados legisladores: entonces, ¿cuál es el atajo que nos queda? No conozco absolutamente nada de leyes. He aprendido únicamente a firmar, aunque a veces tengo que poner el dedo pulgar para hacerlo. Pero si entiendo la realidad de la vida.

También se habló acá de las mayorías. Siempre se habla de las mayorías. Pero si somos respetuosos de la democracia, de la que tanto se cacarea pero que nunca se practica, las mayorías tendrán que gobernar y las minorías serán respetadas. Vamos a aceptar la crítica constructiva de las minorías, pero que éstas no piensen que van a dominar a las mayorías. Eso siempre se cacarea y cuando conviene se maneja de acuerdo con las circunstancias.

Soy un hombre de extracción trabajadora, aunque no soy de la burocracia sindical. Por eso, aun cuando hablo con un poco de pasión, lo hago como alguien que circunstancialmente ocupa una banca que muchas veces se ve preocupado por algunas cosas que se dicen en el recinto. Se tocan primero las situaciones de orden netamente partidario, aunque después, como Pilatos, se venga a lavar las manos, diciendo que se está colaborando y dando al gobierno los instrumentos que pide, cuando en realidad deben ofrecerse esos instrumentos y luego hacer las críticas cuando no se cumpla.

El que habla es un auténtico peronista, pero tengan la seguridad los señores diputados que será el primero en levantarse para criticar al gobierno si no cumple lo que nos ha prometido. Nosotros vamos a facilitar al gobierno la realización de la revolución justicialista, de la auténtica revolución justicialista. Por eso, en función de poder habremos de posibilitar la concreción de esa revolución que prometimos al pueblo; pero para poderlo hacer necesitamos los elementos humanos y morales que estén consubstanciados con los ideales de esa revolución, todo ello para que ésta pueda realizarse en profundidad, cueste lo que cueste y caiga quien caiga.

Perón ha dicho que entre el tiempo y la sangre se queda con el tiempo, y precisamente por razones de tiempo y para no caer en otras situaciones que pueden tomarse en forma torcida es que hoy se presenta este proyecto cuya finalidad, como señalaba el compañero Calabrese, en algunos términos tendríamos que aclarar más. En ningún momento se ha dicho que los jueces deben mandarse a mudar. Que haya jueces que no estén cómodos es una cosa distinta, que correr por su cuenta, porque han nacido con otra mentalidad y porque son jueces gorilas. Con esos jueces no es posible realizar una revolución justicialista que no sienten, y con respecto a la cual por lo menos no han tratado de adecuarse.

Por otro lado, se nos habla de la legitimidad. Yo pregunto cuándo se da la legitimidad para poder ser juez constitucional, ya que evidentemente desde hace dieciocho años en este país no ha habido legitimidad. Pudo haber habido jueces pseudoconstitucionales o pseudolegítimos, ya que la expresión mayoritaria del pueblo ha estado ausente y jamás les ha preocupado.

Aquí también se ha hablado del compañero Cámpora, preguntándose por qué motivos renunció. En realidad, esa renuncia no fue una decisión antojadiza de Cámpora, sino un mandato del pueblo, que quería tener a Perón en la Casa Rosada para que, junto con él, el pueblo también entrara en la Casa de Gobierno. (*¡Muy bien! Aplausos.*)

Se nos ha dicho que nosotros tenemos mucho que aprender; personalmente, yo quiero aprender mucho, pero quiero ser leal no sólo al movimiento peronista, al que pertenezco, sino a mi país. Habría que demostrar con hechos lo que ha sucedido durante estos dieciocho años, para que se advierta cuántos somos los que hemos sufrido las torturas, las persecuciones y los fusilamientos. Por eso no queremos caer en la imagen que pretende demostrar que en la Casa Rosada hay un dictador.

La Comisión de Previsión y Seguridad Social ha cumplido en forma genérica con los lineamientos que han señalado algunos señores diputados de la oposición, desarrollando una política coherente, ya que los fondos que por esta ley se establecen para aquellos jueces que no estén en condiciones de jubilarse no saldrán de las arcas de los compañeros jubilados, sino que el gasto que la ejecución de la ley demande saldrá de rentas generales. Esta circunstancia hace que los integrantes de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, no sólo en lo que atañe a los compañeros de bancada sino también a los demás diputados que la integran, estén completamente tranquilos en cuanto a su intervención en este proyecto. (*¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Fernández Gill.

Sr. Fernández Gill. — Señor presidente: quiero hacer algunas puntualizaciones muy breves.

En realidad, no pensaba hacer uso de la palabra en este debate, pues si bien estaba anotado inicialmente, con posterioridad pedí que se borrara mi nombre de la lista. Sin embargo, algunas de las expresiones vertidas en este debate, principalmente por el presidente de la Comisión de Justicia, me obligan a intervenir, aunque sea muy brevemente.

En segundo lugar, quiero decir que, como los hombres de este bloque de la Alianza Popular Federalista tenemos frente a esta circunstancia y a este problema libertad de acción, apoyé el proyecto en discusión y sugerí solamente dos modificaciones en cuanto a la fecha de entrada en vigencia de la ley y al establecimiento de una alternativa respecto de los requisitos de plazo o antigüedad exigidos, es decir, no solamente los 25 años de servicios y un mínimo de 8 años en la justicia, sino que proponía el agregado siguiente: «o 22 años de desempeño ininterrumpido en la justicia».

El señor diputado Labake dijo hace unos instantes que esta ley intentaba o quería hacer realidad un viejo principio muchas veces proclamado y declamado y nunca cumplido: el de que no iba a haber más ni vencedores ni vencidos, a lo que tradicionalmente se agrega: sino argentinos unidos fraternalmente y para siempre.

Precisamente, este criterio fue el que me llevó a expresar lo siguiente en los fundamentos de mis sugerencias en cuanto a la modificación del despacho de la mayoría, que comparto, salvo estas dos discrepancias realmente importantes. De ninguna manera cuestiono la constitucionalidad del proyecto. Es decir, no concuerdo con ninguno de los argumentos que aquí se han esgrimido en el sentido de que el proyecto es inconstitucional.

Inspirado en el anhelo que recordó el señor diputado Labake, yo sostuve en los fundamentos de mis sugerencias, en lo que concierne a la fecha de entrada en vigencia de la ley, lo siguiente:

«Por eso es que debe señalarse el 25 de mayo de 1973 como día de entrada en vigencia de la presente ley, ya que se trata de una fecha trascendente para la vida jurídica del país, en que después de un prolongado período signado por la incertidumbre en el campo político y social, recobró plena vigencia el funcionamiento de las instituciones republicanas consagradas por la Constitución Nacional, volvieron a resonar en este recinto las voces de los representantes del pueblo y, en suma, se dio acabado cumplimiento a la voluntad ciudadana exteriorizada en los comicios del 11 de marzo.

»Además, tomando el 25 de mayo como fecha de entrada en vigor de la presente ley, se amolda su espíritu al que animó a las restantes disposiciones adoptadas a partir de tan trascendente momento, entre las que se cuenta la generosa amnistía sancionada por la ley 20.508, que importó, como se dijo oportunamente, echar un manto de olvido sobre acontecimientos sucedidos

con anterioridad en los más diversos aspectos de la vida del país».

Pasaré ahora a decir cuáles son los motivos concretos por los cuales hago uso de la palabra en este debate. Ellos no son otros que las manifestaciones del señor presidente de la Comisión de Justicia, cuando dijo que se establece como fecha de entrada en vigencia de la ley la del 1º de junio, con el objeto de excluir deliberadamente a los ex miembros de la Cámara Federal en lo Penal Especial.

Creo tener autoridad para tocar este tema que evidentemente es muy espinoso, pero que habré de plantear con absoluta franqueza y claridad porque fue precisamente el bloque de la Alianza Popular Federalista el primero que depositó en esta Cámara un proyecto por el cual se propiciaba la derogación de toda la legislación represiva y, en particular, de los tribunales especiales a los que habíamos considerado terminantemente como anticonstitucionales. Tuve también la satisfacción de que este proyecto fuera aprobado en mi bloque como resultado de una iniciativa mía.

No he podido guardar silencio ante las manifestaciones del señor diputado Calabrese, porque entiendo que no puedo ni debo hacerlo cuando no se cumple con el propósito que menciona el mismo señor diputado Calabrese en su informe: el viejo concepto de Justiniano sobre la justicia: dar a cada uno lo suyo, dar a cada uno lo que le corresponde. Tampoco puedo guardar silencio cuando se intenta medir con reglas o con varas de diferentes medidas a hechos y situaciones similares y a funcionarios que se han encontrado en circunstancias, yo diría, casi idénticas.

Me voy a permitir aquí, simple y brevemente, señalar los siguientes hechos. Se excluye a los miembros de la Cámara Federal en lo Penal en virtud de los fundamentos que ha dado el señor diputado Calabrese. Pero observen los señores diputados cómo no se cumplen los recaudos del viejo concepto de la justicia. Están en actividad muchos jefes militares que han pertenecido a un comando, que fue el II Cuerpo de Ejército, y que —como también lo saben algunos hombres que han luchado, en algunos casos justamente y en otros no, en la subversión— no ignoran de qué manera, por ejemplo, murió o desapareció el doctor Brandazza.

El 22 de agosto del año pasado se producen los tristísimos acontecimientos de Trelew. En ese momento formaba parte del consejo de almirantes el almirante Alvarez, actual comandante en jefe de la Armada con acuerdo del Senado de la Nación.

El actual comandante en jefe del Ejército, a quien el Senado de la Nación le dio su acuerdo antes de que tomara una actitud valiente y verdaderamente nacional en la ciudad de Caracas; antes de que comprendiera el problema de la juventud y realizara, juntamente con un sector de ella, el llamado operativo Dorrego, fue soli-

dario y formó parte de la llamada cúpula militar, que es responsable directísima de la creación de los tribunales especiales.

Sin embargo, a los jueces que integraron la Cámara Federal en lo Penal, muchos de los cuales tenían veinticuatro, veinticinco o veintiséis años de antigüedad en el Poder Judicial, y que formaron parte de esa Cámara a raíz de un procedimiento de destino que puede considerarse similar al que se puede otorgar a cualquier miembro de las fuerzas armadas, se los excluye por cuatro o cinco días y pierden todo derecho después de haberse comportado dignamente durante sus largos y meritorios años de actuación judicial.

Muchos de los jóvenes que han participado en la acción subversiva —reconozco que en algunos casos con justicia— saben que, en no pocas oportunidades, gracias a la acción de algunos de esos jueces, fueron substraídos de la órbita militar ciudadanos que, de lo contrario, hubieran caído en manos de los grupos paramilitares que funcionaban en el comando del II Cuerpo de Ejército con sede en la ciudad de Rosario.

Asumo plena responsabilidad por todo lo que digo y lamento que no esté presente el señor diputado Marino, que podría dar testimonio de mucho de lo que expreso. Si bien hubo además algún juez indigno, éste no estaría protegido por la cláusula que propongo como modificación.

He querido puntualizar, nada más que puntualizar, estos hechos, dado que me es imposible permanecer en silencio ante algunas manifestaciones vertidas por el señor presidente de la Comisión de Justicia. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Sánchez Toranzo.

Sr. Sánchez Toranzo. — Señor presidente: voy a ser sumamente breve, porque la tiranía del tiempo me obliga a ello.

No voy a insistir con respecto al cuestionado asunto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto en debate. Ya se han expresado sobre el particular los señores diputados Calabrese, Labake y Catalano, a cuyos conceptos adhiero. Pero no quiero pasar por alto algunas manifestaciones que se han formulado.

En cuanto a la Cámara Federal en lo Penal, el señor diputado que me precedió en el uso de la palabra dijo que había magistrados que ya tenían muchos años de antigüedad en la función judicial. No debemos olvidar a este respecto que tales magistrados no estaban obligados a aceptar el cargo en la Cámara Federal y, si lo aceptaron, ellos asumieron las contingencias de tal decisión.

Por otra parte, en cuanto al señor comandante en jefe del Ejército, debo decir que es un hombre que honra a la función que desempeña, y que en este momento está identificado con la corriente popular y con los propósitos de libera-

ción nacional a que todos los señores diputados hemos adherido expresamente en este recinto.

Sr. Fernández Gill. — Yo no he dicho que no la honre; me he limitado a hacer historia.

Sr. Sánchez Toranzo. — Me agrada su aclaración, señor diputado.

Tampoco quiero dejar pasar por alto algunas expresiones que han tenido los diputados Monsalve, Vesco y Massolo. Algo ya expresó el señor diputado Labake al respecto. Pareciera que se ve en esta ley un ardid o una trampa para poner el Poder Judicial al servicio del Poder Ejecutivo. Sobre este particular deseo puntualizar una vez más lo que dijo el señor miembro informante.

De los jueces que actualmente ocupan cargos, un 43 por ciento corresponde a los ascendidos; un 20 por ciento a los confirmados; un 17 por ciento a los reincorporados, y un 20 por ciento a los nuevos nombramientos. Vale decir que se ha procedido con un espíritu de justicia y en forma objetiva y serena, sin dejarse llevar por las pasiones partidarias.

Deseo puntualizar también otros conceptos que se han vertido. El señor diputado Massolo ha dicho que hay que superar antagonismos. Yo puedo decir a mis pares que el señor diputado Massolo en nada ha contribuido con su exposición al propósito que anunciara. Nos ha atacado en toda forma y ha expresado que hay propósitos ocultos. Sobre este particular quiero recordar las palabras de un hombre, de un político y de un republicano que me merece respeto y consideración: me refiero al doctor Ricardo Balbín. El ha dicho, en una oportunidad en que lo escuché: «Yo soy un hombre que procedo de buena fe, y no tengo derecho a dudar de la buena fe de los otros.»

La relación que he hecho de los porcentajes en las designaciones en la justicia nacional prueba acabadamente la buena fe con que está procediendo el Poder Ejecutivo y con la que habrá de continuar actuando el bloque mayoritario en el Poder Legislativo.

Sr. Massolo. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Sánchez Toranzo. — ¡Cómo no, señor diputado!

Sr. Massolo. — Tengo el honor de integrar la Comisión de Justicia, juntamente con el señor diputado preopinante. A través de la actuación que ambos hemos tenido hasta ahora en común, he podido evaluar su alto espíritu de justicia, su sensatez, su patriotismo y su honrada manera de pensar. Por ello me llaman poderosamente la atención las manifestaciones del señor diputado Sánchez Toranzo, y pienso que probablemente ha interpretado equivocadamente mi pensamiento.

Al comenzar mi exposición, yo aclaré que no podía de ninguna manera pensar en móviles ocultos, pues tenía la absoluta seguridad acerca de la ecuanimidad con que el ministro de Justicia iba a manejar esta ley, porque conozco su trayectoria, sus antecedentes y su probidad moral; y también hice hincapié en la jerarquía

espiritual del informe de nuestro presidente de la Comisión de Justicia, que nos honra con su presidencia, el señor diputado Calabrese. Dije también que no tenía la menor duda de la buena fe de la bancada mayoritaria y que no ponía en tela de juicio ni la propia buena fe del Poder Ejecutivo.

Simplemente me limité a hacer un planteo exclusivamente institucional. Nuestra gran preocupación es el peligro de la inestabilidad del Poder Judicial, comprometida seriamente por el artículo 2º. Algunos diputados se preguntan de dónde proviene la inconstitucionalidad del artículo 2º. Por vía de hipótesis yo pregunto: si nosotros fuéramos conminados a jubilarnos en el término de treinta días bajo un régimen que no corresponde y si, de no hacerlo, tuviéramos el castigo de percibir la mitad de la jubilación, ¿eso no sería una coacción que compromete la independencia de un poder del Estado?

Mi gran preocupación fue que el señor senador Saadi, que con el señor senador Díaz Bialek es el autor del proyecto que estamos considerando, dijo en aquel cuerpo que la revolución del 28 de junio de 1966 había tenido el efecto de suspender todos los acuerdos, y eso no coincide con las palabras de nuestro presidente de la Comisión de Justicia, según el cual todos los jueces nombrados con anterioridad a esa fecha gozan de inamovilidad.

Si el criterio del señor senador Saadi llegara a convertirse en ley, después que nosotros aprobáramos este proyecto de buena fe, correríamos un gran peligro si se usara este recurso legal para barrer con todo el Poder Judicial. Ese es el peligro que provocó la preocupación del diputado que habla, con patriotismo y con la mayor buena fe.

Sr. Presidente (Busacca). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Sánchez Toranzo.

Sr. Sánchez Toranzo. — Quiero aclarar que las palabras de un legislador en el recinto son una cuestión estrictamente personal.

El señor diputado Falabella ha expresado que todos los jueces deben ser barridos por ser perjurios, y que él considera que eso constituye una inmoralidad para poder administrar justicia.

El texto de esta ley es lo que vale, y la interpretación aquí, en esta Cámara, es la que da el miembro informante, a la cual adhiere todo el sector de la bancada mayoritaria.

Quiero significar al señor diputado Massolo, con el mayor respeto, que si bien es cierto que tuvo palabras de elogio para el señor ministro de Justicia, también habló de móviles ocultos que pudieran existir.

Sr. Massolo. — Descartándolos, señor diputado. Por lo menos esa fue mi intención.

Sr. Sánchez Toranzo. — Usted se expresó con claridad y con todas las palabras. Yo comparto el criterio expresado sobre la majestad de la justicia y el papel realmente fundamental que

desempeña en el seno de la sociedad. En eso comparto el criterio sentado por los señores diputados Vesco y Monsalve, que lo han expresado con toda amplitud y firmeza.

¿Por qué van a dudar de la buena fe de nosotros los integrantes de la bancada de la mayoría, y del Poder Ejecutivo, cuando los hechos están demostrando, con la designación de los jueces, que estamos procediendo con total equidad en este asunto?

¿Por qué los señores diputados de la oposición nos van a llevar a una cuestión de tipo político? ¿Por qué razón, si nosotros llegamos sin odios ni rencores?

No queremos dejarles a nuestros hijos una herencia luctuosa para el futuro.

¿Por qué van a dudar de la buena fe con que procedemos? ¿Por qué pensar, audaz y temerariamente, que estamos frente a un ardid para poner la justicia al servicio de cualquier otro poder del Estado, cuando los hechos están demostrando todo lo contrario?

Se ha dicho que el señor senador Pennisi ha manifestado que quería poner la justicia al servicio de un partido o de un movimiento político, pero resulta que en el Diario de Sesiones del Honorable Senado, cuya parte pertinente me voy a permitir leer, dice lo siguiente: «... en procura del logro de una homogeneidad acorde con el sentir del pueblo y adecuada a los fines de una política de liberación nacional y, consecuentemente, a una revolución que como lo dijo nuestro líder el general Perón, la queremos realizar en paz, en armonía y con la convocatoria de todas las voluntades de los hombres y mujeres de nuestra Argentina». Esto es lo que expresó el señor senador Pennisi, y en manera alguna manifestó que quería poner el Poder Judicial al servicio de un partido o de un movimiento determinado.

Sr. Massolo. — Me permite una interrupción, señor diputado, con la anuencia de la Presidencia?

Sr. Presidente (Busacca). — El señor diputado Sánchez Toranzo no le ha autorizado la interrupción.

Sr. Massolo. — Lo lamento, porque queda sin aclarar lo del señor senador Pennisi. Hay que leer todo su discurso.

Sr. Presidente (Busacca). — No está en consideración el discurso del señor senador Pennisi, sino el orden del día número 118.

Sr. Sánchez Toranzo. — He querido aclarar la posición del señor senador Pennisi, que no es la que se ha dicho en este recinto.

Sr. Massolo. — Leyendo una cosa que no es la que corresponde.

Sr. Sánchez Toranzo. — No, señor diputado. Esta es la posición y le voy a decir más, para terminar, porque el tiempo...

Sr. Presidente (Busacca). — Está muy vencido, señor diputado.

Sr. Sánchez Toranzo. — Así es, señor presidente.

Esta es una ley de emergencia. No se trata solamente de un procedimiento correcto, sino también generoso.

Quiero que se entienda que a nosotros se nos persiguió y fustigó. El señor diputado Monsalve habló de Hitler, pero se olvida que la revolución que se llamó a sí misma libertadora nos aplicó a nosotros, los peronistas, el decreto 4.161, similar al que aplicaron las potencias vencedoras al pueblo alemán. Fuimos perseguidos en todas las formas por cualquier parte del país. Vuelvo a repetir que ya lo hemos echado a la espalda; eso ni nos interesa.

Quiero decir, para terminar, que tengan la tranquilidad los señores diputados que al sancionar esta ley no vamos a colocar al Poder Judicial al servicio del Poder Ejecutivo o de cualquier otro poder. Comprendemos que aquél es la máxima garantía de la seguridad, y así como no queremos un Poder Judicial al servicio de los intereses antinacionales y del privilegio, tampoco queremos un Poder Judicial que esté al servicio de cualquier otro poder del Estado. Queremos jueces dignos y probos que administren justicia con equidad y con serenidad, no aplicando la ley de forma que signifique una garantía solamente para nosotros —de ninguna manera—, sino una garantía para todos los ciudadanos argentinos. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a votar, en general, el dictamen de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Justicia, sobre régimen de jubilaciones para magistrados judiciales.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — En consideración en particular el artículo 19.

Por Secretaría se dará lectura a las observaciones.

Sr. Secretario (Rocamora). — Redacción propuesta por los señores diputados Humberto Suárez y Falú: «Los jueces que tuviesen acuerdo legislativo para el ejercicio de sus actuales cargos y los que, contando con acuerdo legislativo al mes de junio de 1966, estuviesen desempeñando otros cargos judiciales en que no tengan aún acuerdo del Honorable Senado, podrán por esta única vez acogerse a los beneficios jubilatorios acreditando 25 años de servicios en cualquier actividad con un mínimo de 8 años en la justicia nacional, sin límite de edad».

Sr. Presidente (Busacca). — ¿La comisión acepta la modificación propuesta?

Sr. Calabrese. — No acepta, señor presidente.

Sr. Secretario (Rocamora). — El señor diputado Monsalve propone reemplazar «treinta días» por «noventa días» y la palabra «promulgación» por «publicación».

Sr. Calabrese. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Falabella.

Sr. Falabella. — Señor presidente: se nos han hecho numerosas consultas respecto de la inter-

pretación de la frase «sin límite de edad». Lo cierto es que podría resultar un poco obscura para quienes tuvieran que decidir el día de mañana.

No obstante ocupar una jerarquía dentro de la Comisión de Justicia, le voy a solicitar a su presidente, para que no queden dudas, que acepte que luego de «sin límite de edad» se agregue «en el ingreso o en el retiro». Y paso a dar una explicación.

El texto, como está, resultaría muy claro respecto de la edad máxima, pero no respecto de la edad mínima, porque la ley común fija los 62 y los 18 años. Pero hay muchos empleados de la justicia que han ingresado y aportado desde los 16 y 17 años, y muchos quedarían excluidos por días o por meses de los beneficios de esta ley, no obstante haber cubierto el lapso que la ley fija.

Sr. Presidente (Busacca). — ¿La comisión acepta el agregado propuesto?

Sr. Calabrese. — La comisión acepta porque considera que es algo que se ajusta a la realidad.

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a votar el artículo 1º con el agregado propuesto por el señor diputado Falabella y aceptado por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — En consideración el artículo 2º.

Tiene la palabra el señor diputado Calabrese.

Sr. Calabrese. — Señor presidente: a los efectos de que quede perfectamente aclarado el sentido del artículo 2º, la redacción definitiva sería la siguiente: «Por esta única vez, los magistrados y funcionarios a que se refiere el artículo anterior, que se encuentren en condiciones para obtener la jubilación ordinaria de conformidad a los decretos leyes 18.464 del año 1969 y 20.433 del año 1973 y que tuviesen como mínimo sesenta años de edad, podrán acogerse..., etcétera. El resto sigue igual.

Sr. Fernández Gill. — ¿Me permite, señor presidente?

Sr. Presidente (Busacca). — Sí, señor diputado.

Sr. Fernández Gill. — Aclaro a la Presidencia que he hecho llegar a la Secretaría una modificación al artículo 1º.

Sr. Presidente (Busacca). — Ya se ha votado el artículo 1º, señor diputado.

Sr. Fernández Gill. — Solicito entonces que se reconsidere dicho artículo.

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a votar la moción de reconsideración formulada por el señor diputado Fernández Gill.

—Resulta negativa.

Sr. Presidente (Busacca). — Por Secretaría se va a dar lectura de la redacción que proponen los señores diputados Suárez (H. F.) y Falú para el artículo 2º del dictamen.

Sr. Secretario (Rocamora). — Dice así: «Si el juez comprendido en el artículo anterior tuviese 60 años de edad gozará del haber jubilatorio establecido en las llamadas leyes 18.464 y 20.433.»

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Acepta la comisión la modificación propuesta?

Sr. Calabrese. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Busacca). — Por Secretaría se dará lectura de la observación formulada por el señor diputado Fernández Gill al artículo en consideración.

Sr. Secretario (Rocamora). — Dice así: «Por esta única vez, los magistrados y funcionarios a que se refiere el artículo anterior, que tuvieren como mínimo 60 años de edad, deberán acogerse dentro de igual plazo a los beneficios vigentes, aunque éstos exigiesen un mayor límite de edad.»

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Acepta la comisión la modificación propuesta?

Sr. Calabrese. — La comisión no acepta, señor presidente.

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a votar el artículo 2º con el texto leído por el señor miembro informante.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — En consideración el artículo 3º.

Tiene la palabra el señor diputado Calabrese.

Sr. Calabrese. — Señor presidente: el artículo 3º, que ha sido interpretado por la mayoría de la comisión en varias oportunidades a través de las exposiciones de los señores diputados que hicieron uso de la palabra, así como también del diputado que habla, miembro informante, tiene dos aspectos bien definidos: quienes ejercitan el derecho de opción deben permanecer en los puestos hasta tanto se los reemplace, y haciéndolo gozan normalmente del sueldo que perciben. En el supuesto caso de que haciendo uso de la opción que determina esta ley se jubilen y dejen sus cargos, la caja de jubilaciones correspondiente deberá abonar de inmediato el setenta y cinco por ciento de sus haberes normales, ello sujeto, naturalmente, al reajuste pertinente.

Con el objeto de aclarar, insisto en la tesitura de hace unos momentos, y para clarificar aún más, propongo se supriman las palabras «En este último caso», de modo que el artículo 3º quedaría así redactado: «Quienes ejercitasen los derechos establecidos en los artículos que anteceden, tendrán la obligación de permanecer en sus cargos hasta que sean nombrados sus reemplazantes. Y hasta tanto se les acuerde la prestación jubilatoria percibirán mensualmente a cuenta de la misma el setenta y cinco por ciento de sus haberes».

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Vesco.

Sr. Vesco. — Voy a formular una observación en relación con este artículo.

Coincidió en general con el texto del artículo, pero me parece inconveniente que la ley establezca la obligación de permanencia en los cargos hasta que sean nombrados los reemplazantes, porque el Código Penal dispone en el artículo 252 que el abandono del cargo es un delito, y nosotros no podemos decirles a los jueces que no cometan un delito.

El artículo 252 del Código Penal, que se refiere a abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público, dice lo siguiente: «Será reprimido con multa de 5.000 hasta 100.000 pesos e inhabilitación de un mes a un año el funcionario que sin habersele admitido la renuncia de su destino lo abandonara con daño del servicio público».

Quiere decir que por este artículo que consideramos, tal como está redactado, le decimos al juez que le prohibimos cometer un delito que prevé y sanciona el Código Penal.

Por eso, solicito a la comisión la supresión de la parte del artículo que dice que tendrán la obligación de permanecer en sus cargos, porque esta obligación se la impone el Código Penal.

El artículo a mi juicio quedaría claramente redactado de la siguiente manera: «Quienes ejerzan los derechos establecidos en los artículos que anteceden, hasta tanto se les acuerde la prestación jubilatoria percibirán mensualmente, a cuenta de la misma, el 75 por ciento de sus haberes.»

Propongo entonces concretamente a la comisión que se supriman las palabras «tendrán la obligación de permanecer en sus cargos».

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Calabrese. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Balestra.

Sr. Balestra. — Quiero señalar lo siguiente con respecto a este artículo y a la modificación que propone introducir el señor presidente de la Comisión de Justicia.

En nuestra intervención sostuvimos el mismo criterio que ha recogido o que ha sido el que en definitiva ha inspirado la redacción del artículo, según el señor miembro informante. Pero quiero destacar que según he escuchado atentamente, en la modificación que él propone hay una contradicción entre el espíritu que explicó con toda claridad —y con el cual coincidimos plenamente en cuanto al monto de la remuneración que ha de percibir el magistrado que va a ser relevado— y la nueva redacción. A mi juicio —salvo mejor criterio del señor diputado y de la comisión—, no queda suficientemente clara la intención que expresara explícitamente. Pienso que, para evitar confusiones, debería adoptarse la misma redacción que el señor diputado había enunciado.

En todo caso, podríamos pasar a un breve cuarto intermedio para acordar la redacción definitiva.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Rafael.

Sr. Rafael. — Considero que el artículo 39 quedaría perfectamente claro si adoptásemos la siguiente redacción: «Quienes ejercitasen los derechos establecidos en los artículos que anteceden, tendrán la obligación de permanecer en sus cargos hasta que sean nombrados sus reemplazantes, percibiendo en ese caso el haber mensual correspondiente. Si cesaren en el cargo por designación de su reemplazante, percibirán de inmediato y mensualmente el 75 por ciento de sus haberes a cuenta de la prestación jubilatoria que les corresponde».

Sr. Calabrese. — La comisión acepta.

Sr. Presidente (Busacca). — Por Secretaría se va a dar lectura de dos observaciones que han llegado a la mesa de la Presidencia.

Sr. Secretario (Rocamora). — Los señores diputados Suárez (H. F.) y Falú proponen que el artículo 39 quede redactado así: «El haber jubilatorio de los jueces comprendidos en el artículo 1º se disminuirá en un 4 por ciento por cada año de edad que les faltare para completar los sesenta años. No obstante, podrán compensar cada año que les faltare para completar los sesenta años de edad con cada año de servicio que exceda de los veinticinco años».

Sr. Presidente (Busacca). — ¿La comisión acepta?

Sr. Calabrese. — La comisión no acepta, porque considera que es un régimen injusto.

Sr. Secretario (Rocamora). — El señor diputado Monsalve propone que el artículo 39 quede redactado así: «Quienes ejercitasen los derechos establecidos en los artículos que anteceden tendrán la obligación de permanecer en sus cargos hasta que sean nombrados los reemplazantes. En caso de así hacerlo, seguirán percibiendo sus haberes íntegramente. Desde el momento en que sean reemplazados y hasta tanto se les acuerde la prestación jubilatoria, percibirán mensualmente el 75 por ciento de sus haberes, que les abonará la división administrativa y contable del Poder Judicial de la Nación. Cuando se les acuerde la prestación jubilatoria y comiencen a percibir el beneficio, los fondos que se hubieren acumulado y que constituirán una retroactividad a favor de los beneficiarios, serán restituidos por la caja de jubilaciones pertinente a la dirección administrativa y contable del Poder Judicial de la Nación».

Sr. Presidente (Busacca). — ¿La comisión acepta?

Sr. Calabrese. — No, señor presidente.

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a votar el artículo 39 con la redacción propuesta por el señor diputado Rafael y aceptada por la comisión.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — En consideración el artículo 49.

Por Secretaría se va a dar lectura de las propuestas de modificación formuladas.

Sr. Secretario (Rocamora). — El señor diputado Fernández Gill propone que el artículo 4º quede redactado así: «Las disposiciones establecidas en esta ley no serán de aplicación a los nuevos magistrados o funcionarios judiciales designados con posterioridad al 24 de mayo de 1973».

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Calabrese. — No, señor presidente.

Sr. Secretario (Rocamora). — Los señores diputados Suárez (H. F.) y Falú proponen para el artículo 4º la siguiente redacción: «Quienes opten por acogerse a los beneficios de esta ley deberán comunicarlo fehacientemente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación dentro de los treinta días de la fecha de su promulgación».

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Calabrese. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a votar el artículo 4º.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — En consideración el artículo 5º.

Por Secretaría se va a dar lectura de las propuestas de modificación formuladas.

Sr. Secretario (Rocamora). — El señor diputado Fernández Gill propone para el artículo 5º la siguiente redacción: «Los magistrados y funcionarios que hubiesen cesado a partir del 25 de mayo de 1973, podrán acogerse a los beneficios de esta ley».

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Calabrese. — La comisión no acepta, señor presidente.

Sr. Secretario (Rocamora). — Los señores diputados Suárez (H. F.) y Falú proponen para el artículo 5º la siguiente redacción: «Quienes opten por los beneficios que acuerda esta ley tendrán la obligación de permanecer en sus cargos hasta que sean nombrados sus reemplazantes. En este caso, y hasta que les sean otorgados los beneficios jubilatorios, los magistrados percibirán mensualmente, a cuenta de los mismos, el setenta y cinco por ciento (75 %) de sus haberes, sin perjuicio de los reajustes posteriores correspondientes».

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Calabrese. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a votar el artículo 5º.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — En consideración el artículo 6º.

Sr. Secretario (Rocamora). — Los señores diputados Suárez (H. F.) y Falú proponen para el artículo 6º la siguiente redacción: «Los magistrados que hubiesen cesado en sus funciones

a partir del día 1º de junio de 1973, podrán acogerse a los beneficios de esta ley».

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Calabrese. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a votar el artículo 6º.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — Por Secretaría se va a dar lectura del artículo 7º propuesto por los señores diputados Suárez (H. F.) y Falú.

Sr. Secretario (Rocamora). — Dice así: «Las prestaciones que corresponda abonar de acuerdo con esta ley a beneficiarios que no reúnan los requisitos establecidos por las llamadas leyes 18.464 y 20.433, se cargarán a rentas generales hasta que aquéllos cumplieren la edad exigida por las citadas normas legales».

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Calabrese. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Busacca). — Por Secretaría se va a dar lectura del artículo 8º propuesto por los señores diputados Suárez (H. F.) y Falú.

Sr. Secretario (Rocamora). — Dice así: «Las disposiciones de esta ley no serán de aplicación a los magistrados y funcionarios judiciales designados con posterioridad al 24 de mayo de 1973, quienes continuarán sometidos al régimen previsional vigente».

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Calabrese. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Busacca). — Por Secretaría se va a dar lectura del artículo 7º propuesto por los señores diputados Calabrese y Falabella.

Sr. Secretario (Rocamora). — Dice así: «No podrán acogerse a los beneficios de esta ley los magistrados judiciales cuya conducta hubiese sido cuestionada mediante solicitud de juicio político, hasta tanto dicho trámite fuese resuelto en su favor».

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Falabella.

Sr. Falabella. — Con el señor presidente de la Comisión de Justicia, diputado Calabrese, hemos propuesto este artículo 7º.

Es evidente que en lo formal una ley de tipo previsional no podría interrumpir el trámite iniciado ya sea por la Excelentísima Corte Suprema de la Nación como por legisladores y particulares, en cuanto a la denuncia de magistrados bajo el gravamen o la imputación de inconducta.

En lo substancial corresponde señalar que para la Constitución Nacional el efecto de la sentencia condenatoria o excluyente del Honorable Senado tras la acusación de la Honorable Cámara de Diputados no es solamente la destitución del magistrado sino también su inhabilitación. De manera tal que, si bien es cierto que esto es una especie, por vía piadosa, de inhabilitación rentada, lo que corresponde a los jueces

que ya están sospechados o han sido denunciados, es que soporten el juicio político y no puedan acogerse a los beneficios de esta ley previsional.

Ese es el fundamento del artículo propuesto.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Balestra.

Sr. Balestra. — Señor presidente: la disposición proyectada es exagerada en demasía. Obsérvese que, de acuerdo con ese texto, bastaría con que a cualquiera de los pares de la Honorable Cámara de Diputados se le ocurriese denunciar a un juez para que, aun cuando la solicitud fuese rechazada por el cuerpo o ni siquiera fuese tratada en comisión, el juez impugnado no pudiera acogerse a los beneficios de la ley.

Si lo que se pretende con esta redacción es evitar que por la vía del acogimiento a los beneficios de la ley se eluda el juicio político, así debe decirse claramente; pero lo que no puede hacerse es que, por medio de una disposición de este tipo, se prive a los magistrados de acogerse a los beneficios de la ley.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Falabella.

Sr. Falabella. — Según surge de la lectura hecha por el señor secretario, como expresión rectora en el contexto de ese artículo debe observarse la conjugación utilizada del verbo haber. La cláusula utiliza la expresión «hubiese», lo cual quiere significar, para alejar los escrúpulos tan finos del señor diputado Balestra (*Risas*), que solamente se trata de los jueces a quienes hasta este momento se les haya denunciado, y no a los casos del futuro.

Sr. Portero. — No se pueden hacer excepciones que signifiquen dar pie a planteos personales de los señores diputados.

Sr. Falabella. — Esa expresión la considero un verdadero agravio. No es un planteo personal, y lo desafío al señor diputado a que defienda a esos jueces...

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Busacca). — Sírvanse no dialogar los señores diputados.

Tiene la palabra el señor diputado Massolo.

Sr. Massolo. — Para evaluar el grado de injusticia que involucra esta reforma del despacho o esta incorporación de un artículo nuevo bastaría manejarnos con una simple hipótesis.

En el supuesto de que los jueces cuestionados por el señor diputado Falabella en el juicio político que ha planteado...

Sr. Falabella. — Y los que ha cuestionado la Corte, que son treinta magistrados.

Sr. Massolo. — El juicio político se manifiesta no a través de la Corte, sino de la Cámara de Diputados, que es la acusadora de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución.

De cualquier manera, no se nos puede imponer a nosotros ningún criterio, porque, sobre la

base de los cargos que tenemos a la vista, somos nosotros los únicos jueces que podemos acusar a los magistrados ante el Honorable Senado.

Lo que quiero decir es lo siguiente. Esta noche, cuando se ha hablado de la conciliación y la paz entre los argentinos, es una tremenda injusticia que esta Honorable Cámara se coloque en posición persecutoria, haciendo perder la jubilación a quienes estén sospechados de conducta por un juicio político no ventilado.

Quiero manejar la siguiente hipótesis. Supongamos que esos jueces no sean los que tienen acuerdo —es decir que su designación sea posterior a julio de 1966— y que el Poder Ejecutivo decida reemplazarlos. Esos magistrados, por el solo hecho de tener un juicio político pendiente, automáticamente perderán la jubilación. Es una injusticia en la que la Cámara no puede caer.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Vesco.

Sr. Vesco. — Además, el artículo propuesto por el señor diputado Falabella tortura el procedimiento del juicio político, porque este cuerpo es cámara acusadora, y la que sentencia en el juicio político es la Cámara de Senadores. Si nosotros aprobamos este artículo estamos sentenciando y condenando al juez que tiene un juicio político, del cual solamente somos acusadores y a quien no podemos ni absolver ni condenar.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Falabella.

Sr. Falabella. — El artículo es demasiado claro, señor presidente. No hay en él ningún prejuzgamiento ni presunción. Se dice simplemente que el juez que ya esté sometido potencialmente por solicitud a juicio político no podrá acogerse a los beneficios de esta ley hasta no tener resolución favorable. Si tiene resolución favorable, nacerá para él el plazo de 30 días para el acogimiento. Si tiene resolución en contra quedará moralmente inhabilitado de por vida para ocupar cualquier tipo de cargo público y, por ende, quedará inhabilitado para percibir una jubilación de la que no es merecedor. Este es el fundamento moral de la disposición que propongo.

Sr. Portero. — ¿Y si no hubiera resolución?

Sr. Falabella. — ¿Por qué piensa el señor diputado que no va a haber resolución en un trámite que se ha iniciado y que tiene que tener una resolución final?

Sr. Portero. — Porque en el caso de la separación de magistrados sin acuerdo, que son reemplazados automáticamente porque se pide acuerdo para otro juez, por ese mismo acto se hace innecesario proseguir con el trámite del juicio político. Pido a los colegas que razonen porque, precisamente, ése es el caso concreto de un juez que ha ocupado bastante el trámite de las comisiones de Justicia y de Juicio Político, a quien no conozco ni definiendo y por quien no tengo el deber de ocuparme de su situación

personal, que en definitiva no va a ser sancionado. Las dos comisiones han aconsejado ese pronunciamiento.

Sr. Falabella. — Ese señor juez tiene auto de procesamiento en la justicia nacional. Está procesado y hay orden de detención.

Sr. Portero. — ¡Pero eso no es un juicio político!

Sr. Falabella. — Pero de todas maneras se lo gra la inhabilidad por la otra vía.

Sr. Presidente (Busacca). — Antes de proseguir con este diálogo la Presidencia desea saber si la comisión acepta el artículo propuesto.

Sr. Calabrese. — Señor presidente: como algunos señores diputados tienen ciertas dudas, solicito que la Honorable Cámara pase a un breve cuarto intermedio, con permanencia de los señores diputados en sus bancas.

Sr. Presidente (Busacca). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Busacca). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio en las bancas.

—Se pasa a cuarto intermedio.

—Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Busacca). — Continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor diputado Calabrese.

Sr. Calabrese. — La cuestión que ha movido al cuarto intermedio preocupa a toda la Cámara y muy especialmente al bloque de la mayoría, pues tenemos el vehemente deseo de demostrar una vez más —como palabras finales mías— que no existe en nuestro propósito un designio de persecución ni de venganza.

Queremos que no se interprete mal el artículo que se ha leído por Secretaría. Que no nos puedan decir a nosotros que faltamos en ese aspecto, por lo menos muy importante, a la majestad de la justicia y a los derechos adquiridos de los magistrados y los funcionarios.

Es deber de lealtad pedir al señor diputado Falabella —en nombre de la mayoría de las comisiones de Justicia y de Previsión y Seguridad Social— que retire su propuesta. Puede ser que estudiada mejor ésta en el seno de la Comisión de Justicia —a la que podría remitirse este nuevo artículo—, por medio de un proyecto de ley podamos encarar con más claridad el aspecto que contempla la proposición del citado legislador.

Sr. Falabella. — Quiero aclarar que no me mueve ningún tipo de rencor, y en manera alguna el deseo de perseguir a nadie. He creído ejercitar el ansia de justicia de mi pueblo. En consecuencia, no retiro el artículo propuesto.

Sr. Presidente (Busacca). — La Presidencia interpreta que el señor diputado Calabrese ha expresado que la mayoría de la comisión no acepta el artículo propuesto por el señor diputado Falabella.

Sr. Calabrese. — Así es, señor presidente.

Sr. Sánchez Toranzo. — Pido la palabra para una brevísima aclaración.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Sánchez Toranzo.

Sr. Sánchez Toranzo. — No diré que he sido sorprendido, pero sí que he recibido una gran satisfacción del señor diputado Massolo, quien con toda caballerosidad, y como cuadra a un hombre de bien, me ha manifestado que la expresión «móviles ocultos» que imputaba al señor ministro de Justicia, la daba por no pronunciada. No podía ser menos, cuando dicho ministro manifestó: «Nosotros, los del Frente Justicialista de Liberación, tenemos un respeto reverencial por la justicia», para expresar así, en brevísimas palabras, el concepto y la valorización que hacemos del Poder Judicial. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Busacca). — El artículo 7º es de forma. Queda sancionado el proyecto de ley (1).

Se comunicará al Honorable Senado.

35

SITUACION DE CIUDADANOS ARGENTINOS EN CHILE

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Vittar.

Sr. Vittar. — Compañero presidente, compañeros diputados y señores diputados: un conjunto de compañeros diputados del Frente Justicialista de Liberación y del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical ha presentado un proyecto de resolución sobre el problema que en estos momentos están atravesando tres ciudadanos argentinos en la República de Chile, donde han sido juzgados y condenados a la pena de muerte.

En ese proyecto diputados de casi todos los bloques de esta Cámara piden que el Poder Ejecutivo nacional solicite al gobierno de Chile la suspensión de los fusilamientos de los tres ciudadanos argentinos que, según las crónicas periodísticas, van a ser fusilados en el día de la fecha.

Solicito que por Secretaría se lea el proyecto de resolución y que luego se resuelva su tratamiento sobre tablas.

Sr. Presidente (Busacca). — Por Secretaría se dará lectura del proyecto de resolución.

Sr. Secretario (Rocamora). — Dice así:

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1º — Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que urgentemente informe a esta Honorable Cámara si tiene conocimiento que el ciudadano argentino Pedro Damian Tsakoumagkos Corzo se encuentra detenido en el Estadio Nacional de Santiago de Chile —República de Chile— a la orden de la junta militar de dicho país, y, en caso afirmativo, si sabe que este ciu-

(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice.